CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
13 JUN. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 14:54 h.

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano".

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Han sido remitidos para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera los proyectos de ley siguientes:

a) Proyecto de Ley 118/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del Congresista José León Luna Gálvez, que propone la "Ley que crea el nuevo sistema de financiamiento y aseguramiento previsional mixto".
b) Proyecto de Ley 344/2021-CR actualizado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que propone la "Ley que declara de interés nacional la creación del sistema previsional complementario por consumo".
c) Proyecto de Ley 551/2021-CR actualizado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, que propone la "Ley marco de creación del sistema integrado universal de pensiones".
d) Proyecto de Ley 866/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del Congresista María Elizabeth Taipe Coronado, que propone la "Ley que crea un sistema de beneficios para personal que realizan servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de las plataformas digitales".
e) Proyecto de Ley 912/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, que propone la "Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones para optimizar la protección del derecho de propiedad".
f) Proyecto de Ley 1306/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de la Congresista Silvia María Monteza Facho, que propone la "Ley que propone crear el fondo previsional para recién nacidos financiado con aportes alternativos".
g) Proyecto de Ley 1356/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Avanza País, a iniciativa de la Congresista Rosselli Amuruz Dulanto, que propone la "Ley que crea

una fuente complementaria para financiar las pensiones individuales: ahorro para mi vejez".

h) Proyecto de Ley 1513/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Juan Carlos Mori Celis, que propone la "Ley que autoriza a entidades del sistema financiero la apertura de cuentas previsionales".
i) Proyecto de Ley 1595/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Cambio Democrático – Juntos por el Perú, a iniciativa de la Congresista Isabel Cortez Aguirre, que propone la "Ley que crea el fondo previsional de los trabajadores mototaxistas para incorporarlos al sistema nacional de pensiones".
j) Proyecto de Ley 1922/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 3 de mayo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 5 de mayo 2022.
k) Proyecto de Ley 2047/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Democrático, a iniciativa del Congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, que propone la "Ley para que las pérdidas de los fondos se compartan entre empresas y afiliados, regula las comisiones de las AFP y permite que los afiliados participen en sus directorios y en los de las empresas en que inviertan".
l) Proyecto de Ley 2110/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del Congresista José León Luna Gálvez, que propone la "Ley que regula el cobro de la retribución en el sistema privado de administración de fondos de pensiones, sujetas al desempeño y rentabilidad a favor del afiliado".
m) Proyecto de Ley 2659/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Democrático, a iniciativa de la Congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional que fortalece, transparenta y crea el sistema único de pensiones – SUP".
n) Proyecto de Ley 2718/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa de la María Grimaneza Congresista Acuña Peralta, que propone la "Ley que establece la modificación del Decreto Ley 25897, Ley que crea el sistema privado de administración de fondo de pensiones, conformado por las administradoras privadas de fondo de pensiones AFP".

o) Proyecto de Ley 2728/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Jorge Luis Flores Ancachi, que propone la "Ley que modifica la Ley 25897, a fin de promover que los fondos de los afiliados sin herederos de las AFPs, sean transferidos al estado".
p) Proyecto de Ley 2880/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Wilson Soto Palacios, que propone la "Ley que modifica el artículo 24 del Decreto Ley Nº 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, para establecer las pérdidas entre afiliados y AFP".
q) Proyecto de Ley 3133/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso, a iniciativa de la Congresista María Grimaneza Acuña Peralta que presenta la "Ley propone incorporar precisiones al artículo 2 de la Ley Nº 30478, Ley que modifica el artículo 40 y la Vigésima Cuarta Disposición Final y Transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones".
r) Proyecto de Ley 3227/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la Congresista María Elizabeth Taipe Coronado, que propone la "Ley de reforma integral del sistema de pensiones".
s) Proyecto de Ley 4087/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista Rosangella Andrea Barbarán Reyes, que propone la "Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones y establece la retribución por productividad".
t) Proyecto de Ley 4200/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del Congresista José Luis Elías Ávalos, que propone la "Ley que modifica el artículo 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Fondos de AFP".
u) Proyecto de Ley 4366/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del Congresista Alejandro Soto Reyes, que propone la "Ley

que promueve la equidad en la gestión de los fondos del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones- AFP".

v) Proyecto de Ley 4528/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos, que propone la "Ley que faculta a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones a disponer de hasta el 50% del fondo acumulado en su cuenta individual para la compara o el pago del crédito hipotecario de una única vivienda o inmueble".
w) Proyecto de Ley 4743/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista Rosangella Andrea Barbarán Reyes, que propone la "Ley de reforma y universalización del sistema previsional peruano".
x) Proyecto de Ley 4864/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del Congresista José Luna Gálvez, que propone la "Ley que precisa la Ley 31670, "Ley que crea las pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios alternativos con fines previsionales".
y) Proyecto de Ley 4921/2022-CR presentado por la Congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, que propone la "Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 30003, a fin de garantizar la justiciabilidad del derecho de acceso a la pensión de los trabajadores y pensionistas pesqueros".
z) Proyecto de Ley 5150/2022-CR presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano".

Luego de la exposición y debate en la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 9 de junio de 2023 se acordó por mayoría la aprobación del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano"; con catorce (14) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán

Reyes, Ilich Fredy López Ureña, Víctor Seferino Flores Ruiz, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Silvia María Monteza Facho, Rosio Torres Salinas, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Alejandro Enrique Cavero Alva, José Enrique Jerí Oré, María del Carmen Alva Prieto (miembro accesitario del Grupo Parlamentario Acción Popular) y Esmeralda Nieves Limachi Quispe (miembro accesitario del Grupo Parlamentario Perú Democrático); y nueve (09) votos en contra, de los señores congresistas José Waldemar Cerrón Rojas, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Alex Antonio Paredes Gonzales, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Isabel Cortez Aguirre, Carlos Javier Zeballos Madariaga, Carlos Antonio Anderson Ramírez y Guido Bellido Ugarte.

I. SITUACIÓN PROCESAL DE LAS PROPUESTAS

a) El Proyecto de Ley 118/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 2 de setiembre de 2021, fue decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 6 de setiembre de 2021 y a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos como segunda comisión dictaminadora el 7 de octubre de 2021.
b) El Proyecto de Ley 344/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 01 de octubre de 2021, fue decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 05 de octubre de 2021 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 05 de octubre de 2021.
c) El Proyecto de Ley 551/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 26 de octubre de 2021, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 03 de noviembre de 2021 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 03 de noviembre de 2021.

d) El Proyecto de Ley 866/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 30 de noviembre de 2021, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 01 de diciembre de 2021.
e) Proyecto de Ley 912/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 7 de diciembre de 2021, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 9 de diciembre 2021.
f) El Proyecto de Ley 1306/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 14 de febrero de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 16 de febrero de 2023.
g) El Proyecto de Ley 1356/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 22 de febrero de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 24 de febrero de 2022.
h) El Proyecto de Ley 1513/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 23 de marzo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 28 de marzo de 2022.
i) El Proyecto de Ley 1595/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 01 de abril de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 06 de abril de 2022 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 06 de abril de 2022.
j) Proyecto de Ley 1922/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 3 de mayo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 5 de mayo 2022.
k) El Proyecto de Ley 2047/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 17 de mayo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía,

Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 23 de mayo de 2022.

l) El Proyecto de Ley 2110/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 25 de mayo de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 26 de mayo de 2022.

m) El Proyecto de Ley 2659/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 19 de julio de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 20 de julio de 2022 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 20 de julio de 2022.

n) El Proyecto de Ley 2718/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 27 de abril de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 23 de agosto de 2022.

o) El Proyecto de Ley 2728/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 26 de julio de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 23 de agosto de 2022.

p) El Proyecto de Ley 2880/2021-CR CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 23 de agosto de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 24 de agosto 2022.

q) El Proyecto de Ley 3133/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 21 de setiembre de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 23 de setiembre 2022.

r) El Proyecto de Ley 3227/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 06 de octubre de 2022, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora

el 10 de octubre de 2022 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 10 de octubre de 2022.

s) El Proyecto de Ley 4087/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 27 de enero de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 01 de febrero de 2023.

t) El Proyecto de Ley 4200/2022-CR CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 8 de febrero de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 10 de febrero 2023.

u) El Proyecto de Ley 4366/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 2 de marzo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 3 de marzo 2023.

v) El Proyecto de Ley 4528/2022-CR CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 22 de marzo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 23 de marzo de 2023.

w) El Proyecto de Ley 4743/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 17 de abril de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 19 de abril de 2023 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 19 de abril de 2023.

x) El Proyecto de Ley 4864/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 3 de mayo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 4 de mayo de 2023.

y) El Proyecto de Ley 4921/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 8 de mayo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora

el 9 de mayo de 2023 y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora el 9 de mayo de 2023.

z) El Proyecto de Ley 5150/2022-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 23 de mayo de 2023, fue decretado a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como primera comisión dictaminadora el 25 de mayo de 2023 y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión dictaminadora.

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

El Proyecto de Ley 118/2021-CR tiene por objeto crear el nuevo Sistema de Financiamiento y Aseguramiento Previsional Mixto para todos los peruanos, independientemente de su sexo, raza, religión, idioma u ocupación. Es de naturaleza mixta: pública y privada, con vigencia, para el beneficiario, desde su nacimiento hasta su fallecimiento y con la finalidad de obtener una pensión digna.
Este sistema no sustituye al Sistema Privado de Pensiones SPP, ni al Sistema Nacional de Pensiones SNP, sino que lo complementa y tiene un carácter inclusivo y participativo.

El Proyecto de Ley 344/2021-CR tiene por objeto la creación del Sistema Previsional Complementario por Consumo, el cual es financiado con un porcentaje del Impuesto General a las Ventas que paguen los consumidores finales por la adquisición de bienes y servicios, y tiene el propósito de contribuir al otorgamiento de una pensión para todas aquellas personas naturales que cumplan los requisitos que establece la presente Ley, y que otorgue protección ante los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento.

El Proyecto de Ley 551/2021-CR tiene como objetivo lograr que todas las personas accedan progresivamente a una pensión de jubilación, invalidez y sobrevivencia digna y justa y gastos de sepelio, que permita atender las contingencias y estados de necesidad básicos, evitando situaciones de pobreza, en tanto cumplan con los requisitos normativos correspondientes.

El Proyecto de Ley 866/2021-CR tiene por objeto la creación de un sistema previsional alternativo para las personas que se dedican a brindar servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales en el territorio nacional, así como a todas aquellas personas que desarrollan actividades económicas fuera de planillas; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10° de la Constitución Política del Perú.

El Proyecto de Ley 912/2021-CR tiene por objeto enfatizar que los fondos de pensiones son inembargables, es decir, que no puedan ser gravados ni ejecutados por cualquier tipo de deuda; asimismo, que sean intangibles, entendiéndose que no puedan ser destinados a ninguna finalidad distinta a la de cubrir pensiones de jubilación de sus propietarios; y, que gocen de una protección frente a la expropiación.

El Proyecto de Ley 1306/2021-CR tiene por objeto declarar a la placenta como activo de propiedad del recién nacido y con la venta de ello, capitalice de forma obligatoria en una cuenta individual supervisado por el Estado, que sólo podrá ser utilizado con fin previsional para garantizar su pensión de jubilación.

El Proyecto de Ley 1356/2021-CR tiene por objeto de contribuir y fortalecer al sistema de seguridad social, por cuyo motivo se crea una nueva fuente complementaria para financiar las pensiones individuales, la cual constituirá en un porcentaje del Impuesto General a las Ventas que paguen los consumidores finales por la adquisición de bienes y servicios y asimismo, contribuir sosteniblemente al otorgamiento de una pensión para todas aquellas personas naturales que siendo contribuyentes de cuarta y quinta categoría obtienen un porcentaje del Impuesto a la Renta, en ambos casos deben cumplir los requisitos que establece la presente Ley, el Reglamento y disposiciones que para este efecto apruebe la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones (SBS).

El Proyecto de Ley 1513/2021-CR tiene por objeto establecer el marco legal para la apertura de cuentas de ahorros previsionales en entidades del sistema financiero a

solicitud expresa y voluntaria de los afiliados activos y pasivos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para el traslado del saldo total acumulado de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) a una entidad del sistema financiero supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS).

El Proyecto de Ley 1595/2021-CR tiene por objeto crear el fondo previsional de los Trabajadores Mototaxitas para incorporarlos al Sistema Nacional de Pensiones.

El Proyecto de Ley 1922/2021-CR tiene por objeto crear un fondo de pensiones individuales para los transportistas públicos independientes, acorde a su consumo de combustible.

El Proyecto de Ley 2047/2021-CR tiene por objeto establecer que las pérdidas de los fondos se compartan entre las empresas y afiliados, regula las comisiones de las AFP y permite que los afiliados participen en sus directorios y en los de las empresas en que inviertan.

El Proyecto de Ley 2110/2021-CR tiene por objeto establecer el cobro de la retribución por parte de las doras Privadas de Fondos de Pensiones, por la administración del fondo de los afiliados, la cual está sujeta a su desempeño y siempre y cuando exista rentabilidad real a favor del afiliado, conforme a los márgenes que determina la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Proyecto de Ley 2659/2021-CR tiene por objeto crear el Sistema Único de Pensiones – SUP, que garantice una pensión de jubilación, invalidez, y sobrevivencia digna y universal; y un gasto de sepelio acorde con la realidad, construida por aportes contributivos y no contributivos. Asimismo, fortalecer y transparentar el Sistema Nacional de Pensiones, y el Sistema Privado de Pensiones, regulados por los Decretos Ley 19990 y Ley 25897, respectivamente; con participación activa de los afiliados y

jubilados, para construir confianza que promueva una mayor contribución y rentabilidad de las Cuentas Individuales de Capitalización con fines pensionables.

El Proyecto de Ley 2718/2021-CR tiene por objeto establecer el equilibrio entre los intereses de los afiliados y los intereses de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

El Proyecto de Ley 2728/2021-CR tiene por objeto modificar la Ley 25897 con la finalidad de promover que los fondos de los afiliados sin herederos de las AFPs sean transferidos al Estado.

El Proyecto de Ley 2880/2021-CR tiene por objeto modificar el artículo 24 de Decreto Ley 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), conformado por las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, con la finalidad de establecer la participación compartida en las pérdidas de los fondos, entre los administradores de fondos y los afiliados.

El Proyecto de Ley 3133/2022-CR. Tiene por objeto la incorporación de precisiones al artículo 2 de la Ley 30478, Ley que modifica el artículo 40 y la Vigésima Cuarta Disposición Final y Transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF.

El Proyecto de Ley 3227/2021-CR tiene por objeto establecer la reforma integral del sistema de pensiones que integra el sistema nacional de pensiones y el sistema privado de pensiones.
El Proyecto de Ley 4087/2021-CR tiene por objeto modificar el texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones y establece retribución por productividad.

El Proyecto de Ley 4200/2021-CR tiene por objeto modificar el artículo 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones — D.S. N° 054-97-EF; y con ello, autorizar a

todo afiliado al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Fondos para la compra o amortización de un primer inmueble.

El Proyecto de Ley 4366/2022-CR. Tiene por objeto promover la equidad en la gestión de los fondos del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones - AFP.

El Proyecto de Ley 4528/2022-CR tiene por objeto La presente Ley tiene por objeto ampliar los alcances del artículo 40 de la Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054- 97-EF, para facultar a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP el uso de hasta el 50% del fondo acumulado en la cuenta individual para la compra o el pago del crédito hipotecario de una única vivienda o inmueble.

El Proyecto de Ley 4743/2021-CR tiene por objeto la reforma y la universalización el Sistema Previsional Peruano para optimizar los aportes y las pensiones de los afiliados a fin de garantizar una pensión digna y justa a todas las personas naturales que cumplan con los requisitos en la presente Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política que obliga al Estado Peruano a reconocer como un derecho universal y progresivo de toda persona, el acceso a la seguridad social.

El Proyecto de Ley 4864/2022-CR tiene por objeto precisar el momento en el cual el afiliado al Sistema Privado de Pensiones que opte por acogerse a los beneficios de la Ley 31670, Ley que crea las pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios alternativos con fines previsionales, pueda acceder al excedente del Saldo Mínimo de Jubilación (SMJ).

El Proyecto de Ley 4921/2022-CR tiene por objeto modificar el artículo 6 de la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros.

El Proyecto de Ley 5150/2022-CR tiene por objeto establecer un marco normativo para la reforma integral del sistema previsional peruano.

III. MARCO NORMATIVO

3.1 Constitución Política del Perú, artículos 10 y 11.
3.2 Decreto Ley 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.
3.3 Decreto Ley 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones - SPP, conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - AFP.
3.4 Decreto Ley 20530, que crea el Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990.
3.5 Decreto Legislativo 1086-2013, que aprueba la Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente.
3.6 Ley 28389, Ley de Reforma de los artículos 11, 103 y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.
3.7 Ley 28449, Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley 20530.
3.8 Ley 27617, Ley que dispone la restructuración del Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 19990 y modifica el Decreto Ley 20530 y la ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
3.9 Ley 30082, Ley que modifica la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
3.10 Decreto Supremo 054-97-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), y sus modificaciones.
3.11 Decreto Supremo 004-98-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, y sus modificaciones.

IV. OPINIONES SOLICITADAS

4.1 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

1. Mediante Oficio 113-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de setiembre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 118/2021-CR.

2. Mediante Oficio 412-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de noviembre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 118/2021-CR.

3. Mediante Oficio 233-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

4. Mediante Oficio 407-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de noviembre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

5. Mediante Oficio 1633-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

6. Mediante Oficio 1691-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de abril de 2022 se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

7. Mediante Oficio 2180-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

8. Mediante Oficio 2251-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

9. Mediante Oficio 136-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2659/2021-CR.

10. Mediante Oficio 193-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2718/2021-CR.

11. Mediante Oficio 1194-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

12. Mediante Oficio 1850-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

13. Mediante Oficio 1340-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

14. Mediante Oficio 1661-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR.

15. Mediante Oficio 1505-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 17 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4366/2022-CR.

16. Mediante Oficio 206-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 2880/2022-CR.

17. Mediante Oficio728 -2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 912/2022-CR.

18. Mediante Oficio 692-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 16 de noviembre de 2021, se solicitó opinión la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

19. Mediante Oficio 2000-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

20. Mediante Oficio 1373 -2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

21. Mediante Oficio 1985 -2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 22 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR.

22. Mediante Oficio 1303-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 4 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR.

4.2 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

1. Mediante Oficio 079-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de setiembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 118/2021-CR.

2. Mediante Oficio 232-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

3. Mediante Oficio 406-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de noviembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

4. Mediante Oficio 1098-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

5. Mediante Oficio 1375-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 09 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

6. Mediante Oficio 1632-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

7. Mediante Oficio 2358-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 23 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

8. Mediante Oficio 1694-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de abril de 2022 y reiterado con Oficio 2153-2021-2022-SMMF.CEBFIF de fecha 22 de junio

de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

9. Mediante Oficio 2179-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 6 de junio de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

10. Mediante Oficio 2250-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

11. Mediante Oficio 133-2022-2023-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 23 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 2659/2021-CR.

12. Mediante Oficio 169-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 2718/2021-CR.

13. Mediante Oficio 170-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

14. Mediante Oficio 478-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de octubre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 3227/2022-CR.

15. Mediante Oficio 1284-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR.

16. Mediante Oficio 1849-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

17. Mediante Oficio 1856-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

18. Mediante Oficio 1337-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

19. Mediante Oficio 2344-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 23 de junio de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

20. Mediante Oficio 1660-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR.

21. Mediante Oficio 1504-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 17 de marzo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 4366/2022-CR.

22. Mediante Oficio 322-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 3133/2022-CR.

23. Mediante Oficio 182-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 2880/2022-CR.

24. Mediante Oficio 727-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

25. Mediante Oficio 1062-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de febrero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

26. Mediante Oficio 1409-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

27. Mediante Oficio 689-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 16 de noviembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

28. Mediante Oficio 1070-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de febrero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

29. Mediante Oficio 1401-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

30. Mediante Oficio 1996-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

31. Mediante Oficio 1356-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

32. Mediante Oficio 1984-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 22 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR.

33. Mediante Oficio 1301-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 4 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR.

4.3 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

1. Mediante Oficio 080-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de setiembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 118/2021-CR.

2. Mediante Oficio 1705-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de abril de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

3. Mediante Oficio 134-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 23 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de sobre el Proyecto de Ley 2659/2021-CR.

4. Mediante Oficio 191-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

5. Mediante Oficio 1851-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 4743/2021-CR.

6. Mediante Oficio 1338-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

7. Mediante Oficio 339-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 3133/2021-CR.

8. Mediante Oficio 691-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 16 de noviembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

4.4 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

1. Mediante Oficio 520-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 6 de diciembre de 2021, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

2. Mediante Oficio 1629-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

3. Mediante Oficio 2778-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

4. Mediante Oficio 2249-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

5. Mediante Oficio 1272-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR.

6. Mediante Oficio 1855-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

7. Mediante Oficio 1336-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

8. Mediante Oficio 166-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 2880/2022-CR.

9. Mediante Oficio 1383-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

10. Mediante Oficio 1306-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 4 de marzo de 2022, se solicitó opinión al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR.

4.5 Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)

1. Mediante Oficio 519-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 6 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

2. Mediante Oficio 1634-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 11 abril de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

3. Mediante Oficio 1936-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de mayo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

4. Mediante Oficio 2181-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

5. Mediante Oficio 2252-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

6. Mediante Oficio 213-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2718/2021-CR.

7. Mediante Oficio 214-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Superintendente de Banca, Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

8. Mediante Oficio 494-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 3227/2022-CR.

9. Mediante Oficio 1303-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR.

10. Mediante Oficio 1854-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

11. Mediante Oficio 1341-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

12. Mediante Oficio 1663-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR.

13. Mediante Oficio 1506-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 17 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4366/2022-CR.

14. Mediante Oficio 346-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 3133/2022-CR.

15. Mediante Oficio 216-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2880/2022-CR.

16. Mediante Oficio 729-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

17. Mediante Oficio 1382-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

18. Mediante Oficio 1986-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 22 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR.

19. Mediante Oficio 1304-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 4 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR.

4.6 Oficina de Normalización Previsional (ONP)

1. Mediante Oficio 114-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de setiembre de 2021, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 118/2021-CR.

2. Mediante Oficio 408-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de noviembre de 2021, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

3. Mediante Oficio 1732-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de abril de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

4. Mediante Oficio 135-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 23 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 2659/2021-CR

5. Mediante Oficio 487-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 3227/2022-CR.

6. Mediante Oficio 1852-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

7. Mediante Oficio 1339-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 08 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 1356/2021-CR.

8. Mediante Oficio 1302-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 4 de marzo de 2022, se solicitó opinión a la Oficina de Normalización Previsional sobre el Proyecto de Ley 1306/2021-CR.

4.7 Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones (AAFP)

1. Mediante Oficio 518-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 6 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

2. Mediante Oficio 2177-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 7 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2047/2021-CR.

3. Mediante Oficio 2248-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 10 de junio de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2110/2021-CR.

4. Mediante Oficio 153-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2718/2021-CR.

5. Mediante Oficio 154-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2728/2021-CR.

6. Mediante Oficio 460-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 26 de octubre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 3227/2022-CR.

7. Mediante Oficio 1259-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 09 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4087/2022-CR.

8. Mediante Oficio 1853-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

9. Mediante Oficio 1662-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 11 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4528/2022-CR.

10. Mediante Oficio 1507-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 17 de marzo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4366/2022-CR.

11. Mediante Oficio 296-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 29 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 3133/2022-CR.

12. Mediante Oficio 155-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 27 de setiembre de 2022, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 2880/2022-CR.

13. Mediante Oficio 726-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de diciembre de 2021, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 912/2021-CR.

14. Mediante Oficio 1381-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 24 de febrero de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4200/2022-CR.

15. Mediante Oficio 1987-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 22 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4864/2022-CR.

16. Mediante Oficio 1853-2022-2023-RABR-CEBFIF-CR de fecha 04 de mayo de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones sobre el Proyecto de Ley 4743/2022-CR.

4.8 La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)

1. Mediante Oficio 234-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó opinión a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios sobre el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

2. Mediante Oficio 1621-2022-2023 -RABR-CEBFIF-CR de fecha 10 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

4.9 Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)

1. Mediante Oficio 1620-2022-2023 -RABR -CEBFIF-CR de fecha 10 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Asociación de Bancos del Perú sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

4.10 Defensoría del Pueblo

1. Mediante Oficio 1619-2022-2023 -RABR -CEBFIF-CR de fecha 10 de abril de 2023, se solicitó opinión a la Defensoría del Pueblo sobre el Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

4.11 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS

1. Mediante Oficio 521-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 06 de diciembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre el Proyecto de Ley 551/2021-CR.

2. Mediante Oficio 1935-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 18 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de sobre el Proyecto de Ley 1595/2021-CR.

4.12 Seguro Social de Salud - ESSALUD

- Mediante Oficio 235-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de octubre de 2021, se solicitó opinión al Seguro Social de Salud sobre el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

4.13 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT

1. Mediante Oficio 2001-2022-2023-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

4.14 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

1. Mediante Oficio 690-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 16 de noviembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley 866/2021-CR.

2. Mediante Oficio 1999-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

4.15 Ministerio de Ambiente – MINAM

- Mediante Oficio 1997-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

4.16 Ministerio de Energía y Minas – MINEM

- Mediante Oficio 1998-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 20 de mayo de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Trabajo de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley 1922/2021-CR.

V. OPINIONES RECIBIDAS

5.1 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

1. Mediante Oficio Nº D002830-2021-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001602-2021-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 118/2021-CR, no resulta viable, pues los representantes del Congreso de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público el cual colisiona con lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política. En consecuencia, la Presidencia del Consejo de Ministros concluye que no es competente para emitir opinión técnica respecto al citado proyecto de ley.

2. Mediante Oficio N° D000116-2022-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001761-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 344/2021-CR, en la cual considera que la Presidencia del Consejo de Ministros no es competente para emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 344/2021-CR, Ley que declara de interés nacional la creación del Sistema Previsional Complementario por Consumo.

3. Mediante Oficio N° D002317-2022-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001413-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 344/2021-CR, resulta jurídicamente no

viable pues para su implementación requiere recursos adicionales del Tesoro Público, es decir, se trata de una propuesta con iniciativa de gasto, por ende, inconstitucional al inobservar lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución.

4. Mediante Oficio Nº D000294-2022-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000100-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 551/2021-CR, resulta no viable pues los representantes del Congreso de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público el cual colisiona con lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política.

5. Mediante Oficio Nº D000263-2022-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000058-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que sobre la propuesta legislativa 912/2021-CR, no corresponde emitir opinión precisando que el Proyecto de Ley contiene materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio de Economía y Finanzas.

6. Mediante Oficio Nº D000966-2022-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000570-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 1513/2021-CR, en la cual considera que la Presidencia del Consejo de Ministros no es competente para emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N° 1513/2021-CR, Ley que autoriza a entidades del sistema financiero la apertura de cuentas previsionales.

7. Mediante Oficio Nº D003194-2022-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D001731-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros

considera que sobre el Proyecto de Ley N° 1595/2021-CR, no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

8. Mediante Oficio Nº D001475-2022-PCM-SG, de fecha 16 de junio de 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D00881-2022-PCM-OGAJ, de fecha 15 de junio de 2022, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que sobre el Proyecto N° 2047/2021-CR, no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

9. Mediante Oficio Nº D001584-2022-PCM-SG, de fecha 28 de junio de 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D00922-2022-PCM-OGAJ, de fecha 22 de junio de 2022, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que sobre el Proyecto N° 2110/2021-CR no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

10. Mediante Oficio Nº D003202-2022-PCM-SG, de fecha 01 de diciembre de 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D001734-2022-PCM-OGAJ, de fecha 23 de noviembre de 2022, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que sobre el Proyecto N° 2659/2021-CR no le corresponde emitir opinión debido a que resulta no viable al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Economía y Finanzas, no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público el cual colisiona con lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política.

11. Mediante Oficio Nº D000675-2023-PCM-SG, de fecha 15 de marzo de 2023, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D000359-2023-PCM-OGAJ, de fecha 15 de marzo de 2023, mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que sobre el Proyecto N° 2718/2021-CR no le corresponde emitir opinión, pero recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

12. Mediante el Oficio N° 2633-2022-PCM-SG, mediante la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D001467-2022-PCM-OGAJ, elaborado por la oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 1356/2021-CR, es No Viable, porque contiene materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Economía y Finanzas, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

13. Mediante Oficio Nº D00854-2023-PCM-SG de fecha 29 de marzo de 2023 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000404-2023-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que la Presidencia del Consejo de Ministros por competencia, no corresponde emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N°4366/2021-CR, Ley que promueve equidad en la gestión de los fondos del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones - AFP.

14. Mediante Oficio Nº D000766-2023-PCM-SG de fecha 20 de marzo de 2023 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000371-2023-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que la Presidencia del Consejo de Ministros por competencia, no corresponde emitir opinión acerca del Proyecto de Ley N°

2880/2022-CR, "Ley que modifica la Ley N° 25897, a fin de promover que los fondos de los afiliados sin herederos de las AFPS, sean transferidos al estado".

15. Mediante Oficio Nº D002634-2022-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D001472-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que sobre el Proyecto de Ley N° 1922/2021-CR, resulta no viable al contener el Proyecto de Ley materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Economía y Finanzas, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal, pues los representantes del Congreso de la República no tienen la potestad de presentar iniciativas legislativas que creen ni aumenten gasto público el cual colisiona con lo preceptuado por el artículo 79 de la Constitución Política.

16. Mediante Oficio Nº D000652-2023-PCM-SG, de fecha 14 de marzo de 2023 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000318-2023-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 4200/2022-CR, que propone la Ley que modifica el art. 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los fondos de AFP, por competencia, no les corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión.

17. Mediante Oficio N° D000616-2022-PCM-SG, de fecha 17 de marzo de 2022 la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe N° D000357-2022-PCM-OGAJ mediante el cual considera que el Proyecto de Ley se encuentran dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Oficio Múltiple N° D000584-2022-PCM-SC se trasladó a dichos Ministerios el pedido de opinión formulado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del

Congreso de la República, precisando que las opiniones que se emitan sean remitidas directamente a la referida Comisión Congresal.

5.2 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

1. Mediante Oficio Nº 1402-2021-EF/10.01, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el informe N° 224-2022-EF/65.03 de la Dirección General de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado el cual consolida la opinión Dirección General del Tesoro Público - DGTP, Dirección General de Presupuesto Público - DGPP, Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos - DGGFRH, Dirección General de Política de Ingresos Públicos - DGPIP emiten opinión desfavorable al Proyecto de Ley 118/2021-CR, la propuesta legislativa contraviene las reglas para la estabilidad presupuestaria, según lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley 31085, Ley del equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2021, así como el principio del equilibrio presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, y lo dispuesto en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440; y, la prohibición de la iniciativa de gasto congresal contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

2. Mediante Oficio Nº 1409-2021-EF/10.01, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el informe N° 223-2022-EF/65.03 de la Dirección General de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado el cual consolida la opinión Dirección General del Tesoro Público - DGTP, Dirección General de Presupuesto Público - DGPP, Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos - DGGFRH, Dirección General de Política de Ingresos Públicos – DGPIP, emiten opinión desfavorable al Proyecto de Ley 344/2021-CR al considerar la creación de un Fondo constituye un mecanismo contrario al Principio fundamental de la tesorería del Estado (Principio de Unidad de Caja), que están orientados para garantizar que los recursos públicos sean adecuadamente canalizados y ejecutados en el marco de las

Leyes Anuales del Presupuesto del Sector Público, contraviniendo en particular el principio de oportunidad, en tanto afecte la disponibilidad de recursos del Tesoro Público, para la atención de las obligaciones contenidas en el presupuesto del Sector Público.

3. Mediante Oficio Nº 882-2022-EF/10.01, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el informe N° 088-2022-EF/65.03 de la Dirección General de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, emite opinión desfavorable al Proyecto de Ley 1513/2021-CR, la propuesta no toma en cuenta que el portafolio de inversiones de la Administración Privadas de Fondo de Pensiones (AFP), es diversificado entre inversiones de corto, mediano y largo plazo entre diferentes tipos de activos, sectores y mercados, tanto en moneda nacional como extranjera; mientras que las empresas del sistema financiero tienen como función principal la intermediación financiera, lo que implica captar depósitos del público, pagando por ellos una tasa pasiva, y empleando dicho recursos para la colocación de créditos a personas naturales y empresas, a una tasa de interés activa. Asimismo, la propuesta de la cuenta de ahorro previsional en el sistema financiero, no define explícitamente ninguna medida que se alinee a los principios básicos que rigen la seguridad social, pues esta cuenta debe tener un carácter especial y de naturaleza distinta a cualquier otro producto que ofrezca el sistema financiero a fin de asegurar la intangibilidad e inembargabilidad de los fondos de pensiones administrados.

4. Mediante Oficio Nº 873-2022-EF/10.01, de fecha 11 de julio de 2022, la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, opina desfavorablemente sobre el Proyecto de Ley N° 2047/2021-CR, por no haber sustento técnico que lo fundamente para la selección, participación, deberes y obligaciones de los representantes de los afiliados en los directorios de las AFP, considerando que la actual normativa contempla la participación de directores independientes así como la transparencia de la información.

5. Mediante Oficio Nº 053-2023-EF/10.01, de fecha 12 de enero de 2023, la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado opina sobre el Proyecto de Ley N° 2110/2021-CR que la medida propuesta resulta imprecisa e inviable debido a la libertad de organización y de empresa, carece de sustento técnico dado que no se ha establecido algún criterio para la fijación de la retribución de las AFP, como tampoco hace referencia al período de tiempo para evaluar la rentabilidad, o evaluación de la estructura de costos base o gastos administrativos a considerarse para el cobro de la retribución por los servicios que brinda las AFP a lo largo de la vida laboral del trabajador.

6. Mediante Oficio Nº 201-2023-EF/10.01, de fecha 02 de febrero de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0010-2023-EF/65.03 elaborado por la oficina del Viceministro de Economía emite su opinión desfavorable al Proyecto de Ley 2728/2021-CR, la propuesta no toma en consideración que el retiro programado es la modalidad de pensión administrada por una AFP, mediante la cual el afiliado mantiene la propiedad de sus fondos. Es por ello que, en caso de su fallecimiento, el SPP debe salvaguardar los recursos de la CIC a fin de no vulnerar ningún derecho sucesorio, pues se trata de derechos imprescriptibles. Asimismo, no contiene el análisis técnico ni jurídico que viabilice la modificación normativa contenida en la propuesta, ya que no se establece la necesidad de trasladar los recursos de la CIC al Estado, así como la finalidad de la utilización de los mismos.

7. Mediante Oficio Nº 1822-2022-EF/10.01, de fecha 17 de noviembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0126-2022-EF/65.03 elaborado por la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado emite su opinión desfavorable al Proyecto de Ley 3133/2021-CR, la propuesta no precisa si es para la compra de un primer inmueble de acuerdo a lo establecido en la Ley 30478, en ese sentido, señala que el PL 3133 incentiva el uso de fondos previsionales, en perjuicio de las actividades que deben atender en la etapa laboral pasiva y reduce la posibilidad de acceder a mejores pensiones dado que afecta directamente al

nivel de la CIC y consecuentemente al nivel de pensión. Por otro lado, señala que, utilizar el sistema de pensiones para otros fines diferentes a una pensión de jubilación, desvirtúa el fin del sistema de pensiones que es la protección del afiliado durante la vejez. Finalmente, señala que el retiro de los fondos planteados tendría un impacto sobre la liquidez del sistema financiero, pudiendo generar pérdidas adicionales para la economía.

8. Mediante Oficio Nº 2069-2022-EF/10.01, de fecha 30 de diciembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0135-2022-EF/65.03 elaborado por la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado emite su opinión desfavorable al Proyecto de Ley 2880/2022-CR, señala que la propuesta afecta la libertad de organización, ya que establece limitaciones a las políticas de precios, lo cual afecta la competencia en el mercado y desincentiva la participación de las empresas en el mercado. Por otro lado, precisa que, no se encuentra sustento técnico que fundamente el no pago de la comisión y que las AFP asuman la pérdida por rentabilidad negativa. Finalmente, concluye que la propuesta resulta imprecisa e inviable, más aun si se considera que los fondos de pensiones, que son inversiones de largo plazo, no deben ser medidos solamente en el corto plazo, principalmente cuando se maneja distintos tipos de riesgos, siendo la rentabilidad un factor que responde a condiciones del mercado que no siempre pueden ser anticipadas por los administradores de fondos.

9. Mediante Oficio Nº 459-2022-EF/10.01, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0043-2022-EF/61.01 de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, el mismo que consolida la opinión institucional de su sector, emite opinión desfavorable respecto del Proyecto de Ley N° 866/2021-CR, que propone crear un sistema de beneficios para personal que realizan servicios de reparto, mensajería y movilidad por medio de la plataforma digital. Señala que la fórmula legal atenta contra el mandato constitucional de que las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios deberán

regirse por criterios de sostenibilidad financiera, y la disposición de que los miembros del Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gasto público. Por otro lado, señala que, no es claro en el Proyecto de Ley qué porcentaje del IGV sería destinado a las cuentas individuales, si se trata del 5% de la recaudación del IGV o de cinco puntos porcentuales del IGV; en el primer caso el costo fiscal anual sería de S/ 2 095 millones y en el segundo de S/ 13 097 millones. La propuesta es altamente regresiva ya que se desviarían ingresos del Tesoro que hoy benefician a toda la población para financiar cuentas individuales que se concentrarían en las personas de mayores ingresos. Se crearían fondos de pensiones muy desiguales, donde las personas de ingresos más altos podrían gozar de pensiones promedio 50 veces más altas que las personas de menores ingresos. Por otro lado, señala que, a legislación vigente ya establece un tratamiento de inafectación del IR a las rentas provenientes de pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, como la jubilación, en tanto, estas ya tributaron como rentas de quinta categoría previamente como parte de la remuneración de los contribuyentes. Finalmente, entre otros puntos, concluye que el Proyecto estaría modificando el tratamiento para determinar la deducción adicional a las rentas del trabajo, sin tener en cuenta que dicha regulación responde a una finalidad de política que es combatir la evasión y promover la formalización centrándose en aquellos sectores donde existe altos niveles de evasión.

10. Mediante Oficio Nº 316-2023-EF/10.01, reiterado por el Oficio N° 452-2023-EF el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0017-2022-01 de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, emite opinión desfavorable respecto del Proyecto de Ley N° 4200/2022-CR, Ley que modifica el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado Administración de Fondos de Pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los fondos de AFP. En las conclusiones expuestas, señala que la propuesta contraviene lo

dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú e implicaría el incumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Asimismo, opina que la medida incentiva el uso de los fondos previsionales, en perjuicio de las necesidades que deben atenderse en el futuro durante la etapa laboral pasiva, reduciendo la posibilidad de acceder a mejores pensiones. Finalmente, considera que el retiro de los fondos que se plantea implica que la composición de los portafolios de inversión administrados por las AFP sea más líquida con el propósito de prever el posible retiro del saldo disponible en las CIC de los afiliados en el SPP. Con ello habría mayores pérdidas para los afiliados y también podría generar perjuicios para el Estado.

11. Mediante Oficio Nº 718-2022-EF/10.01, de fecha 16 de junio de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0464-2022-EF/42.02 elaborado por la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado emite opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley N° 912/2021-CR de acuerdo con los siguientes argumentos: 1) El artículo 12 de la CPP establece que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles, por lo que esta garantía impide a cualquier tercero e incluso al Estado, afectar por decisión unilateral dichos fondos. 2) Los aportes voluntarios sin fin previsional es la de un ahorro facultativo de los afiliados del SPP, debe de darse un tratamiento diferenciado debido que son productos con similares características y no deben ser regulados de manera distinta.

12. Mediante Oficio Nº 1114-2022-EF/10.01, de fecha 2 de setiembre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 1432-2022-EF/53.05 elaborado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos emite opinión desfavorable sobre el Proyecto de Ley N° 1306/2021-CR.

5.3 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

1. Mediante Oficio Nº 0088-2022-BCRP, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral, considerando los efectos colaterales que tal reforma implicaría sobre todos los agentes e instituciones involucradas. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la población tanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que no sería recomendable la aprobación del Proyecto de Ley 118/2021-CR.

2. Mediante Oficio Nº 0086-2022-BCRP, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral, considerando los efectos colaterales que tal reforma implicaría sobre todos los agentes e instituciones involucradas. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la población tanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que no sería recomendable la aprobación del Proyecto de Ley 344/2021-CR.

3. Mediante Oficio Nº 0309-2021-BCRP, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral, considerando los efectos colaterales que tal reforma implicaría sobre todos los agentes e instituciones involucradas. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la población tanto durante su vida laboral como en su vejez, generar competencia en el sistema de pensiones, aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada, y mejorar la rentabilidad del afiliado. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas son (i) aumentar la cobertura de Pensión 65 y reforzar el apoyo a personas de mayor edad (Pensión 70); (ii) reforma del esquema de pensión mínima en el Sistema Nacional de Pensiones en función de los años de aporte y cuentas individuales nocionales; (iii) establecer una pensión mínima en el Sistema Privado de Pensiones en función de los años de aporte; (iv) reformar el Sistema Nacional de Pensiones con cuentas nominales nocionales, donde los afiliados de AFP se puedan trasladar sin recargo alguno; (v) evaluar la centralización de la recaudación de fondos en los sistemas de pensiones; (vi) traslado automático a la AFP de mayor rentabilidad y mejora de las subastas; y (vii) establecer para cada AFP un portafolio y rendimiento de referencia. Las medidas propuestas contribuirán a mejorar el sistema actual, pero, para alcanzar pensiones adecuadas para todos los ciudadanos, requieren complementarse con reformas estructurales que permitan formalizar la economía y elevar la productividad de los trabajadores. Con ello, estas reformas permitirían ampliar la cobertura del sistema y elevar las pensiones. En consecuencia, considera que no sería recomendable la aprobación del Proyecto de Ley 551/2021-CR.

4. Mediante Oficio Nº 0116-2022-BCRP, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y

público del país debería analizarse de manera integral, considerando los efectos colaterales que tal reforma implicaría sobre todos los agentes e instituciones involucradas. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la población tanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que no sería recomendable la aprobación del Proyecto de Ley 1513/2021-CR.

5. Mediante Oficio Nº 197-2022-BCRP, de fecha 24 de junio de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la poblacióntanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que el Proyecto de Ley 2047/2021-CR en los términos planteados debería ser desestimado.

6. Mediante Oficio Nº 205-2022-BCRP, de fecha 08 de julio de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que, cualquier reforma del sistema

de pensiones privado y público del país debería analizarse de manera integral. La reforma integral de la red de protección social, incluyendo al sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la poblacióntanto durante su vida laboral como en su vejez. Esto requiere una evaluación detallada y profunda con la participación de todas las partes involucradas. Estas propuestas deberían tomar en cuenta las condiciones iniciales del sistema de pensiones y buscar seis grandes objetivos en el tema previsional: (i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; (ii) ampliar la cobertura previsional; (iii) incrementar las tasas de reemplazo; (iv) generar competencia en el sistema de pensiones; (v) aprovechar economías de escala; y (vi) mejorar la rentabilidad del afiliado. En consecuencia, considera que el Proyecto de Ley 2110/2021-CR en los términos planteados debería ser desestimado.

7. Mediante Oficio Nº 0076-2022-BCRP, de fecha 28 de marzo de 2022, el Presidente del Banco Central de Reserva emitieron opinión desfavorable respecto del Proyecto de Ley N° 1356/2021-CR, considerando no recomendable la aprobación de este proyecto de ley debido a que actualmente los sistemas de pensiones, público y privado no cubren a la gran mayoría de la población, las comisiones son altas y las tasas de reemplazo bajas. Además, la reforma de la red de protección social incluyendo el sistema de pensiones, debe garantizar la protección de la población durante toda su vida laboral, mediante una evaluación detallada y profunda, considerando eliminar el riesgo de pobreza en la vejez, ampliar la cobertura previsional, incrementar las tasas de reemplazo, generar competencia en el sistema de pensiones en beneficio de los afiliados, aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada y mejorar la rentabilidad del afiliado.

8. Mediante Oficio Nº 0025-2023-BCRP, de fecha 27 de febrero de 2023, el Presidente del Banco Central de Reserva emite su opinión considerando que se requiere una reforma integral de la red de protección social respecto del Proyecto de Ley N° 4087/2022-CR, incluyendo a los sistemas de pensiones,

que permita proteger a la población durante el periodo de su vida laboral como durante la vejez. Esto requiere una evaluación que permitan a las propuestas una reforma integral considerando eliminar el riesgo de pobreza en la vejez, ampliar la cobertura previsional, incrementar las tasas de reemplazo, generar competencia en el sistema de pensiones en beneficio de los afiliados, aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada y mejorar la rentabilidad del afiliado.

9. Mediante Oficio Nº 0033-2023-BCRP, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que no es conveniente aprobar la propuesta legislativa, por cuanto habría desnaturalización del objetivo los fondos previsionales; señala que las sucesivas leyes que se han aprobado para el retiro de los fondos de pensiones, principalmente, asociados al alivio del impacto económico de la pandemia han significado una reducción del 50.7 por ciento del valor total de los fondos a diciembre de 2019. La publicación de la Ley 31670 que establece una pensión mínima. Los fondos por encima de la cantidad requerida para lograr esa pensión mínima podrían ser retirados facultativamente. Estos retiros adicionales representarían reducciones entre 2,2 y 34,1 por ciento (respectivamente) del valor de fondos de pensiones a diciembre de 2022, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por otro lado, señala que, el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones ya fue modificado para incluir la posibilidad de disponer de hasta el 25% de los fondos para el pago de cuota inicial o para amortizar un crédito hipotecario de primera vivienda y por impacto que la propuesta tendría sobre el valor de los fondos provisionales y la sobre la economía, no se justifica ampliar este porcentaje. Finalmente considera que es innecesario y altamente perjudicial para los afiliados al sistema privado de pensiones aprobar el Proyecto de Ley N° 4200/2022-CR, Ley que modifica el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado Administración de Fondos de Pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los fondos de AFP.

10. Mediante Oficio Nº 0079-2022-BCRP, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que la propuesta legislativa 912/2021-CR, no es conveniente su aprobación debido a requiere una evaluación detallada y profunda, tomando en cuenta los objetivo en el tema previsional: i) eliminar el riesgo de pobreza en la vejez; ii) ampliar la cobertura previsional; iii) incrementar las tasas de reemplazo; iv) generar competencia en el sistema de pensiones; v) aprovechar economías de escala y reducir las barreras de entrada; y vi) mejorar la rentabilidad del afiliado.

11. Mediante Oficio Nº 0071-2022-BCRP, el Presidente del Banco Central de Reserva considera que el Proyecto de Ley 1306/2021-CR, no es conveniente la aprobación de este debido a requiere una evaluación detallada y profunda, tomando en cuenta los objetivo en el tema previsional.

5.4 Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)

1. Mediante Carta Nº 110-2022-PRESIDENCIA/APESEG, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros expreso su total desacuerdo contra el Proyecto de Ley N° 3227-2022-CR, que tiene por objetivo establecer la reforma del Sistema de Pensiones en nuestro país, integrado por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), considerando la edad de jubilación, la pensión de jubilación mínima, y el retiro de los fondos para pensión. Manifiesta que es indispensable que un Proyecto de esta naturaleza aborde una solución al tema de los retiros de fondos previsionales, y por ello sugerimos que se evalúe la alternativa antes descrita.

2. Mediante Carta Nº 164-2022-PRESIDENCIA/APESEG, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros expreso su total desacuerdo contra el Proyecto de Ley N° 3227-2022-CR, que tiene por objetivo establecer

la reforma del Sistema de Pensiones en nuestro país, integrado por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), considerando la edad de jubilación, la pensión de jubilación mínima, y el retiro de los fondos para pensión. Manifiesta que es indispensable que un Proyecto de esta naturaleza aborde una solución al tema de los retiros de fondos previsionales, y por ello sugerimos que se evalúe la alternativa antes descrita.

3. Mediante Carta Nº 078-2023-PRESIDENCIA/APESEG, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros emite su opinión gremial que el Proyecto de Ley N° 4743-2021-CR, que tiene como objetivo la reforma y la universalización del Sistema Previsional peruano para optimizar los aportes y las pensiones de los afiliados a fin de garantizar una pensión digna y justa a todas las personas naturales que cumplan con ciertos requisitos. Si bien el Proyecto tiene elementos muy interesantes en la búsqueda de una reforma para construir un sistema de pensiones basado en un esquema multipilar que sea universal, solidario, progresivo y sostenible Consideran que el proyecto debe enfocar el mejoramiento del Sistema Previsional peruano, contemplando el análisis de los elementos sugeridos.

4. Mediante Carta Nº 032-2022-PRESIDENCIA/APESEG, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros señalo que el Proyecto de Ley N° 1356-2022-CR, emite su opinión gremial sobre los elementos y premisas básicas que la reforma del Sistema Previsional en nuestro país debería considerar para crear un Sistema Previsional Complementario a partir de un porcentaje del IGV que pagan los consumidores finales por la adquisición de bienes y servicios, y de un porcentaje de la renta afecta al Impuesto a la Renta (IR) para los trabajadores de cuarta y quinta categoría. Consideran que el proyecto debe enfocar el mejoramiento del Sistema Previsional peruano, contemplando el análisis de los elementos sugeridos.

5. Mediante Carta Nº 151-2021-PRESIDENCIA/APESEG, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros señalo que el Proyecto de Ley N° 866-2021-CR, emite su opinión gremial sobre los elementos y premisas básicas que la reforma del Sistema Previsional en nuestro país debería considerar los siguientes aspectos: 1) Un único sistema integral basado en pilares con alcance universal, 2) Es indispensable que las personas tengan la certeza de una futura pensión de jubilación, 3) La constancia en el aporte a un fondo de pensiones para la jubilación es crítica, 4) Es fundamental incentivar el ahorro previsional voluntario, 5) Sobre el retiro de los fondos para pensión, 6) El valor de postergar la decisión de jubilación es muy relevante para el monto de la pensión, 7) La alternativa del Seguro de Longevidad, 8) Compañías de Seguros de Vida, 9) Cobertura de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, 10) Sobre los impuestos como fuente de los fondos para pensiones, 11) Sobre los esquemas de pensiones solidarias, 12) Un back office totalmente centralizado y 13) Uniformidad tributaria para fortalecer el ahorro voluntario con fin previsional y 14) Actualización periódica de parámetros del sistema; considerando que el proyecto debe tener como objetivo mejorar el sistema previsional, contemplando el análisis de los elementos y aspectos desarrollados.

6. Mediante Carta Nº 053-2022-PRESIDENCIA/APESEG, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros señalo que el Proyecto de Ley N° 1513-2021-CR, propone establecer el marco legal para la apertura de cuentas de ahorros previsionales en entidades del sistema financiero a solicitud expresa y voluntaria de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), a fin de que se puedan trasladar los fondos previsionales acumulados en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) a dichas entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). También considero que se debía de encontrar tasas pasivas que garanticen la competitividad en el sistema financiero, en este sentido consideran que no

hay un adecuado sustento para obtener tasas de rendimiento alto con más rentabilidad.

7. Mediante Carta Nº 024-2022-PRESIDENCIA/APESEG, el Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros señala que el Proyecto de Ley N° 1306-2021-CR, considera que todo proyecto de ley que tenga como objetivo mejorar el sistema previsional peruano, debería contemplar bajo análisis diversos elementos y aspectos desarrollados.

5.5 Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)

1. Mediante Oficio Nº 18671-2022-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00087-2022-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, en la cual considera, las medidas propuestas deben ser evaluadas desde un enfoque integral y no de forma aislada a los sistemas previsionales vigentes en el Perú; con la finalidad de desarrollar un sistema de seguridad social integral, coordinado y sostenible en el tiempo, que proteja a todos los ciudadanos ante los diversos riesgos sociales, incluyendo los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia. En consecuencia, se recomienda contar con la opinión del MEF para el Proyecto de Ley 344/2021-CR.

2. Mediante Oficio Nº 61924-2021-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00138-2021-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, el cual menciona estar en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 551/2021-CR, dado que incorpora disposiciones que podrían contravenir el marco jurídico establecido en la Constitución Política del Perú y sus leyes, como por ejemplo, la posible

apropiación de los recursos ahorrados por cada afiliado en el SPP al amparo de la aplicación del principio de solidaridad. Asimismo, se considera que el objetivo de toda reforma pensionaria debe ser mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzado con bases sólidas y respetando la propiedad y el ahorro de todos los afiliados.

3. Mediante Oficio Nº 21941-2022-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00115-2022-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, el cual menciona estar en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 1513/2021-CR, Ley que autoriza a entidades del sistema financiero la apertura de cuentas previsionales, toda vez que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar riesgos propios del sistema financiero. Adicionalmente, se considera que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones, deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzado con bases sólidas y respetando la propiedad y el ahorro de todos los afiliados.

4. Mediante oficio N° 26471-2022-SBS, de fecha 28 de junio de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, consideran que sobre el Proyecto de Ley N° 1595/2021-CR, no tienen competencia para emitir opinión sobre aspectos vinculados al uso de los recursos provenientes de partidas presupuestarias, ni sobre aspectos vinculados a la incorporación de trabajadores al SNP y el acceso a beneficios pensionarios dentro de dicho sistema de pensiones, al no encontrarse dentro de su ámbito de supervisión.

5. Mediante oficio N° 28333-2022-SBS, de fecha 08 de julio de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, adjunta el Informe Conjunto N° 00153-2022-SBS, consideran su desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 2110/2021-CR, dado que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar un esquema de comisión de corto plazo.

6. Mediante oficio N° 52808-2022-SBS, de fecha 07 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, adjunta el Informe Conjunto N° 265-2022-SBS, consideran su desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 2718/2021-CR, dado que dificulta la toma de decisiones por parte de los afiliados y presenta alternativas que muestran desventajas en su aplicación. Resulta importante señalar que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

7. Mediante oficio N° 48217-2022-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se adjunta el Informe Nº 00235-2022-SBS, elaborado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica y el Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, emitieron opinión no favorable respecto del Proyecto de Ley N° 2728/2021-CR, dado que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de los potenciales beneficiarios para el otorgamiento de pensión de sobrevivencia y a falta de éstos, a los herederos del afiliado fallecido en su derecho a la petición de herencia. Asimismo, se considera que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador y de su grupo familiar

(beneficiarios o herederos, según corresponda), mediante la consolidación de los avances ya alcanzado con bases sólidas y respetando la propiedad y el ahorro de todos y cada uno de los afiliados al SPP.

8. Mediante oficio N° 54147-2022-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante el cual adjunta el Informe Nº 00267-2022-SBS, elaborado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica y el Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, emitieron una opinión no favorable respecto del Proyecto de Ley N° 3227/2022-CR, que propone que la Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones, sea puesta a consideración del MEF, a fin de solicitar la evaluación de sus impactos en los compromisos fiscales del Estado peruano y el Tesoro Público; así como de su sostenibilidad financiera. Asimismo, se considera que las propuestas que impliquen el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deberían formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

9. Mediante oficio N° 16247-2022-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante el cual adjunta el Informe Nº 00044-2023-SBS, elaborado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica y el Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, emitieron una opinión no favorable respecto del Proyecto de Ley N° 4087/2022-CR, por cuanto no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, el proyecto legislativo conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar un esquema de comisión de corto plazo. Asimismo, la iniciativa legislativa resulta contraria a los principios que sustentan tal separación patrimonial entre los Fondos y Administradora, establecido a nivel de ley, y plantea una situación que

no corresponde con el marco jurídico establecido en la Constitución Política del Perú.

10. Mediante oficio N° 20331-2022-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante el cual adjunta el Informe Nº 00105-2022-SBS, elaborado por el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica y el Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, están en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 1356/2021-CR, dado que el modelo planteado deja de lado el objetivo primordial de un sistema de pensiones, que es reducir la pobreza en la vejez, dejando de lado a aquellas personas que no cuentan con capacidad de ahorrar para su vejez ni acceder como trabajadores a un mercado laboral formal. Asimismo, se sugiere revaluar la necesidad de crear un nuevo sistema de pensiones complementario, tomando en cuenta los estudios sobre el impacto de las políticas tributarias para fomentar los ahorros para la jubilación.

11. Mediante Oficio Nº 20081-2023-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00052-2023-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, en la cual consideran estar en desacuerdo con el Proyecto de Ley N° 4366/2022-CR, dado que este conllevaría efectos perjudiciales, en términos de una menor rentabilidad de los fondos de pensiones, y por tanto una menor pensión esperada para los futuros pensionistas del SPP; y además, estaría erróneamente fundamentado en un escenario de "pérdidas" en los Fondos de Pensiones que, dada la evidencia empírica mostrada, no corresponden a la gestión realizada por las AFP en el largo plazo. Por otro lado, señalan que las propuestas legislativas que implican el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deben formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

12. Mediante Oficio Nº 50154-2023-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00239-2022-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, en el cual emiten opinión no favorable sobre el Proyecto de Ley N° 3133/2022- CR, Ley que propone incorporar precisiones al artículo 2 de la Ley Nº 30478, Ley que modifica el artículo 40 y la Vigésima Cuarta Disposición Final y Transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones., dado que en su formulación no se han considerado principios que contribuyen al correcto diseño de un sistema de pensiones que sea sostenible y que brinde una adecuada cobertura y protección en la etapa de la vejez. Finalmente, señalan que las propuestas legislativas que implican el rediseño o cambios en los sistemas de pensiones deben formar parte de una reforma integral cuyo objetivo sea mejorar la protección social al trabajador, mediante la consolidación de los avances ya alcanzados y con bases sólidas que aseguren la protección de los afiliados ante los riegos de longevidad.

13. Mediante Oficio Nº 51787-2022-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00251-2022-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, en el cual emiten opinión no favorable sobre el Proyecto de Ley N° 2880/2022- CR, Ley que modifica el artículo 24 del Decreto Ley Nº 25897, que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, para establecer las pérdidas entre afiliados y AFP, debido que este conllevaría efectos perjudiciales, en términos de una menor rentabilidad de los fondos de pensiones, y por tanto una menor pensión esperada para los futuros pensionistas del SPP; y además, estaría erróneamente fundamentado en un escenario de "pérdidas" en los Fondos de Pensiones que, dada la evidencia empírica mostrada, no corresponden a la gestión realizada por las AFP en el largo plazo, Asimismo, señalan que la propuesta de cobro de

comisiones estaría contraviniendo los alcances de lo dispuesto en Capítulo I, Principios Generales del Título III del Régimen Económico de la Constitución Política del Perú, en la medida que afecta los principios sobre los que reposa un sistema de economía social de mercado, respecto de la libre iniciativa de los agentes económicos en la determinación de los precios de los bienes y servicios.

14. Mediante Oficio Nº 11234-2023-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00029-2023-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, emite opinión sobre el Proyecto de Ley N° 4200/2022- CR, Ley que modifica el artículo 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Fondos de AFP señalando que la propuesta legislativa contraviene el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Asimismo, contraviene con los principios del Convenio 102, Marco de Seguridad Social celebrado por Perú con la OIT, menoscabando el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada al SPP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Por otro lado, señala que uno d ellos impactos para los afiliados y el fondo de pensiones sería de aumentar el riesgo de caer en situación de pobreza en la vejez, así como también a un deterioro de la cobertura previsional que tiene el país.

15. Mediante Oficio Nº 17644-2022-SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adjunta el Informe Conjunto Nº 00085-2022-SBS del Superintendente Adjunto de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica, emite opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1306/2021- CR, Ley que propone crear el fondo previsional para recién nacidos financiado con aportes alternativos señalando que la propuesta legislativa debería conllevar a una reflexión en términos de los objetivos de política pública que, sobre la materia, debería tener una sociedad moderna en

vías de desarrollo y en el marco de las instituciones que mitigan dichos riesgos en la seguridad social en pensiones.

5.6 Ministerio de Trabajo y promoción del empleo (MTPE)

1. Mediante oficio N° 0747-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, considera que el proyecto de ley N° 1595/2021-CR resulta viable con observaciones. Asimismo, en general, en la exposición de motivos no se ha efectuado un análisis costo - beneficio integral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS.

2. Mediante oficio N° 1185-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, adjunta Hoja de Elevación N° 0251-2022-MTPE/4/8, considera que el proyecto de ley N° 1595/2021-CR resulta viable con observaciones. Asimismo, considera que toda iniciativa legislativa debe estar orientada a una reforma integral del actual Sistema Previsional Peruano que beneficie a toda la población y que atienda las problemáticas de la baja cobertura previsional e insuficiencia en los montos de las pensiones, actualmente existentes.

3. Mediante oficio N° 0964-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se adjunta Hoja de Elevación N° 0251-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el proyecto de ley N° 2047/2021-CR no le corresponde emitir opinión, debido a que corresponder poner en conocimiento a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, con copia a la PCM, las consideraciones respectivas.

4. Mediante oficio N° 0968-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se adjunta el Informe N° 0730-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el proyecto de ley N° 2110/2021-CR que considera que el proyecto de ley es viable con observaciones, , toda vez que no cuenta con los estudios económicos o actuariales que justifiquen su viabilidad, conforme con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 71 del Convenio N° 102 de la OIT; y, a su vez, tampoco se desarrolla el análisis costo- beneficio de la exposición de motivos conforme con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS.

5. Mediante oficio N° 0985-2022-MTPE/4, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se adjunta el Informe N° 0385-2022-MTPE/4/8, considera sobre el proyecto de ley N° 2659/2021-CR resulta viable, toda vez que la propuesta de regulación del cobro de comisiones sobre la rentabilidad del mes generada por la AFP tiene una incidencia directa sobre el desempeño en la administración de los fondos por parte de la AFP en términos de que esta procurará un mejor rendimiento de los fondos administrados a fin de obtener una mayor comisión, lo cual resulta beneficioso para el afiliado quien al acumular mayores ingresos a su fondo eventualmente podrá acceder a una adecuada protección en su vejez.

6. Mediante Oficio Nº 0353-2023-MTPE/4, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adjunta el informe Nº 0116-2023-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Memorando N° 0094-2023-MTPE/2 del Viceministro de Trabajo que emite opinión técnica del Proyecto de Ley 2728/2021-CR, en el cual se menciona que, dicha propuesta no es viable, indicando que el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) deben emitir opinión sobre la propuesta. Y mediante el informe N° 0497-2022-MTPE/2/14.4 de la Dirección General de Trabajo opina sobre el Proyecto de Ley N° 2728-2021-CR, no es viable, considerando que la propuesta normativa, según se indica, tiene

por finalidad que, en artículo único modificar los artículos 45 y 106 del Decreto Ley N° 25987, Ley que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Asimismo, no se aprecia en el sustento información sobre el número de los casos existentes en el SPP en los que los fondos de los afiliados fallecidos sin herederos hayan pasado a las AFP y se distribuyan en montos iguales entre la totalidad de CIC. Asimismo, no explica cuál sería el destino de los fondos una vez transferidos al Tesoro Público. Mediante Memorando N° 1141-2022-MTPE/3 de la Secretaría Técnica a través de la Hoja de Elevación N° 0816-2022-MTPE/3/17 de la Dirección General de Promoción del Empleo, la Hoja de Elevación N° 0358-2022-MTPE/3/18 de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo y la Hoja de Elevación N° 0431-2022-MTPE/3/19 de la Dirección General de Normalización, Formalización para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales; mediante los cuales comunican que no son competentes para emitir opinión respecto al referido proyecto de ley.

7. Mediante Oficio Nº 0739-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adjunta el informe Nº 0473-2022-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión técnica del Proyecto de Ley 1356/2021-CR, considerado como viable con observaciones, porque consideran que no resulta aplicable para aquellos que razones de falta de capacidad adquisitiva no podrían aportar regularmente. Por otro lado, no se ha encontrado estudios que los porcentajes del IGV e IR, garanticen un fondo suficiente que permita complementar a los sistemas previsionales ya que debería el Ministerio de Economía y Finanzas emitir un informe, conforme a lo establecido al artículo 79 de la Constitución Política del Perú, por su impacto en leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones. Asimismo, indica que el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) deben emitir opinión sobre la propuesta.

8. Mediante oficio N° 1298-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0952-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el Proyecto de Ley N° 3133/2022-CR, sugiere que el Congreso de la República considere la opinión que el Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

9. Mediante oficio N° 940-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0687-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el Proyecto de Ley N° 866/2021-CR, sugiere que el Congreso de la República considere la opinión que el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.

10. Mediante oficio N° 1160-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0854-2022-MTPE/4/8, considera que sobre el Proyecto de Ley N° 1922/2021-CR, por todo lo expuesto, se considera que la propuesta normativa deviene en inconstitucional en tanto vulnera el derecho al libre acceso a un sistema de seguridad social contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política del Perú; el principio de no afectación contemplado en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú; y los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación requeridos por la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.

11. Mediante oficio N° 1157-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0863-2022-MTPE/4/8, considera que el Proyecto de Ley N° 00344/2021-CR, tiene importancia en el

sentido que para el incremento de la base tributaria, se necesita adoptar medidas para reducir la informalidad, disminuyendo en este caso la evasión en el pago del IGV y otras obligaciones tributarias, las cuales deberían ser evaluadas para revisar si cumplen su objetivo de ayudar a los sectores de más bajos ingresos y no favorecer a unos pocos.

12. Mediante oficio N° 1042-2023-MTPE/4, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0190-2023-MTPE/4/8, considera que el Proyecto de Ley N° 00551/2021-CR, limita en cuanto no considera de manera suficiente el impacto de las altas tasas de empleo informal e independiente en el mercado laboral peruano. En este sentido, se observa la necesidad de que la propuesta incluya una estrategia detallada para incentivar a los trabajadores independientes a estar afiliados a un sistema de prensiones según las condiciones del proyecto de ley. De acuerdo con lo detallado anteriormente, se considera que el proyecto de Ley es viable con observaciones.

13. Mediante oficio N° 0954-2022-MTPE/1, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0691-2022-MTPE/4/8 e Informe N° 0271-2022-MTPE/2/14.4, considera que el Proyecto de Ley N° 01513/2021-CR, resulta inviable, debido a que refleja una verdadera reforma sustancial que implique una mejora del actual sistema previsional peruano y que atienda los aspectos relacionados con ampliar la cobertura previsional y el otorgamiento de pensiones suficientes.

14. Mediante oficio N° 0353-2023-MTPE/4, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de Seguridad Social y Migración Laboral de la Dirección General de Trabajo, se adjunta el Informe N° 0116-2023-MTPE/4/8 considera que el Proyecto de Ley N° 02728/2021-CR, resulta no viable, debido a que toda vez que los derechos de pensión y de herencia son imprescriptibles de acuerdo a lo desarrollado en la sentencia del Tribunal Constitucional emitida

en el Expediente N° 1417-2005-AA/TC y a lo previsto en el artículo 664 del Código Civil, respectivamente.

5.7 Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones (AAFP)

1. Mediante Carta Pres-0613-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2047/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

2. Mediante Carta Pres-0615-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2110/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

3. Mediante Carta Pres-0616-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2659/2021-CR, plantea mejorar la calidad de

vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

4. Mediante Carta Pres-0619-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2718/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

5. Mediante Carta Pres-0620-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2728/2021-CR, plantea mejorar la calidad de vida de los peruanos y garantizar la protección de la población durante su vida laboral y en su vejez, considerando valiosas todas las propuestas legislativas destinadas a mejorar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a través de distintas fórmulas, considerando los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado,

intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

6. Mediante Carta Pres-0623-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 3227/2022-CR, plantea reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

7. Mediante Carta Pres-0624-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 3220/2022-CR, plantea reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, menciona que la propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

8. Mediante Carta Pres-0111-2023, de fecha 10 de mayo de 2023, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 4087/2022-CR, considera que toda propuesta que modifique la estructura de comisiones del SPP debe formar parte de una discusión técnica más amplia, al ser un tema complejo, cuyo diseño debe preservar la competencia en beneficio de los afiliados, por lo cual recomendamos que la misma deba formar parte de un proceso ordenado de reforma integral del sistema de pensiones peruano, que en su construcción debe considerar aspectos relacionados al mercado laboral y la economía nacional.

9. Mediante Carta Pres-0609-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 1356/2021-CR, planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

10. Mediante Carta Pres-0112-2023, de fecha 10 de mayo de 2023, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 4366/2022-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso

adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Y, además, fortalecería el debate, que se ponga en conocimiento este tema ante la Comisión Multisectorial conformada desde el 10 de julio de 2022, mediante el Decreto Supremo N°081-2022-PCM, cuya dependencia fue otorgada al Ministerio de Economía y Finanzas desde el 31 de marzo de 2023 mediante el Decreto Supremo N°045-2023-PCM.

11. Mediante Carta Pres-622-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 3133/2022-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

12. Mediante Carta Pres-621-2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 2880/2022-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema

previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

13. Mediante Carta Pres-0078-2023, de fecha 21 de marzo de 2023, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera que el presente Proyecto de Ley 4200/2022-CR significa una posibilidad de retiro permanente del fondo de pensiones, propiciado por el sobreendeudamiento de los afiliados, en desmedro de su ahorro para la jubilación. Sobre esa base, considera que el presente proyecto de ley no soluciona el problema de sobreendeudamiento de los afiliados al SPP.

14. Mediante Carta Pres-0114-2023, de fecha 10 de mayo de 2023, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 4528/2022-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

15. Mediante Carta Pres-0642-2022, de fecha 20 de diciembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 118/2021-CR, así como, los demás proyectos

de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

16. Mediante Carta Pres-0599-2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 344/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

17. Mediante Carta Pres-0600-2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 551/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca,

Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

18. Mediante Carta Pres-0605-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 912/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

19. Mediante Carta Pres-0611-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 1513/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso

adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

20. Mediante Carta Pres-0608-2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones considera valiosa la propuesta que el Proyecto de Ley 1306/2021-CR, así como, los demás proyectos de ley que planteen reformas parciales al SPP deben analizarse de manera integral en el Grupo de Trabajo creado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, encargada de proponer una reforma del sistema previsional peruano, en aras de garantizar un goce efectivo y el acceso adecuado y oportuno a una pensión por parte de todos los ciudadanos. Asimismo, es importante mencionar que toda propuesta de reforma del sistema previsional debe tener en consideración los siguientes lineamientos fundamentales: priorizar la libertad de elección de los afiliados entre distintas propuestas de valor; garantizar que el fondo de pensiones siga siendo propiedad del afiliado, intangible e inembargable; y, permitir el acceso de trabajadores independientes e informales a la cobertura de la seguridad social.

5.8 Cámara de Comercio de Lima – CCL

1. Mediante Carta N° P/ 036-03-2022/GL, vía electrónica, de fecha 03 de marzo de 2022, la Cámara de Comercio les parece loable la propuesta a través del Proyecto de Ley N° 1356/2021-CR, que propone que la Ley crea una fuente complementaria para financiar las pensiones individuales "Ahorro para mi Vejez", toda vez que pretende dotar o mejorar las pensiones de jubilación de la población, asegurando una vejez digna y sin cargar al Estado - o a la familia - las contingencias que produce la carencia de aportes previsionales.

2. Mediante Carta N° P/ 039-03-2022/GL de fecha 3 de marzo de 2023, La Cámara de Comercio de Lima, manifiesta encontrarse en descuerdo con el Proyecto de Ley 4200/2022-CR, que propone modificar el artículo 40 del TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones — D.S. N° 054-97-EF; autorizando a todo afiliado al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones a retirar hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Fondos para la compra o amortización de un primer inmueble. debido a que ésta desnaturaliza el fin previsional del fondo, el cual debe ser destinado exclusivamente para cubrir la contingencia del cese en el empleo por alcanzar la edad y tiempo de servicio de la jubilación, o sobrevenir una incapacidad para el trabajo.

5.9 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS

1. Mediante Oficio Nº D000341-2022-MIDIS-SG, de fecha 24 de mayo de 2022, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, adjuntan el Informe Nº D000256-2022-MIDIS-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social adjunta el Informe de Trabajo N° D000033-2022-MIDIS-OGAJ-CMR, consideran que sobre el Proyecto de Ley N° 1595/2021-CR, no tienen competencia para emitir opinión, respecto a su viabilidad legal, contenido y efectos jurídicos.

2. Mediante Oficio Nº D001002-2021-MIDIS-SG, de fecha 30 de diciembre del 2021, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, adjuntan el Informe Nº D000603-2021-MIDIS-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social adjunta el Informe de Trabajo N° D000081-2021-MIDIS-OGAJ-JJC, consideran que sobre el Proyecto de Ley N° 551/2021-CR, no involucra materias de competencia funcional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

5.10 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

1. Mediante informe N° 1040-2022-MTC/08, el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones través de Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, Oficina de Asesoría Jurídica, considera que no es competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1595/021-CR.

2. Mediante oficio N° 3239-2022MTC/04, de fecha 02 de diciembre de 2022, la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adjunta el informe N° 1566-2022-MTC/18.01 y el informe N° 1839-2022-MTC/08, el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones través de Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, Oficina de Asesoría Jurídica, considera en ambos informes que no es competente para emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1922/2021-CR.

5.11 Ministerio de Educación (MINEDU)

- Mediante Oficio Nº 2264-2021-MINEDU/SG, de fecha 03 de diciembre del 2021, el Ministerio de Educación, adjuntan el Informe Nº 01228-2021-MINEDU/SG-OGAJ mediante el cual concluye que no le corresponde pronunciare sobre la viabilidad del Proyecto de ley N° 344/2021-CR, debido a que no incide en los ámbitos que comprenden a la educación.

5.12 Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)

- Mediante Oficio RE (MIN) Nº 3-0-A/9, de fecha 11 de enero del 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores, adjuntan el Informe (Leg.) Nº 001-2022 mediante el cual no resulta viable apoyar al proyecto de ley 551-2021-CR, debiendo tenerse en cuenta los comentarios de fondo y forma señalados en el presente documento, a fin de proseguir con su trámite y evaluación correspondiente.

5.13 Ministerio de la Producción (PRODUCE)

- Mediante Oficio Nº 00000042-2022, de fecha 07 de febrero del 2022, el Ministerio de la Producción, mediante la Oficina General de Asesoría Jurídica, adjuntan el Informe Nº 0000097-2022-PRODUCE/OGAJ, señala que el proyecto

de ley 551-2021-CR contiene aspectos que no son parte de las funciones y competencias del sector Producción, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y modificatoria, por lo que no corresponde emitir opinión sobre el referido Proyecto de Ley.

5.14 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

- Mediante Oficio Nº 000092-2023, de fecha 16 de mayo de 2023, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica, adjuntan el Informe Nº 000057-2023-SUNAT/7T0000, señala que el Proyecto de Ley 1922-2021-CR, sobre el particular, cabe indicar que de acuerdo con la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT[1], esta es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que nuestra opinión institucional debe ser remitida al citado ministerio para que consolide y emita la opinión autorizada del referido sector. En tal sentido, le informo que mediante Oficio Nº 000090-2023-SUNAT/700000 se ha remitido al MEF la opinión institucional respectiva.

5.15 Ministerio de Salud (MINSA)

- Mediante Oficio N° 2143-2022-SG/MINSA, de fecha 9 de mayo de 2022, el Ministerio de Salud adjunta el Informe N° 428-2022-OGAJ/MINSA señala que el Proyecto de Ley 1306-2021-CR es una iniciativa con un buen propósito, debido a que ayuda a crear un fondo previsional para el recién nacido. Sin embargo, es probable entre en conflicto y requiera se modifique la Decreto Supremo Nº 014-2005-SA que aprueba el Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos, Ley Nº 28189. Además, la propuesta puede generar conflictos culturales en mundo andino y amazónico.

5.16 Ministerio de Justicia (MINJUS)

- Mediante Oficio N° 2690-2022-JUS/SG, de fecha 6 de octubre de 2022, el Ministerio de Justicia adjunta el Informe N° 18-2022-JUS/DGDNCR señala que

el Proyecto de Ley 1306-2021-CR jurídicamente es no viable en el extremo referido a su artículo 1 en cuanto define a la placenta como "activo de propiedad", toda vez que, como se expuso supra, desde un plano bioético, nuestro ordenamiento jurídico se adhiere a la tesis del derecho de la personalidad al momento de regular lo concerniente a los actos de libre disposición del propio cuerpo. Esto quiere decir que, no cabe una concepción patrimonial al momento de hablar sobre actos de libre disposición del propio cuerpo. Asimismo, es viable jurídicamente en los demás extremos con algunas observaciones.

VI. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

6.1 Seguridad social y Sistema de pensiones

La Constitución Política del Perú en su artículo 10° reconoce y garantiza el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, que en materia de pensiones tiene una doble finalidad, por un lado, proteger a la persona frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte; y, por otro, elevar su calidad de vida, lo cual se concreta a través de las prestaciones que brindan los distintos regímenes de pensiones establecidos por el legislador.

De otra parte, el artículo 11° de la Constitución establece que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. De este modo, en materia de pensiones, el constituyente ha reconocido que las prestaciones pueden ser otorgadas mediante entidades públicas, privadas y/o mixtas, poniendo en relieve que el Estado asume un rol supervisor y/o fiscalizador cuando las prestaciones sean brindadas por entidades privadas y/o mixtas[1].

Tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en el Fundamento 54 de la STC 0050-2004-AI/0051-2004-AI/0004-2005-AI/0007-2005-AI/0009-2005-AI acumulados)

> *"La seguridad social es la garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado. Se concreta en un complejo normativo estructurado - por imperio del artículo 10 de la Constitución- al amparo de la 'doctrina de la contingencia' y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el*

[1] Fundamento 2. § Expediente N° 00007-2008-PI/TC de fecha 30 de junio de 2010

otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en 'la elevación de la calidad de vida'".

La seguridad social

"es un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y en la redistribución de recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. Es de reconocerse el fuerte contenido axiológico de la seguridad social, cuyo principio de solidaridad genera que los aportes de los trabajadores activos sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales de las pensiones" (STC 0011-2002-AI, Fundamento 14).

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia dictada en el Expediente Nº 00007-2008-PI/TC de fecha 30 de junio de 2010, ha señalado en su Fundamento 2 que la seguridad social y el libre acceso a las prestaciones pensionarias tienen que ser considerados como derechos de configuración legal porque a través de la ley se precisan los requisitos y condiciones que se deben cumplir a efectos de acceder y gozar de las prestaciones que cada uno de los regímenes pensionarios establece en cada caso en particular.

Por ello, teniendo presente el contenido normativo de los artículos 10º y 11º y la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución, el Tribunal consideró que en materia de pensiones el constituyente de 1993 ha adoptado un modelo paralelo de sistemas de pensiones, en donde conviven el antiguo sistema de pensiones administrado por entidades públicas y el nuevo sistema de pensiones administrado por entidades privadas.

En efecto, nuestro modelo pensionario cuenta con dos sistemas de pensiones que coexisten. Por un lado, el Sistema Público de Pensiones, que agrupa más de un régimen de reparto, como son los establecidos por los Decretos Leyes 19846, 19990 y 20530, entre otros; y por el otro, el Sistema Privado de Pensiones, que es un único régimen de capitalización individual creado por el Decreto Ley 25987.

De otra parte, en materia de seguridad social el principio de solidaridad implica que todos los asegurados de los sistemas público y privado de pensiones contribuyan a su sostenibilidad, lo cual conlleva que todos sus afiliados deban en general aportar,

no solo para poder recibir las distintas prestaciones, sino además para poder preservar los sistemas de pensiones en su conjunto[2].

6.2 Sistema Previsional Peruano

6.2.1 Diagnóstico y factores estructurales

En el Perú coexisten dos sistemas de pensiones, el privado y el público, orientados a captar afiliados que realizan actividad laboral en condición de dependientes o independientes. De acuerdo con esta última condición, son incorporados como asegurados obligatorios o facultativos.

El Sistema Público o Sistema Nacional de Pensiones es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Sistema Privado de Pensiones por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (actualmente compiten en el mercado cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones) bajo la rectoría de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Cada una de ellas administra a sus afiliados, sus recursos, sus prestaciones y a sus pensionistas de acuerdo con Ley[3].

El Sistema Nacional de Pensiones fue creado[4] en 1973, bajo la denominación de Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, siendo administrado por el Estado a través de la Oficina de Normalización Previsional desde el 1 de junio de 1994. Este sistema está asociado con la idea de solidaridad colectiva, basado en un sistema de reparto, que se financia a través de los aportes obligatorios, realizado por los trabajadores en actividad y de los aportes facultativos que se destina a un fondo común, para pagar las pensiones de quienes están jubilados.

Para el Sistema Privado de Pensiones se contemplan diversas modalidades de pensiones, seguros de renta vitalicia y la posibilidad realizar retiros a suma alzada (Ley del 95.5%); por su parte, el Sistema Nacional otorga pensiones reguladas por Ley.

---

[2] *Ibidem*
[3] https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/que_hace_onp
[4] Decreto Ley Nº 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social

En primer término, es necesario precisar que el sistema previsional ha enfrentado en las últimas décadas un profunda crisis producto de un agudo desfinanciamiento[5], situación generada debido a la disparidad de lo percibido por un cesante promedio del Decreto Ley 19990 frente a lo que recibe uno del Decreto Ley 20530, y las condiciones ínfimas de subsistencia de la gran mayoría de los pensionistas del primer régimen así como el excesivo gasto presupuestal que ha generado dicha inequidad al sistema presupuestal nacional. Esta situación generó una profusa reforma del sistema previsional peruano, al comienzo de la década de los años 1990[6].

La Reforma Constitucional en materia previsional

La primera de ellas fue la promulgación de la Ley 28389, que declaró cerrado el sistema pensionario del Decreto Ley 20530, con lo cual el Congreso de la República puso fin a la Cédula Viva, disponiendo que en adelante no estén permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones a este régimen.

La norma precisó que los trabajadores que pertenecían al Decreto Ley 20530, y que no hubieran cumplido los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones, con el objetivo de poner fin a un régimen discriminatorio en materia pensionaría.

En consecuencia, al haberse modificado la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, fue eliminada de nuestro ordenamiento jurídico la Teoría de los Derechos Adquiridos. La teoría del derecho adquirido opta por defender la seguridad jurídica; la teoría del hecho cumplido, en cambio, opta por defender la obligatoriedad de la norma reciente y la atribución que el Estado tiene de alterar los mandatos[7].

La segunda fue la Ley 28449 mediante la cual se establecieron las nuevas reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley 20530, de conformidad con los artículos 11, 103 y la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.

[5] Informe de la Comisión Especial creada mediante Decreto Supremo Nº 003-2001-TR encargada de estudiar la situación de los regímenes pensionarios de los Decretos Leyes Nº 19990 y Nº 20530 y otros a cargo del Estado. Lima- Perú, 2001. Pág. 7.
[6] LESCANO ECHAJAYA, José Luis. La Problemática Pensionaria: Su Panorama Actual y una Propuesta de Solución para su Viabilidad en el Futuro, artículo presentado en Derecho & Sociedad 34. Lima- Perú. p. 267-276.
[7] RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Lima- Perú, 1999. Pág. 330.

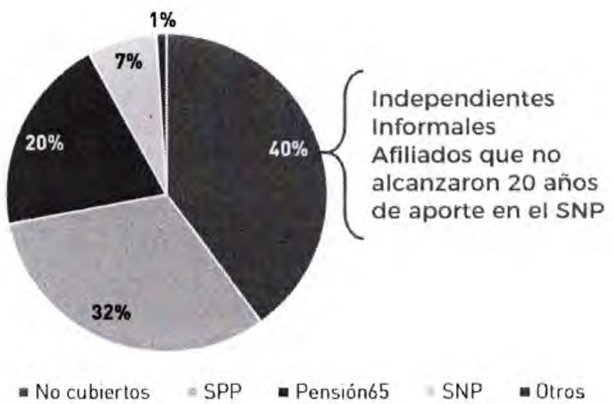
Asimismo, la citada Ley no afectó los derechos y beneficios del Régimen de Pensiones del Decreto Ley 19990.

En consecuencia, el objetivo de los sistemas previsionales consiste en garantizar una fuente de ingresos adecuada durante la vejez mediante la cobertura de tres riesgos previsionales asociados al envejecimiento: pobreza, pérdida de capacidad de trabajo y sobrevivencia. En dicha métrica es posible interpretar que el financiamiento de la vejez se considerará adecuado cuando permita un nivel de ingresos a los adultos mayores por encima de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de estos, que reemplace razonablemente los ingresos laborales, y que no se agote hasta el fallecimiento[8].

El sistema previsional peruano entonces, conformado por el Sistema Privado de Pensiones (SPP) basado en un modelo de capitalización individual, y el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), basado en un modelo de reparto, espera que hacia el 2040 – cuando el sistema presente un mayor grado de maduración –, al menos el 40% de la población mayor de 65 años no cuente con acceso a pensiones[9].

Cobertura de adultos mayores de 65 años al 2040

[8] Álvarez, F., Brassiolo, P., Toledo, M., Allub, L., Alves, G., De la Mata, D., Estrada, R., Daude, C. (2020). RED 2020: Los sistemas de pensiones y salud en América Latina. Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad. Caracas: CAF. Retrieved from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1652.
[9] BID (2019) Diagnóstico del Sistema de Pensiones Peruano y Avenidas de Reforma. División de Mercados Laborales, Banco Inter-Americano de Desarrollo. Nota Técnica IDB-TN-1776.



Fuente: BID (2019) Diagnóstico del Sistema de Pensiones Peruano y Avenidas de Reforma

Asimismo, la norma que permite el retiro de hasta el 95.5% de los fondos de capitalización (en el caso del sistema privado) – la cual impide lidiar adecuadamente con el riesgo de sobrevivencia en la vejez – y el bajo nivel de pensiones que se brinda a través de Pensión 65 – el cual resulta insuficiente para lidiar con la vulnerabilidad en la vejez – genera que el porcentaje de adultos mayores con acceso a fuentes de financiamiento adecuadas durante la etapa de jubilación resulte mínimo. Cabe resaltar que en la actualidad la mayor parte de los afiliados al SPP solicitan hasta el 95.5% de sus aportes.

Stock de jubilados en el SPP según modalidad (miles)



Fuente:

Si bien existen factores estructurales que explican dicho resultado – altos niveles de informalidad y trabajo independiente, alta rotación entre empleo dependiente, desempleo, empleo independiente y empleo informal, limitado espacio fiscal y preferencia por liquidez de los afiliados al sistema contributivo – el diseño actual no permite lidiar adecuadamente con dichos factores, e inclusive agrava sus efectos sobre la cobertura de riesgos previsionales durante la etapa de jubilación.

De este modo, es posible identificar tres grandes problemas de diseño en el sistema previsional peruano[10]:

- *El sistema presenta, especialmente en los segmentos con mayor persistencia de la informalidad y el trabajo independiente, como resultado de la vinculación de los aportes al contrato formal dependiente. Si bien en la población en situación de pobreza extrema se encuentra cubierta en cierta medida por Pensión65, al no incorporar mecanismos de financiamiento adicionales a los*

[10]https://grupomacro.pe/macroconsult/2021/04/07/sistema-previsional-peruano/#:~:text=En%20l%C3%ADneas%20generales%2C%20el%20objetivo,capacidad%20de%20trabajo%20y%20sobrevivencia.

ingresos por trabajo formal dependiente, la capacidad de financiar pensiones en los tramos medios y medio-bajos de la distribución de ingresos se ven muy limitados.

- *El sistema se encuentra altamente fragmentado y carece de visión integral. El diseño de un régimen contributivo conformado por dos sistemas en competencia genera que el SNP y el SPP se depreden mutuamente, permite que perfiles similares de afiliados obtengan beneficios distintos únicamente como resultado de su elección entre un sistema u otro, genera costos medios más altos en cada sistema, afecta el financiamiento del sistema de reparto y promueve cambios paramétricos que limitan aún más el acceso a pensiones. Asimismo, no existe claridad sobre cómo los pilares contributivos y no contributivos se complementan y aprovechan sinergias mutuas para cumplir de manera eficiente los objetivos previsionales.*
- *El sistema es institucionalmente débil. El sistema contributivo no cuenta con candados institucionales, lo cual genera un alto riesgo político para el cumplimiento de los objetivos previsionales, al promover cambios normativos que saquen provecho de la preferencia por liquidez de los electores mediante distorsiones y perforaciones al sistema (jubilación anticipada, retiro de fondos, entre otros). Esta condición dificulta el desarrollo de un sistema basado en reglas claras y con resultados predecibles a mediano y largo plazo.*

Como se desprende del diagnóstico realizado, mantener el diseño actual del sistema previsional peruano no permitirá cumplir con los objetivos previsionales de cobertura de los riesgos de pobreza en la vejez, pérdida de capacidad de trabajo y sobrevivencia, situación que se encuentra recogida también en estudios de la Comisión de Protección Social (2017), BID (2019), OCDE (2019), Freudberg y Toscani (2019) y Álvarez et al. (2020).

6.2.2 Problemática de las microempresas

Las microempresas surgen como un medio para atenuar las consecuencias de la falta de ofertas de trabajo que se agrava en el Perú en la década de los 80.

Actualmente, el sector de la micro y pequeña empresa ocupa aproximadamente al 60% de la población económicamente activa (PEA) del sector privado.

Gran parte de la población se vio afectada por este problema que, con el paso del tiempo, lejos de solucionarse se agudizó por la falta de medidas adecuadas de los últimos gobiernos, por lo que actualmente presenciamos una de las más altas tasas de subempleo del mundo.

La importancia de las microempresas no proviene de sus niveles de productividad, ya que individualmente son bastante bajos y no llegan a ser significativos para el mercado si se les compara con los porcentajes de productividad de las grandes empresas. La verdadera importancia de las microempresas radica en el hecho de que ellas constituyen una fuente importantísima de alternativas de empleo y autogestión.

Factores como la mayor migración, la inestabilidad en los empleos, la creación de nuevas formas de contratación – como los services –, han ocasionado que la población en un principio desempleada se vuelque a crear y buscar alternativas de trabajo que, en estas circunstancias, se dirige solo a conseguir la subsistencia, lo que como consecuencia genera el subempleo. A partir de algunos ahorros o de las indemnizaciones recibidas después de algún despido o a través de pequeños préstamos, las personas motivadas a desarrollar un negocio crean micro unidades de producción[11].

Lo que lleva a una persona a volverse microempresario, no es por lo general la inquietud por participar en el mercado; en la mayoría de los casos, lo que los compele es algo más básico y elemental, es la propia necesidad de sobrevivir. Esta es justamente una de las características más importantes de las microempresas y uno de los elementos que nos va a hacer comprender la mecánica de su funcionamiento.

Una investigación de la ONG Alternativa muestra que el 58.2% de las microempresas funciona con una sola persona, el 30.2%, con dos personas y sólo el 11.6% con más de dos. Estas unidades de producción que se originan con la participación de más de un miembro son generalmente conformadas por una familia. Este carácter familiar que poseen la mayoría de microempresas, origina lo que algunos denominan el

[11] Rodríguez, Carlos Enrique y Sierralta Patrón, Ximena. El problema del financiamiento de la microempresa en el Perú. En Revista Ius et Veritas 15. a Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 324.

"autoempleo": las personas que trabajan en estas unidades productivas familiares, en la mayoría de los casos lo hacen por cuenta propia sin que se presente una relación de ajenidad, no existiendo obligaciones ni derechos laborales, configurándose de esta forma una relación excluida del ámbito de aplicación de derecho laboral. Esto conlleva a que tampoco exista la necesidad de calificación. Tal vez por eso las microempresas se caractericen por abarcar rubros como la comercialización de abarrotes, confecciones de ropa o calzado[12].

El proceso de producción es intensivo en mano de obra, esto es, lo que se explota no es el capital y sí la fuerza de trabajo pues este es el recurso más abundante que poseen. Se ha llegado a calcular que los microempresarios trabajan de 10 a 12 horas diarias, seis o siete días a la semana. No obstante, la productividad es bastante baja; muchas de las microempresas no generan rendimientos a escala pues lo que prima es el interés de conseguir lo suficiente para mantener a la familia (microempresas de sobrevivencia). Por estas razones los microempresarios carecen de un interés inmediato que los motive a adquirir la capacidad gerencial necesaria para intentar hacer proyectos a largo plazo y para controlar lo que se produce.

Estas empresas no presentan muchos elementos formales. No hay libros contables ni presupuestos porque carecen de un conocimiento adecuado de sus usos y beneficios, lo que trae como consecuencia que los microempresarios pierdan el control de sus ganancias o pérdidas luego de dos meses de efectuarse. Es difícil encontrar medios que certifiquen la propiedad de bienes inmuebles ya que los centros de producción, que generalmente son las propias casas de los empresarios, no cuentan con título o registró. Incluso en los casos en los que se trabaja con activos fijos, la propiedad de las maquinarias se torna un problema de difícil probanza debido a que en casi todos los casos son adquiridas de segunda mano y, por otro lado, tienen tantas modificaciones y sufren tantos cambios con la finalidad de mantenerlas en funcionamiento que terminan convirtiéndose en "monstruos" de difícil identificación, lo que manifiesta el carácter obsoleto de la tecnología[13].

Como hemos señalado, en el Perú, la importancia de la microempresa no radica en su capacidad productiva sino en el hecho de que es una fuente de empleo que ha llegado a absorber gran porcentaje de la población desempleada en nuestro país.

[12] Rodríguez, Carlos Enrique y Sierralta Patrón, Ximena. Op. Cit. p. 324.
[13] Ibidem.

En el Perú, las microempresas son negocios que no superan las 150 unidades impositivas tributarias (UIT) de ingresos anuales (Ministerio de la Producción, 2013) y representan la mayor porción del universo empresarial formal en el Perú (95 %), además de generar empleo a más de un millón 300 mil personas, que equivale al 48 % del total de personal empleado (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2008).

La mortalidad de todas las empresas en el Perú ascendió a 5,6 % en el año 2014. Las microempresas en conjunto presentaron una tasa de 5,9 % en el mismo año. Sin embargo, las microempresas con ventas entre 0 y 2 unidades impositivas tributarias alcanzan una tasa de 13,3 %; las que venden entre 3 y 5 UIT alcanzan una tasa de 5,2 %; las que presentan ventas entre 6 y 13 UIT, una tasa de 4,5 %; y las demás alcanzan tasas de hasta 0,9 % (Ministerio de la Producción, 2015). De esto se puede advertir que, a menores ingresos, mayor tasa de mortalidad de las microempresas en el Perú, con lo cual se evidencia que las microempresas de subsistencia son las que padecen más. En el Perú las micro y pequeñas empresas son fundamentalmente de subsistencia o sobrevivencia, al presentar muy bajos índices de productividad e ingresos[14].

Según cifras del Ministerio de la Producción (2014) el 51,9 % de empresas que habían iniciado sus operaciones en 2007 no seguía operando, lo cual se traduce en una salida de aproximadamente 463 mil microempresas en un lapso de 7 años. Las causas de mortalidad son múltiples. Los factores de mortalidad en orden de importancia pueden ser los siguientes.

Factores determinantes del fracaso empresarial y su ponderación

[14] Chávez Álvarez, Jorge. Diagnóstico y formulación de estrategias de desarrollo económico de Lima Metropolitana. Municipalidad Metropolitana de Lima. Lima, 2004.

	FACTORES DE GESTIÓN (MANAGERIAL FACTORS)	FACTORES FINANCIEROS	FACTORES EXTERNOS
1	Demora en pago de clientes	Fluctuación en costos de material de construcción	Cierre y limitaciones en el movimiento entre las áreas del West Bank
2	Falta de experiencia en contratos	Bajo margen de ganancia debido a la competencia	Políticas de los bancos
3	Falta de experiencia en línea de trabajo	Dependencia a los bancos y el pago de altos intereses	Limitaciones en la importación
4	Uso de técnicas de gestión de proyectos	Contratos ganados al precio más bajo	Mal clima
5	Reemplazo de personal clave	Caída en la economía nacional	Desastres naturales
6	Productividad y mejora laboral	Estimación de las prácticas	
7	Uso de sistema de documentación	Fluctuación en los tipos de pago	
8	Fraude	Gestión de flujo de caja	
9	Asesoramiento competente	Falta de capital	
10	Prácticas de contratación	Control de costos y uso de equipos	
11	Falta de desarrollo de gestión a medida que la empresa crece	Evaluación anual de ganancias	
12	Una sola persona a cargo	Manejo de cambio en la órdenes	
13	Intromisión del dueño en la fase de construcción	Monopolio	
14	Aumento del tamaño del proceso	Insuficientes proyectos ganados	
15	Problemas internos de la empresa	Desperdicios materiales	
16	Organización de la empresa		
17	Compromiso		
18	Sistema de control		
19	Cambio en el tipo de trabajo		
20	Asignación de líder de proyecto en sitio		
21	Reacción al cambio		
22	Incremento de número de proyectos		
23	Reclamos		
24	Cambio de trabajo de público a privado y viceversa		

Fuente: Ministerio de la Producción

Otro estudio teórico relevante es el aporte de Lussier (1996), a través del cual señala como factores del fracaso empresarial al capital, control y documentación financiera, experiencia en el sector, experiencia en gestión, planeamiento, asesoramiento profesional, educación, trabajadores, contexto económico y publicidad.

En cuanto a factores determinantes de mortalidad específicamente referidos a microempresas, se puede citar el trabajo de Bonacim, Cunha y Correa (2009), en el que se señala como factores de fracaso: falta de capacitación en gestión, falta de plan de negocios, clientes morosos, alta carga tributaria, fuerte competencia, falta de mano de obra especializada, ausencia de financiamiento de capital de trabajo, poca clientela, baja fidelidad de clientes y problemas financieros.

Sobre la base de los estudios tanto teóricos como prácticos en relación con los factores de mortalidad previamente revisados, se presenta a continuación un listado

de los factores que se consideran relevantes en la mortalidad y fracaso de la microempresa en el Perú.

Propuesta de factores relevantes en la mortalidad de la microempresa en el Perú

DESCRIPCIÓN DE FACTORES	AUTORES
Edad del gestor	Lussier, 1996
Educación / Educación formal superior	Lussier, 1996; Texis, Ramírez Urquidy y Aguilar Barceló, 2016
Experiencia de los padres del gestor como administrador	Lussier, 1996
Experiencia en el sector / Conocimientos del mercado / Falta de conocimiento del negocio	Lussier, 1996; Grapeggia *et al.*, 2011; Santini *et al.*, 2015
Falta de capacitación en gestión / Experiencia en gestión	Bonacim, Cunha y Correa, 2009; Lussier, 1996
Planeamiento / Falta de plan de negocios	Lussier, 1996; Bonacim, Cunha y Correa, 2009
Clientes / Poca clientela / Falta de clientes	D'Amboise y Muldowney, 1988; Bonacim *et al.*, 2009; Santini *et al.*, 2015; Grapeggia *et al.*, 2011
Competidores / Fuerte competencia / Competencia	D'Amboise y Muldowney, 1988; Bonacim, Cunha y Correa, 2009; Santini *et al.*, 2015; Grapeggia *et al.*, 2011
Mala ubicación comercial	Bonacim, Cunha y Correa, 2009
Control y documentación financiera / Instrumentos de control administrativo	Lussier, 1996; Grapeggia *et al.*, 2011
Publicidad	Lussier, 1996
Atrasos en cuentas por cobrar / Clientes morosos / Clientes mal pagadores	Lussier, 1996; Bonacim, Cunha y Correa, 2009; Santini *et al.*, 2015
Problemas financieros / Falta de crédito	Bonacim, Cunha y Correa, 2009; Santini *et al.*, 2015
Trabajadores / Falta de mano de obra	Lussier, 1996; Santini *et al.*, 2015
Alta carga tributaria/ Situación regulatoria	Bonacim, Cunha y Correa, 2009; Santini *et al.*, 2015; Texis, Ramírez Urquidy y Aguilar Barceló, 2016
Contexto económico / Recesión económica del país	Lussier, 1996; Santini *et al.*, 2015

Los principales factores de mortalidad de las microempresas en el Perú, en conclusión, son la falta de publicidad, la situación económica, la alta cantidad de competencia, la falta de plan de negocio, la falta de mecanismos de control de efectivo y la dificultad para conseguir trabajadores.

En relación a los ingresos, los resultados muestran que no necesariamente son las microempresas con menores ingresos de ventas las más vulnerables al fracaso. Sin embargo, la tasa de salida o mortalidad de las microempresas en el Perú en conjunto alcanzaba el 5,9 % en 2014, y la de aquellas cuyos rangos de ventas se encontraban entre 0 y 2 UIT, el 13,3 %, lo que evidencia que las microempresas de subsistencia son las que padecen mayor mortalidad. Por tanto, el nivel de ingresos puede predisponer a la mortalidad de la microempresa.

Finalmente, es importante resaltar que muchas empresas al interpretar el artículo 51 de la Ley 28015 interpretaban que no tenían la obligación de aportar a los sistemas de pensiones vigentes pues, al leer el artículo, la palabra "podrán" denotaba una supuesta calidad de elección facultativa de cualquiera de estos sistemas de pensiones y de las aportaciones que debían realizarse, con la elección final de no escoger alguna de ellas.

Asimismo, en el año 2008 se promulgó el Decreto Legislativo 1086 en el que se precisaba que los trabajadores y conductores de la Microempresa podían afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales así como se creó el Sistema de Pensiones Sociales de carácter voluntario. Uno de los temas más relevantes de esta norma fueron los incentivos planteados para las microempresas con la finalidad de incrementar las contribuciones. El incentivo era el aporte del Estado efectuado anualmente hasta por la suma equivalente de los aportes mínimos mensuales que realice efectivamente el afiliado. Lamentablemente esta norma no se reglamentó pero aún sigue vigente.

No obstante, el 17 de octubre de 2013 se publicó la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros 6202-2013, estableciéndose la incorporación obligatoria de los trabajadores a cualquiera de los sistemas de pensiones, sin diferencia el tipo de empresas:

> ***Artículo Primero***. *- Sustituir el texto del artículo 2 del Título V del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Resolución N° 080-98-EF-SAFP y sus modificatorias, bajo el texto siguiente:*
>
> *"Artículo 2.- Incorporación al SPP. Cuando un trabajador ingrese a laborar a un centro de trabajo, el empleador deberá obligatoriamente requerirle que, a partir de su registro en la Planilla Electrónica (PE), le informe por escrito el sistema previsional al que se encuentra incorporado, con indicación de la AFP a la que está afiliado, de ser el caso.*
>
> *En caso el trabajador no pertenezca a ningún sistema pensionario, el empleador deberá entregar el Boletín Informativo a que hace referencia el artículo 16 de la Ley N° 28991, y deberá requerirle le informe el régimen pensionario al que desea ser incorporado mediante la suscripción del "Formato de Elección del Sistema Pensionario", aprobado mediante R.M. N° 112-2013-TR. El trabajador tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de*

la recepción del Boletín Informativo, para entregar el referido formato de elección, teniendo diez (10) días adicionales para ratificar o cambiar su decisión. El plazo máximo de elección es la fecha en que percibe su remuneración asegurable.

Sin perjuicio de que el trabajador ratifique o cambie su decisión de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, el empleador deberá, una vez cumplido el plazo máximo de elección o los primeros diez (10) días calendario contados a partir de la entrega del Boletín Informativo y en caso no hubiese elegido un sistema pensionario, informarle al trabajador su incorporación automática al SPP, a cuyo efecto la AFP, sobre la base de la información suministrada bajo los estándares de transmisión de la PE, llevará a cabo las acciones de contacto correspondiente.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sobre la base del convenio celebrado con la Superintendencia, proporcionará periódica y regularmente, a través del sistema de consulta de las Planillas Electrónicas (PE), la información de soporte correspondiente a fin que la Superintendencia transfiera dicha información a las AFP.

Las AFP, a través del Portal de Recaudación AFPnet, harán uso de procedimientos internos previos, a través del contraste con la información en línea que brinda el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), a fin de poder contar con las comprobaciones de los documentos de identidad (DNI) de los trabajadores que se incorporan al SPP, que faciliten su acceso a dicho sistema previsional, así como los procesos de registro, declaración y pago de aportes previsionales por parte de los empleadores.

En estos casos, la confirmación del DNI por parte de la AFP propiciará el envío al trabajador del "Documento de Registro SPP" (DRSPP) a que hace referencia el artículo 2A del presente Título, mediante correo electrónico, página web, y/u otros canales electrónicos y/o medios presenciales, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de recibida la información de los trabajadores incorporados al SPP. El "Documento de Registro SPP" constituye el Contrato de Afiliación Electrónica para el trabajador por parte de la AFP, el que también podrá ser descargado desde la zona privada en la página web de la AFP y/u otros canales electrónicos y/o presenciales bajo las particularidades de la regulación sobre la Afiliación electrónica de que trata el Título V del Compendio de Normas del SPP. Para todos los efectos, el trabajador contará con un plazo de tres (3)

días útiles para revisar y validar los datos ingresados en el DRSPP, de modo tal que su no objeción da lugar a una conformidad tácita acerca de los compromisos, derechos y obligaciones que le asisten en su calidad de trabajador afiliado a una AFP, con la salvedad prevista de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley Nº 28991.

Complementariamente, en el caso que un trabajador hubiera escogido pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones y, con posterioridad, decida cambiarse al SPP, deberá comunicar dicha decisión por escrito al empleador, a efecto de que este anote un cambio de estado en el "Régimen Pensionario" de la PE, y cumpliéndose con lo establecido en el cuarto párrafo del presente artículo, se prosiga con los procedimientos y plazos referidos a la emisión del DRSPP precitados en el párrafo precedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Título V, el DRSPP formará parte de la Carpeta Individual del Afiliado, debiendo dicho documento ser archivado digitalmente.

El tratamiento de los datos personales de los afiliados relacionados a su incorporación al SPP se realiza en el marco de la regulación de la materia y dentro de las excepciones establecidas en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley Nº 29733."

De esta manera, las micro y pequeñas empresas están obligadas a inscribir a sus trabajadores en el sistema previsional y retener los porcentajes de AFP y ONP para posteriormente hacer el pago a dicho sistema.

6.2.3 Problemática de los independientes

Las condiciones y la calidad del empleo que se genera en un país son consideraciones importantes para quienes toman decisiones de políticas públicas. Las particularidades de cada tipo de trabajo demandan estrategias distintas para problemas diversos.

El empleo independiente, por ejemplo, es atractivo para algunos por las posibilidades de manejar horarios propios y trabajar en distintos lugares y sectores. Para la mayoría, sin embargo, puede resultar una alternativa forzada por la falta de trabajo

dependiente y con flujo de ingresos claro. Sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares, el IPE puso bajo la lupa a los trabajadores independientes en el ámbito urbano del país[15].

Lo primero a resaltar es que tienen una participación importante en la fuerza laboral urbana, pues uno de cada tres trabajadores es independiente. De los 13 millones de personas que forman la población económicamente activa en el área urbana, 3,9 millones serían independientes y 5,9 millones, dependientes. El resto de trabajadores cae en las categorías desempleado, trabajador del hogar o trabajador familiar no remunerado.

El dato más saltante respecto a los trabajadores independientes es que, en promedio, su ingreso representa la mitad de lo que percibe uno de sus pares asalariados. Al cierre del 2018, un independiente ganaba unos S/. 986 al mes; mientras un dependiente recibía S/. 1.826. En los últimos 15 años, esta brecha se ha mantenido invariante, aunque sí resalta que los ingresos nominales promedio de ambos grupos se han duplicado desde el 2004.

¿A qué responde que ganen menos? En parte, porque laboran en condiciones de informalidad. Mientras 49% de los dependientes son informales, ocho de cada 10 independientes laboran en la informalidad. Como se recuerda, la literatura económica subraya que el empleo informal tiene una relación muy estrecha con la baja productividad, lo que redunda en menores salarios.

En este punto, es importante considerar que los independientes tendrían hoy pocas probabilidades de insertarse en un empleo asalariado formal. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima esa cifra en 7,5%. En tanto, de cada 100 personas que dejan un trabajo independiente, 20 ingresan a empleos dependientes informales y 33 a otro empleo independiente. Así, sus posibilidades de pasar a empleos de mejor calidad son reducidas, de acuerdo a la entidad internacional.

Según la actividad económica, el grueso de los independientes se desempeña en comercio y transportes (54% del total) y servicios (23%), cuyos salarios promedio son S/. 1.051 y S/. 1.008, respectivamente. Los trabajadores dependientes también se

[15] Informe de El Comercio – Instituto Peruano de Economía. Independencia y Vulnerabilidad. Lima, 9 de marzo de 2020.

agrupan mayoritariamente en estos sectores (60% en conjunto), aunque perciben mayores salarios: S/. 1.557 en comercio y S/. 1.859 en servicios. Un detalle a notar es que la rama de electricidad, agua y gas es la más atractiva para los independientes, pues ganan S/. 3.302 al mes, en promedio. Sin embargo, apenas 0,01 % trabaja en esos sectores[16].

En línea con los menores salarios, hay temas de capital humano que están relacionados con los menores ingresos de los trabajadores independientes, que además explicarían por qué la brecha respecto a los dependientes persiste y las dificultades de incorporarse a una planilla. Un primer punto es que los independientes tienden a conseguir menos logros en términos de educación. Por ejemplo, el 42% de los independientes no cuenta con educación básica completa, el 33% sí la completó y solo 25% alcanzó estudios superiores.

Esto contrasta con las cifras de los trabajadores asalariados. El 51% sí tiene estudios superiores, el 31% completó secundaria y el 18% no logró terminar la educación básica.

Un factor adicional que apunta a la vulnerabilidad es que los trabajadores independientes, en su mayoría, carecen de acceso a servicios de salud eficientes. De cada 10 independientes, cuatro están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y cuatro no tienen ningún tipo de seguro. En contraste, alrededor de cinco de cada 10 trabajadores dependientes tienen acceso a Essalud y otros tres tienen seguros privados o SIS[17].

Desde la creación del sistema de pensiones en el Perú, se han registrado avances en cobertura, aunque con marcadas diferencias entre trabajadores dependientes e independientes. Esto se debe, en gran parte, a que el sistema previsional contributivo, casi por definición, está diseñado para trabajadores dependientes. La muy baja inclusión de los independientes, cuyas condiciones laborales son muy heterogéneas, requiere de reformas integrales para evitar que caigan en una situación de pobreza durante su vejez.

La diferencia en la cobertura del sistema de pensiones entre los trabajadores dependientes e independientes se ha ampliado en los últimos 16 años. Mientras que

[16] Informe de El Comercio – Instituto Peruano de Economía. Op. Cit.
[17] Ibidem.

la proporción de dependientes afiliados al sistema previsional aumentó de 39% en el 2005 a 56% en el 2021, el incremento de la cobertura entre los independientes apenas pasó de 9% a 21% en el mismo período. Sin embargo, estar afiliado no asegura una contribución efectiva que permita acceder a una mejor pensión de jubilación[18].

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el porcentaje de trabajadores independientes afiliados al sistema previsional que aportó en los últimos doce meses únicamente pasó de 2% en el 2005 a 4% en el 2021, esto es, el 96% de los independientes estarían en riesgo de no tener una pensión. La falta de contribuciones efectivas de los trabajadores independientes, que representan más del 40% del total de la fuerza laboral nacional ocupada, puede resultar en una falta de ahorro para su jubilación y un mayor riesgo de ser pobres durante su vejez.

En comparación con los trabajadores dependientes o asalariados, los independientes suelen emplearse en sectores económicos menos productivos y que proveen menores ingresos, como agropecuario y comercio, que predominan en los segmentos de ingresos más bajos, según datos de la ENAHO. Por ejemplo, en el quintil más bajo (20 % con menores ingresos), el 63 % de trabajadores están empleados en dichos sectores, de acuerdo con cálculos del IPE. Por el contrario, los dependientes laboran mayormente en los sectores servicios e industria, que están asociados a mayores ingresos. En particular, en el quintil más alto, el 74 % está empleado en dichos sectores[19].

Otro aspecto que caracteriza a los trabajadores independientes es la considerable disparidad de ingresos que existe dentro de este grupo. En efecto, uno de cada tres trabajadores independientes se ubica en el quintil más bajo de ingresos, con una remuneración promedio mensual de S/. 193. Por otro lado, el quintil de ingresos más altos solo incluye al 10 % de trabajadores independientes y logra un ingreso promedio de S/. 3.335 al mes, más de 17 veces que el quintil de menores ingresos.

El bajo nivel de ingresos de la mayoría de independientes hace virtualmente imposible que aporten al sistema previsional con el diseño actual. Además, su bajo nivel de cotización los obligaría a contribuir por más tiempo para acceder a una mejor

[18] Informe de El Comercio – Instituto Peruano de Economía. El 96% de los independientes en riesgo de no tener pensión. Lima, 22 de abril de 2023.
[19] Informe de El Comercio – Instituto Peruano de Economía. Op. Cit.

jubilación. Por ejemplo, un independiente que percibe salarios cercanos a una remuneración mínima vital (RMV) a lo largo de su vida laboral tendría que registrar 40 años de aportes efectivos para alcanzar una pensión de un valor similar, tiempo que se reduce a diez años si es que se compara con un trabajador que percibe ingresos equivalentes a cinco RMV.

Cualquier reforma para elevar la cobertura de sistema previsional en los trabajadores independientes inevitablemente demandará recursos fiscales adicionales y debería financiar solo a los más vulnerables, no a los que más tienen. Por ello, la atención a esta problemática requiere una estrategia focalizada y adecuada a las diversas características que muestra este gran segmento del mercado laboral.

En el caso de los trabajadores independientes de ingresos medios, la limitada cobertura y baja frecuencia de aportes requiere, por un lado, de la creación de incentivos financieros desde el Estado.

El 2013 se promulgó la Ley 30082 que aplicaba una tasa de aporte a los trabajadores independientes; sin embargo, esta contemplaba una gradualidad de aplicación muy corta y además no diferenciaba independientes por niveles de ingresos. Un año después fue derogada.

En lugar de acciones aisladas y contraproducentes como las que se han implementado en los últimos años, la situación del sistema de pensiones en el Perú exige cambios con un enfoque integral para convertirlo en un esquema más inclusivo. No considerar las particularidades del empleo independiente en el Perú provocará que el debate alrededor de la reforma previsional continúe acotado a un pequeño grupo de trabajadores, los dependientes, a costa de la exclusión de la gran mayoría.

6.2.4 Problemática de los informales

El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el estado puede ofrecer. Esta definición, introducida por De Soto (1989) en su clásico estudio sobre la informalidad, permite concentrar el análisis en las causas de la informalidad antes que en sus síntomas.

La informalidad –una característica fundamental del subdesarrollo– se configura tanto a partir del modelo de organización socioeconómica heredado por economías en transición hacia la modernidad como a partir de la relación que establece el estado con los agentes privados a través de la regulación, el monitoreo y la provisión de servicios públicos. Por ello, la informalidad debe ser entendida como un fenómeno complejo y multifacético.

La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector –largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro– como en términos de permanecer dentro del mismo –pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros[20].

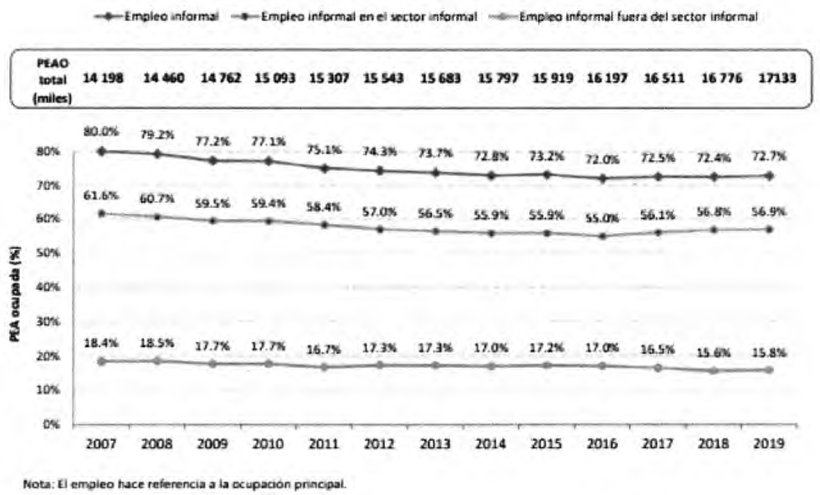
Evolución del empleo informal[21]

El empleo informal concierne aproximadamente a tres de cada cuatro peruanos de la Población Económicamente Activa Ocupada (población ocupada). El gráfico muestra que desde el año 2007 el porcentaje de empleos informales ha venido decreciendo, pasando de 80,0% en dicho año a 72,7% en el 2019.

El empleo informal se descompone en empleo informal dentro del sector informal y fuera de él. En efecto, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición son "formales": Sociedades Financieras y No Financieras, Instituciones sin fines de lucro y Gobierno.

Perú: Evolución del empleo informal 2007 - 2019

[20]https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf.
[21] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1764/cap04.pdf.



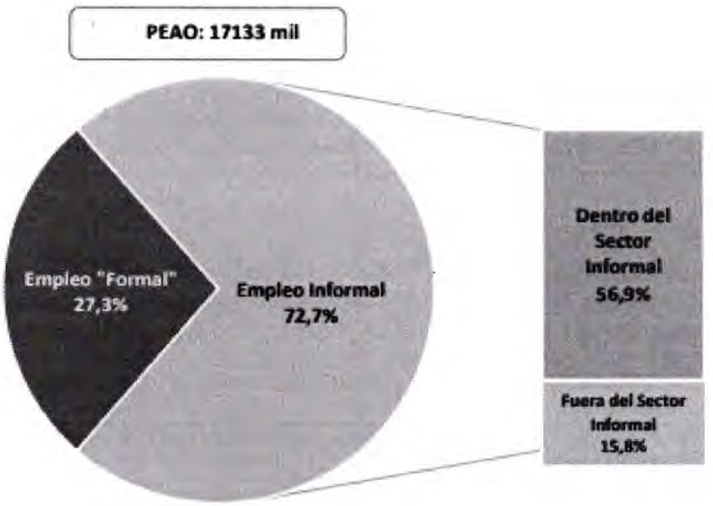
Nota: El empleo hace referencia a la ocupación principal.

Fuente: INEI.

La mayor parte del empleo informal se ubica dentro del sector informal, representando el 61,6% de la PEA ocupada en el 2007 y 56,9% en 2019; el empleo informal fuera del sector informal representó el 18,4% de la PEA ocupada en el 2007 y 15,8% en 2019. Es de mencionar que el comportamiento del empleo informal se debe básicamente a la evolución del empleo en el sector informal.

El siguiente gráfico presenta la naturaleza "formal" o informal de la ocupación principal de la población ocupada en el año 2019. Este gráfico permite apreciar más claramente las proporciones del empleo desde el punto de vista de la informalidad. Por un lado, solo el 27,3% de la población ocupada cuenta con empleo "formal". La mayor parte tiene empleo informal (72,7%), el cual se encuentra mayoritariamente en el sector informal (56,9%) y en menor medida fuera del sector informal (15,8%).

Perú: PEA ocupada por empleo "formal" e informal dentro y fuera del sector informal, 2019

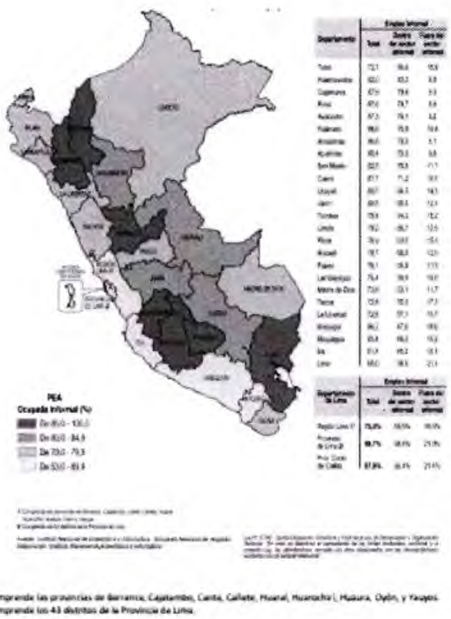


Nota: - El empleo hace referencia a la ocupación principal.
La diferencia que pudiera presentarse, se debe al redondeo de cifras.

Fuente: INEI.

El mapa a continuación muestra la estructura del empleo informal por departamentos, dentro del sector informal y fuera del sector informal. La mayor proporción de empleo informal se encuentra en los departamentos de Huancavelica, Cajamarca, Puno y Ayacucho. En contraste, los departamentos de Arequipa, Moquegua, Ica y Lima son los que presentan menor proporción de empleo informal. En relación al empleo informal dentro del sector informal, los departamentos de Huancavelica y Cajamarca son los que registran los mayores porcentajes, en cambio Ica y Lima se distinguen por tener relativamente poco empleo informal. En el departamento de Lima, que en el presente estudio comprende: Región Lima, Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao, la incidencia del empleo informal es del 75,0%, 58,7% y 57,8% respectivamente.

Perú: PEA ocupada informal dentro y fuera del sector informal según departamento, 2019



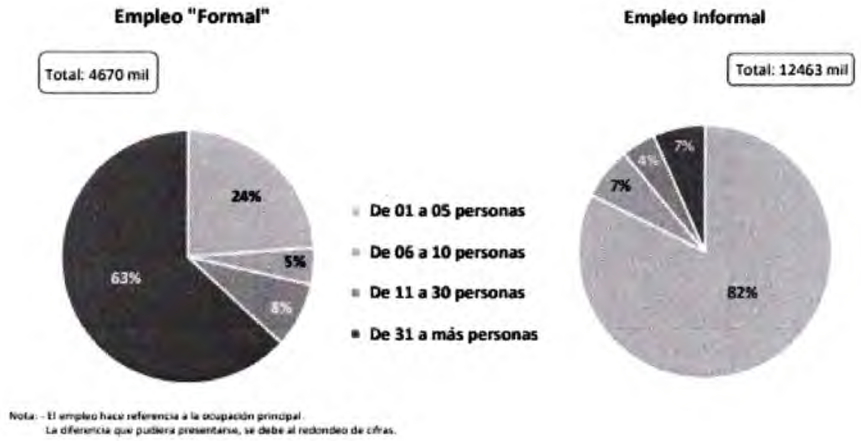
Fuente: INEI.

Empleos por características laborales[22]

Como se indicó, tres de cada cuatro trabajadores de la población ocupada tienen empleo informal. El gráfico siguiente presenta el empleo informal por tamaño de empresa, se observa que en las empresas de menor tamaño relativo se encuentra la mayor proporción de empleo informal; en contraste, el empleo "formal" se concentra en las empresas de mayor tamaño. El 63% de la población ocupada con empleo "formal" labora en empresas de 31 a más personas, mientras que el 82% de la población ocupada con empleo informal lo hace en empresas de 5 o menos personas ocupadas.

Perú: PEA ocupada por empleo "formal" e informal según tamaño de empresa, 2019

[22] Ibidem.



Fuente: INEI.

En el gráfico siguiente, el empleo informal en el sector informal presenta un 93,1% que laboran en empresas de menos de 6 trabajadores. Por otro lado, el 43,5% del empleo con empleo informal fuera del sector informal laboran en empresas de menos de 6 trabajadores y el 28,6% en empresas de 31 a más trabajadores.

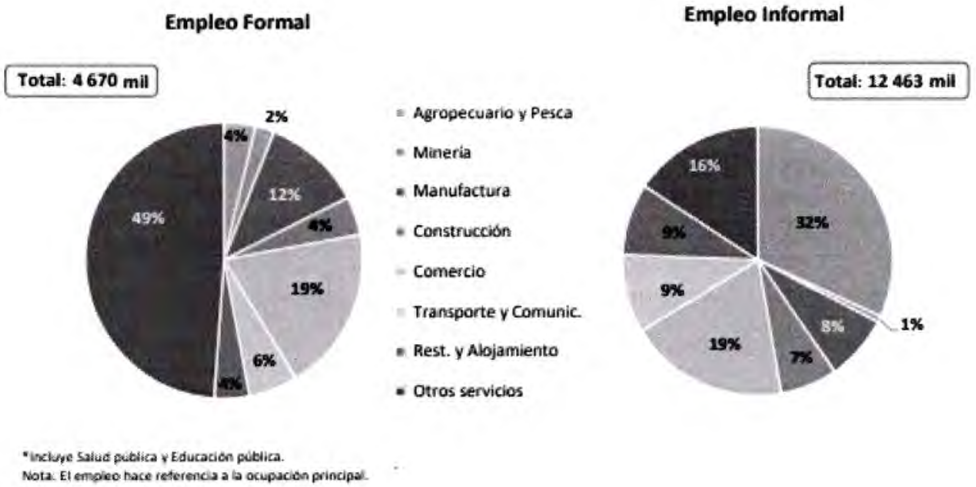
Perú: PEA ocupada con empleo informal dentro y fuera del sector informal según tamaño de empresa, 2019



Fuente: INEI.

El gráfico siguiente muestra la población económicamente activa ocupada "formal" e informal por actividades económicas. Se observa que los empleos informales, se concentran en las actividades Agropecuarias y pesca (32%), Comercio (19%), así como Transporte y comunicaciones (9%). En relación al empleo "formal" se encuentra principalmente en las actividades Otros servicios (49%), Comercio (19%) y Manufactura (12%).

Perú: PEA ocupada por empleo "formal" e informal y actividad económica, 2019



Fuente: INEI.

El gráfico siguiente muestra la población económicamente activa ocupada informal dentro y fuera del sector informal por actividades económicas. La distribución del empleo informal total en el sector informal según actividades, es similar a la del empleo informal total; en el caso del empleo informal fuera del sector informal la mayor parte del empleo se encuentra en las actividades Otros servicios (45,2%), Comercio (17,3%) y Manufactura (13,0%) principalmente.

Perú: PEA ocupada con empleo informal dentro y fuera del sector informal según actividad económica, 2019



*Incluye Salud pública y Educación pública.
Nota: La diferencia que pudiera presentarse, se debe al redondeo de cifras.

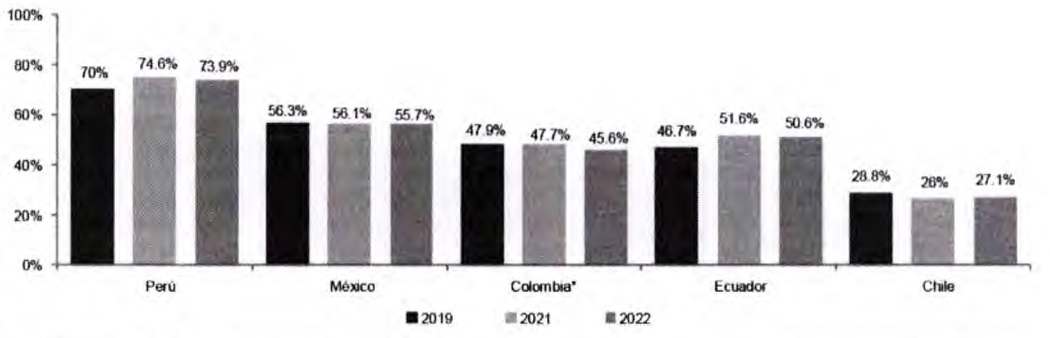
Fuente: INEI.

De acuerdo con recientes investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras el severo efecto de la pandemia, la cantidad de personas que busca activamente empleo y aquella que se encuentra ocupada en la región de Latinoamérica y el Caribe continúa ligeramente rezagada respecto de los resultados de 2019. No obstante, en los países que muestran una recuperación en el dinamismo del mercado laboral, los niveles de informalidad ya no superan los resultados pre pandemia.

Debido a esto, al cierre del año pasado, la informalidad laboral ascendió al 50% en promedio para la región de Latinoamérica y el Caribe, lo que representó un valor similar a lo registrado en 2019. Estos resultados posicionan, nuevamente, al Perú como uno de los países más informales de la región, con una tasa del 73.9% durante el segundo trimestre de 2022, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Si bien esto puede significar un "progreso" en la proporción de informales con relación al promedio del año pasado (76.8%), la cantidad de trabajadores informales creció en 569,534 respecto de abril-junio de 2021[23].

[23] https://www.comexperu.org.pe/articulo/informalidad-laboral-peruana-continua-al-alza-como-nos-posicionamos-en-la-region.

Evolución de la informalidad laboral en el segundo trimestre, según países



*Se consideran las 23 ciudades y áreas metropolitanas.
Fuente: Enaho, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Elaboración: Comex Perú

En el 2021, la tasa de informalidad laboral en el Perú ascendió a 76,8%, el nivel más alto en los últimos 11 años. Ello habría significado el ingreso de casi 700 mil trabajadores al sector informal respecto al nivel pre pandemia.

La mayoría de los empleos informales se han generado en el área urbana, a través de la mayor contratación de mano de obra no calificada en empresas de uno a 10 trabajadores, concentradas principalmente en unidades productivas del sector agropecuario.

La mayor informalidad ha traído consigo un deterioro significativo de los ingresos laborales. En el primer trimestre del 2022, los salarios de los trabajadores del sector informal se habrían situado aún 15% por debajo de los niveles registrados en el mismo período del 2019. Esto representa alrededor de S/. 230 mensuales menos de capacidad adquisitiva, cifra que incluye también el alza en el costo de la canasta básica.

En tanto, las remuneraciones reales en el sector formal, si bien son 2,6 veces superiores al promedio informal, se han mantenido estancadas respecto de lo alcanzado antes de la pandemia de la COVID-19.

Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, el Perú registra el octavo nivel más bajo en cuanto a productividad laboral por hora trabajada entre 24 economías de América Latina y El Caribe, solo por encima de países como Guatemala, Bolivia y Honduras. En efecto, un trabajador peruano promedio requiere casi el triple del tiempo para producir lo mismo que su par chileno[24].

Una de las razones detrás de estas brechas se encuentra asociada a la mayor informalidad en la fuerza laboral en el Perú. Según estimaciones del IPE, apuntar a medidas que reduzcan la informalidad en el país al promedio de América Latina aumentaría la productividad laboral peruana hasta niveles cercanos a los que tienen Brasil o México.

El último reporte del INEI sobre el comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional respecto al 2021 revela que la población ocupada urbana con empleo informal, es decir, sin beneficios sociales o que trabajan en unidades de producción no registradas, alcanzaron los 9'446,300 personas lo que representa el 71.4% del total de ocupados del área urbana.

Comparado con el año 2020, la población con empleo informal aumentó en 23.6%, lo que implica que 1.8 millones de peruanos ingresaron a la informalidad laboral y respecto al 2019 creció en 6.5% lo que implica que 574,700 peruanos entraron a la informalidad laboral[25].

Área urbana: población ocupada con empleo informal, según dominios geográficos, 2019 – 2021 (miles de personas y variación porcentual)

[24] Informe de El Comercio – Instituto Peruano de Economía. Trabajadores informales ganan 15% menos que antes de pandemia. Lima, 2 de mayo de 2022.

[25] https://gestion.pe/economia/management-empleo/cerca-de-18-millones-de-peruanos-entraron-a-la-informalidad-laboral-el-2021-informalidad-laboral-inei-trabajo-sin-derechos-sociales-noticia/.

Dominios geográficos	Anual: Enero-Diciembre			Variación			
				2021/2019		2021/2020	
	2019	2020	2021 P/	Var.%	Miles de personas	Var.%	Miles de personas
Total	8 871,6	7 642,0	9 446,3	6,5	574,7	23,6	1 804,3
Dominios geográficos							
Costa	5 700,2	4 603,3	5 767,5	1,2	67,3	25,3	1 164,2
Costa Norte	1 624,6	1 365,0	1 649,1	1,5	24,5	20,8	284,1
Costa Centro	3 864,5	3 063,9	3 888,2	0,6	23,7	26,9	824,3
Costa Sur	211,1	174,4	230,2	9,1	19,1	32,0	55,8
Sierra	2 091,2	1 936,2	2 388,5	14,2	297,3	23,4	452,3
Sierra Norte	228,7	215,6	268,8	17,5	40,1	24,7	53,2
Sierra Centro	779,2	705,4	869,0	11,5	89,8	23,2	163,6
Sierra Sur	1 083,3	1 015,3	1 250,7	15,5	167,4	23,2	235,4
Selva	1 080,3	1 102,5	1 290,4	19,5	210,1	17,0	187,9

P/ Información preliminar

Fuente: INEI.

El reporte añade que, en el año 2021, la tasa de empleo informal del país fue de 76,8% siendo 1.5 puntos porcentuales más que en el año 2020 y 4.1 puntos porcentuales más que en el 2019. En el área urbana la tasa de informalidad subió de 68.4% en el año 2020 a 71.4% en el 2021. En el área rural, el 95.3% de la población ocupada es informal.

Área urbana: población ocupada con empleo informal, según grupos de edad y nivel de educación alcanzado, 2019 – 2021 (miles de personas y variación porcentual)

Sexo/Grupos de edad/Nivel de educación	Anual: Enero-Diciembre			Variación			
				2021/2019		2021/2020	
	2019	2020	2021 P/	Var.%	Miles de personas	Var.%	Miles de personas
Total	8 871,6	7 642,0	9 446,3	6,5	574,7	23,6	1 804,3
Hombre	4 659,4	4 279,5	5 151,4	10,6	492,0	20,4	871,9
Mujer	4 212,2	3 362,5	4 295,0	2,0	82,8	27,7	932,5
Grupo de edad							
De 14 a 24 años	1 741,0	1 391,2	1 809,6	3,9	68,6	30,1	418,4
De 25 a 44 años	4 017,4	3 579,8	4 360,8	8,6	343,4	21,8	781,0
De 45 y más años	3 113,3	2 671,0	3 275,9	5,2	162,6	22,7	604,9
Nivel de educación							
Hasta primaria 1/	1 937,2	1 675,5	2 037,6	5,2	100,4	21,6	362,1
Secundaria	4 472,1	3 948,0	4 938,0	10,4	465,9	25,1	990,0
Superior no Universitaria	1 308,2	1 082,6	1 349,3	3,1	41,1	24,6	266,7
Superior Universitaria	1 152,5	933,6	1 118,2	- 3,0	- 34,3	19,8	184,6

P/ Información preliminar.
1/ Incluye inicial y sin nivel.

Fuente: INEI.

Finalmente, cabe señalar que el Perú tiene un sistema de pensiones fragmentado: un 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en la informalidad; un 12% aporta al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y un 18% de la PEA aporta a las AFP mediante aportes de ahorro individual. El sistema nacional de pensiones se ha mantenido en la agenda pública a lo largo de toda la pandemia del COVID-19, pues sus problemas se han hecho evidentes.

Esta distribución es ineficiente y genera segmentaciones y coberturas muy limitadas. La pensión contributiva -que incluye a los afiliados a la ONP y las AFP- solamente alcanza al 30% de la PEA; alrededor del 10% de los mayores de 65 años reciben Pensión 65 y, finalmente, tenemos a un 60% de la población mayor de 65 años que no tiene nada para jubilarse.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? El principal problema está en el propio mercado laboral peruano, altamente informal, que imposibilita la creación de un sistema de pensiones robusto. El segundo gran obstáculo es el mal diseño del sistema previsional

peruano. Finalmente, las condiciones del Perú como país emergente -como la falta de capacidad de ahorro de la población- limitan la posibilidad de crear un mejor sistema de pensiones[26].

6.3 ONP: fallas del sistema de reparto y necesidad de cuentas individuales

El envejecimiento de la población es el principal fenómeno demográfico de esta época y adquirirá especial relevancia para la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones en la región. La transición demográfica y el acelerado envejecimiento que ha generado la reducción de las tasas de mortalidad y fecundidad, entre otras causas, harán que los sistemas de pensiones sean cada vez más gravitantes por sus efectos fiscales, económicos, sociales y políticos. La acelerada transición demográfica, sin precedentes en América Latina, requerirá que en los países de la región se actúe de forma anticipada y se proteja mediante reformas en los sistemas previsionales y reformas tributarias, que viabilicen la implementación de políticas públicas que permitan enfrentar la probable desprotección social[27].

En las próximas décadas no solo habrá una mayor proporción de personas mayores, sino que la velocidad del envejecimiento en América Latina será muy superior al proceso de envejecimiento que se observó en Europa (Huenchuan, 2013)[28]. En dicho continente, la población de 65 años y más pasó de representar el 8% a representar el 16% de la población total en un período de más de medio siglo (56 años). Según las proyecciones de población del CELADE-División de Población de la CEPAL, esto tomará en promedio solo 24 años en América Latina, con transiciones demográficas más veloces en algunos países, entre los que destacan el Brasil y Colombia, donde la proporción de este grupo de personas mayores respecto de la población total se duplicará en dos décadas.

Asimismo, se indica que dos de los indicadores más utilizados para analizar los cambios demográficos y los efectos que estos pueden tener en los sistemas de pensiones son la relación de dependencia demográfica y la relación de apoyo potencial.

---

[26] https://www.ipae.pe/nota-de-prensa-cadeejecutivos-la-informalidad-es-el-principal-obstaculo-para-construir-un-mejor-sistema-de-pensiones/.

[27] CEPAL- ALBERTO ARENAS DE MESA, Los sistemas de pensiones en la encrucijada Desafíos para la sostenibilidad en América Latina

[28] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44369/1/S1800629_es.pdf
CEPAL- SANDRA HUENCHUAN, Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Perspectiva regional y de derechos humanos

La relación de dependencia demográfica total es la que existe entre la población teóricamente dependiente (jóvenes y personas mayores) y la población en edad activa (potenciales trabajadores). Este indicador puede descomponerse en la relación de dependencia de los jóvenes (jóvenes/población en edad activa) y la relación de dependencia de las personas mayores (personas mayores/población en edad activa). El inverso de este último indicador es la relación de apoyo potencial, es decir, la población en edad activa (potenciales trabajadores) por cada persona de 60 o 65 años y más.

El desarrollo institucional de los sistemas de pensiones está marcado por los sistemas de pensiones obligatorios y contributivos, especialmente en América Latina, donde los países pioneros en esta materia crearon sus sistemas previsionales en las primeras décadas del siglo XX. El principal objetivo de un sistema de pensiones es proveer un seguro de ingresos (por concepto de invalidez, vejez y muerte), que permite distribuir el consumo a lo largo del ciclo de vida. En una definición más integral de los sistemas de pensiones también se tienen en cuenta objetivos de política pública, como la reducción de la pobreza y la redistribución del ingreso (Barr y Diamond, 2008; Mesa-Lago, 2008).

En los enfoques más modernos de la protección social, el desarrollo de los sistemas de pensiones implica lograr el equilibrio, además de la clásica función de seguro de los ingresos frente a distintos riesgos, incorpora la solidaridad necesaria para que los sistemas previsionales sean sostenibles y permitan enfrentar la pobreza y la desigualdad provocadas, entre otras causas, por los bajos índices de cobertura y la deficiencia de las prestaciones.

Considerando los principios normativos de la seguridad social, los sistemas de pensiones deberían promover la distribución del ingreso y la solidaridad entre sus miembros. En general, los clásicos sistemas de pensiones contributivos de reparto dan lugar a transferencias inter e intra generacionales. Estas transferencias van de jóvenes a personas mayores, de personas de ingresos altos a personas de ingresos bajos. En las reformas estructurales de los sistemas de pensiones de la región en distintas ocasiones se han modificado o eliminado estas transferencias y se ha creado una carga fiscal futura potencial (un pasivo contingente) que el Estado deberá cubrir (Arenas de Mesa, 2010).

Los sistemas de pensiones se han ubicado en el centro del debate de la protección social y, debido a los importantes compromisos de gasto público que crean, son también un eje fundamental de la política fiscal. Además, el envejecimiento de la población

llevará a que los sistemas de pensiones sean cada vez más relevantes, y su sostenibilidad será uno de los principales desafíos de la región.

La sostenibilidad de los sistemas de pensiones está relacionada al concepto de solvencia, es decir, a la capacidad de los sistemas para enfrentar sus obligaciones o cumplir los compromisos de cobertura y suficiencia de las prestaciones de forma indefinida, sin dejar de ser solventes. En este contexto, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones es un concepto integral que incluye al menos tres dimensiones: i) la cobertura adecuada; ii) la suficiencia de las prestaciones, y iii) la sostenibilidad financiera. Encontrar el equilibrio entre estas tres dimensiones, sin que ninguna de ellas ponga en riesgo a las demás, será fundamental para asegurar que los sistemas de pensiones de América Latina vayan por una senda de sostenibilidad. En general, el déficit en una o más de estas dimensiones provoca debates sociales y lleva a que se reformen los sistemas de pensiones.

El funcionamiento de los sistemas de pensiones está estrechamente relacionado tanto con las características del mercado laboral como con el período en que los individuos son dependientes de la economía familiar o de los ingresos que sus familias les transfieren. En el ciclo de vida de las personas pueden identificarse al menos cuatro hitos que condicionan los sistemas de pensiones: i) el nacimiento, ii) el ingreso al mercado laboral, iii) la jubilación, es decir, el retiro del mercado laboral, y iv) el fallecimiento. Estos cuatro hitos, entre otras dimensiones, caracterizan los ingresos que podrían recibir los individuos en el ciclo de vida: i) ingresos provenientes del ámbito de la familia; ii) ingresos provenientes del mercado laboral, y iii) ingresos provenientes del sistema de pensiones. La evaluación del funcionamiento y los resultados de los sistemas de pensiones están en parte condicionados por lo que ocurre en el ámbito de la familia, en el mercado laboral (ingresos laborales, períodos de desempleo, informalidad y características laborales) y en el sistema de pensiones (diseño, modelos y normativas previsionales)[29].

En América Latina, los sistemas de reparto nacieron de forma muy temprana (en las primeras décadas del siglo XX) y la región fue pionera en la implementación de sistemas

[29] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44851/4/S1900521_es.pdf
CEPAL- ALBERTO ARENAS DE MESA, Los sistemas de pensiones en la encrucijada Desafíos para la sostenibilidad en América Latina

públicos de pensiones de reparto o de capitalización parcial colectiva[30]. La visión bismarckiana incidió en el diseño de los sistemas de reparto: las contribuciones que se hacían al sistema generaban el flujo de financiamiento de los beneficios del presente y también garantizaban los derechos de los asegurados que accedían a beneficios en el futuro, que se financiaban con los aportes de las nuevas generaciones.

Algunas de las principales características de los sistemas de pensiones de reparto es que presentan transferencias inter- e intrageneracionales, su administración es pública y sus prestaciones están determinadas por ley (en la mayoría de los casos, en la ley se fijan una tasa de reemplazo, los requisitos de acceso y la reajustabilidad de las prestaciones). Las cotizaciones también están determinadas por ley y pueden ser con cargo a los trabajadores, empleadores y el Estado, en cuyo caso se dice que el sistema de reparto tiene un financiamiento tripartito.

En la región hay diez países que cuentan con un sistema público de reparto o de capitalización parcial colectiva[31]. Entre los que tienen sistemas de reparto se encuentran la Argentina, el Brasil, Cuba, Haití y la República Bolivariana de Venezuela. Entre los que presentan un sistema público de capitalización parcial colectiva están el Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay. Los sistemas de pensiones de todos estos países se han modificado en las últimas décadas, y en algunos se han introducido reformas paramétricas recientes o estas se encuentran en discusión, como es el caso del Brasil (2016-2017, véase el capítulo II), Cuba (2009), el Ecuador (2015) y Honduras (2014). En otros países se intentó hacer reformas estructurales e introducir la capitalización individual, pero esas reformas finalmente no se implementaron: ese fue el caso de Nicaragua (2000) y el Ecuador (2001).

La transición demográfica (el envejecimiento) que caracteriza la región ejerce presiones para que se implementen reformas paramétricas en los sistemas de pensiones, en especial en los sistemas públicos de reparto, ya que mientras la proporción de personas

[30] Un sistema de capitalización parcial colectiva se basa en una prima media escalonada que permite acumular reservas por un período inicial; esas reservas se invierten y, con sus rendimientos y las contribuciones siguientes, se financian las pensiones.

[31] Hay otros cinco países que también tienen sistemas públicos de reparto (o de capitalización parcial colectiva) como parte del sistema de pensiones. Entre ellos se encuentran Colombia y el Perú, donde el sistema público es parte de un modelo paralelo de pensiones y Costa Rica y Panamá, donde el sistema público es parte de un modelo mixto de pensiones. Además, está el caso del Uruguay, donde el sistema de reparto forma parte de un modelo mixto de pensiones.

en edad de trabajar disminuye, la masa de pensionados aumenta[32]. Será fundamental definir reglas claras y hacer estudios actuariales para respaldar la posibilidad de modificar los parámetros previsionales frente a los efectos demográficos regionales. La estabilidad y la gobernabilidad de los sistemas previsionales públicos de reparto estarán estrechamente vinculadas al equilibrio que se alcance entre la protección social efectiva (la cobertura adecuada y la suficiencia de los beneficios) y la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones en América Latina.

Modelo paralelo: competencia entre el reparto y la capitalización individual

El modelo del sistema de pensiones paralelo es cuando los trabajadores deben elegir entre el sistema público de reparto o el sistema de capitalización individual y, por tanto, ambos sistemas son excluyentes y conviven compitiendo por los afiliados. Ambos sistemas funcionan en forma paralela y las personas eligen en cuál se afilian; en algunos casos, existe la posibilidad de cambiarse de sistema[33].

Este modelo se implementó en el Perú (1993) y luego en Colombia (1994). En el Perú se puso en práctica una reforma estructural que creó el modelo paralelo de pensiones. A principios de los noventa, dados los antecedentes que se manejaban de la experiencia chilena, entre otros, los importantes efectos fiscales que se habían producido en la transición previsional, se desechó la idea de implementar un modelo sustitutivo y se mantuvo el sistema público de reparto. Eso dio origen al modelo paralelo. El sistema de pensiones peruano se ha modificado en los últimos 25 años, y las reformas más importantes han tenido lugar en los últimos diez. En 2012 se aprobó una ley en que se establecía la cotización obligatoria de los trabajadores independientes (por cuenta propia) que percibieran una renta superior a determinado umbral. En el caso de los trabajadores cuya renta fuera inferior a dicho umbral, el Estado entregaría un bono (un subsidio) a la cotización, para ampliar la cobertura de los más vulnerables. Además, en esta reforma se incluyó la licitación de cartera de los nuevos afiliados al Sistema Privado de pensiones cada dos años. El otro cambio fundamental en la legislación previsional peruana ocurrió en 2016, cuando se creó una nueva modalidad de pensión según la

[32] El envejecimiento de la población y, en especial, el aumento de la expectativa de vida en el momento del retiro ejerce presión para que se hagan reformas en todos los sistemas de pensiones, sean estos de reparto, de capitalización individual o una composición de ambos.
[33] CEPAL- ALBERTO ARENAS DE MESA, Los sistemas de pensiones en la encrucijada Desafíos para la sostenibilidad en América Latina.

cual los mayores de 65 años pueden retirar hasta el 95,5% de sus ahorros previsionales en el momento en que se jubilen.

En Colombia, en 1994 se siguieron los pasos de la reforma peruana y se introdujo la capitalización individual para que conviviera con el sistema público de reparto de modo que ambos sistemas fueran excluyentes entre sí. De ese modo, Colombia se convirtió en el segundo país en establecer un sistema paralelo de pensiones en la región. Los efectos fiscales de implementar el modelo sustitutivo, sumados a la complicada economía política que suponía cerrar el sistema público de pensiones, fueron los motivos que llevaron a que en el país se pusiera en práctica este tipo de modelo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su libro, sobre Encrucijadas en la Seguridad Social Argentina, reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, describe que en los años noventa[34], surgió una gran controversia en torno a cuál era la forma como se debía organizar la función de seguro y ahorro, para la jubilación dado que los organismos que promovían lineamientos desde el Consenso de Washington, como el Banco Mundial, sugerían la adopción de un sistema de cuentas individuales de ahorro previsional, administrado privadamente, mientras que otros organismos, como la Oficina Internacional del Trabajo y la Asociación Internacional de Seguridad Social, preferían un esquema de beneficio definido, administrado públicamente (Gillion y Bonilla 2002; Mesa-Lago, 1996).

En relación con los aspectos demográficos, es necesario observar que las reformas que implican la sustitución de un esquema de reparto por uno de capitalización generan efectos intergeneracionales sin resolver los problemas que surgen del envejecimiento poblacional. Respecto a esto último, las soluciones pasan por modificar la edad de retiro y otros parámetros del sistema como las prestaciones y contribuciones, dado que la introducción de cuentas individuales no implica necesariamente que los individuos opten voluntariamente por edades de retiro más tardías para compensar los efectos de una mayor expectativa de vida. Por otra parte, también debe considerarse que los incrementos en la edad de retiro pueden afectar a otros programas de la seguridad social (como el seguro de desempleo o las pensiones por invalidez) y de la asistencia social (como los programas de alivio de la pobreza, en general).

[34] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_29187.pdf

También, cabe señalar que la sustitución de un sistema de reparto por uno de capitalización no genera, necesariamente, mayores tasas de crecimiento económico (Barr y Diamond, 2008) y, de acuerdo con la experiencia reciente en América Latina, la introducción de cuentas individuales ha demostrado que una mejor vinculación entre contribución y beneficios previsionales no genera por sí misma mayor cobertura a través de mejoras en la extensión (cantidad de cotizantes) ni de mejores densidades de aportes (regularidad en las cotizaciones de los ya asegurados). De esta manera, tampoco puede esperarse que una estrategia basada en esquemas de cuentas nocionales induzca automáticamente a mejorar los incentivos a cotizar (Bertranou, 2005a). En todos los casos, el diseño del sistema debe ser compatible con la capacidad institucional del país. En este sentido, por ejemplo, las reformas no deberían permitir que las pensiones que surgen de esquemas como los de capitalización queden expuestas a mercados de capitales poco desarrollados y con una inadecuada regulación (Barr y Diamond, 2008)[35]. Es importante recalcar esto último dada la necesidad no sólo de individualizar cuentas sino también de contar con una gran mejora de la administración y rentabilidad de las mismas.

Asimismo, los lineamientos del Consenso de Washington, como también el Banco Mundial, sugerían la adopción de un sistema de cuentas individuales de ahorro previsional administrado privadamente, mientras que otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de la Seguridad Social preferían un esquema de beneficio definido administrado públicamente (Mesa-Lago, 1996). También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó numerosas contribuciones cuestionando la pérdida, como también la ausencia, de espacios e instrumentos para mejorar la solidaridad de los sistemas previsionales (Uthoff, 1995; CEPAL, 2006)[36].

Por otro lado, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en su libro sobre Reversiones menciona que mientras Europa avanza hacia la capitalización individual, en América Latina algunos proponen volver al reparto[37]. Considera que los sistemas contributivos de capitalización individual pueden otorgar

---

[35] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--- soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_29187.pdf CEPAL- ENCRUCIJADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL ARGENTINA: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones

[36] OIT, ¿A mitad de camino entre Bismarck y Beveridge? La persistencia de los dilemas en el sistema previsional Argentino - Fabio Bertranou, Pablo Casali y Oscar Cetrángolo

[37] https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/01/Informe-FIAP-REVERSIONES-2020-1.pdf

mayores montos de pensión y tasas de reemplazo a largo plazo. También, se analiza las razones por las cuales los programas contributivos de capitalización individual pueden proveer mejores pensiones en el largo plazo que esquemas alternativos de reparto y capitalización colectiva de fondos con beneficios definidos, estos programas deben complementarse e integrarse con programas no contributivos dirigidos a apoyar financieramente a los pensionados de menores ingresos. Subraya que, gracias a la creación de los sistemas de capitalización individual, los recursos disponibles para el financiamiento de las pensiones se han multiplicado varias veces

Asimismo, considera que en los sistemas de capitalización individual las administradoras de fondos de pensiones invierten los aportes que reciben, obteniendo rentabilidades que aumentan el patrimonio previsional de los trabajadores en beneficio directo de sus pensiones. En cambio, en los sistemas de reparto no se crea patrimonio, sino que, como lo dice su nombre, solo se reparten o redistribuyen los ahorros de los trabajadores al interior de una generación o entre distintas generaciones. Ello beneficia usualmente a las primeras generaciones que se jubilan con altas pensiones, que posteriormente no se pueden sostener debido al deterioro financiero que sufren estos sistemas como consecuencia de las tendencias demográficas y otros problemas estructurales. Además, al menos en América Latina, existe abundante evidencia de que dicha redistribución perjudica, en general, a los trabajadores más pobres y personas vulnerables (Altamirano et al., BID 2018), que no pueden cumplir las condiciones exigidas para recibir pensión, y beneficia a los trabajadores de ingresos medios y altos que sí las cumplen.

De igual manera, describe que la creación de patrimonio previsional de los sistemas de capitalización individual es una de sus principales ventajas. Permite proveer mejores pensiones a los trabajadores en comparación a los regímenes de reparto. En estos últimos, la única fuente de financiamiento de las pensiones, excluidos los aportes que pueden provenir del presupuesto público, son las cotizaciones realizadas por los trabajadores, empleadores y el Estado. En cambio, en los sistemas de capitalización individual se suman a las cotizaciones las rentabilidades obtenidas en la inversión de los fondos. Por ejemplo, si se asume una rentabilidad real promedio de 3,5% real anual durante un periodo de ahorro de 40 años, los resultados acumulados de las inversiones representarían aproximadamente un 50% del saldo final de un trabajador en un sistema de capitalización individual. Hasta la fecha el aporte de la rentabilidad al financiamiento de las pensiones en los sistemas de capitalización individual de América Latina ha sido mayor que lo estimado en esta simulación, dadas las altas rentabilidades reales históricas obtenidas.

Adicionalmente, los sistemas de capitalización individual permiten aumentar los recursos disponibles para financiar las pensiones no contributivas. En efecto, si bien en un comienzo su creación genera un mayor déficit fiscal de transición (ya que las contribuciones se dirigen hacia las cuentas individuales, en lugar de ir hacia el sistema público de reparto), a mediano y largo plazo su operación permite liberar recursos públicos que están comprometidos en el financiamiento de los déficits de los regímenes de reparto, los que pueden ser utilizados en el fortalecimiento de las pensiones dirigidas a los sectores más pobres (pensiones sociales o no contributivas) y en otros programas sociales.

En el Perú, mediante el Decreto Supremo 175-2019-EF, se aprobó las disposiciones que implementaron las funciones del Consejo de Evaluación de la situación actual de los sistemas de pensiones públicos y privados. Así, luego del estudio del contexto demográfico (en el que se advirtió que la población mayor de 65 años en 2070 representará el 24% de la población total); la informalidad laboral (en el que más del 70% de la PEA ocupada se encontraba en dicha situación); la cobertura previsional de la PEA (en el que el 32% no contaba con cobertura, siendo que solo el 7% del SNP alcanzaría a una pensión); y, las características de los sistemas público y privado de pensiones, planteando la implementación de un único sistema multipilar. Por otro lado, el Informe Final de la Comisión Técnica (Ley 28991 – Decreto Supremo 051-2007-EF), sobre el plan de mejoras al sistema nacional de pensiones al sistema privado de administración de fondos de pensiones que permitan asegurar su coexistencia en el mediano y largo plazo, considera en el Plan de Mejoras al Sistema Nacional y Privado de pensiones, el Registro Individual del Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, que está orientado a optimizar el mapa de información del SNP. También recoge las experiencias internacionales de los Sistemas de Pensiones y la tendencia a la implementación de cuentas individuales para ahorro para pensiones[38].

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en enero 2020, envió al Ministerio de Economía y Finanzas, el documento "Lineamientos para una reforma del Sistema de Pensiones en el Perú", y propone el rediseño del sistema de pensiones y plantea como un objetivo, **unificar los sistemas de pensiones contributivos en un Sistema Integrado de Pensiones basado en Capitalización Individual y con garantía estatal y para evitar las distorsiones que genera la coexistencia de dos esquemas**

[38] https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Informe_final_comision_tecnica_Ley28991_DS051_2007EF.pdf

pensionarios diferentes, que compiten entre sí; plantea tomar lo mejor del sistema de reparto y del sistema de ahorro individual para integrarlo, y con ello proteger adecuadamente a los trabajadores en la etapa de la vejez, o las contingencias de la invalidez y sobrevivencia. De esta manera, con un sistema contributivo de capitalización individual y con garantía de pensión mínima, se mitigarían los riesgos de pobreza en la vejez; y se incrementaría el bienestar de los afiliados y sus familias.

También en dicho documento, la SBS propone que los afiliados al SNP con edades menores a 35 años, pasarían al nuevo Sistema Integrado de Pensiones, bajo la creación de una AFP estatal. Inicialmente esta AFP, en tanto se constituye, administraría las cuentas individuales de capitalización de estos afiliados. La unificación del sistema de pensiones también permitiría eliminar los problemas operativos generados por el funcionamiento paralelo de dos esquemas de pensiones, en particular los aportes mal direccionados entre los actuales sistemas[39].

El Informe de Gestión, enero 2021, de la Comisión para la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, presidido por la Congresista de la República María del Carmen Omonte, puntualiza en el capítulo sobre la clasificación y evaluación de las iniciativas legislativas, que después de haber revisado y analizado en detalle los proyectos de ley, sistematizarlos y clasificarlos según las propuestas que plantean, un grupo de 134 propuestas referidas a modificatorias de las normas del Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. En este bloque de Proyectos de Ley se proponen la devolución de aportes, la libre desafiliación a las AFP, modificación de la edad de jubilación, modificación o reducción del cobro de comisiones a los afiliados, modificación de las pensiones mínimas, pensiones por desempleo, la implementación de nuevos cálculos para las pensiones, el allanamiento de juicios, pagos de pensiones de invalidez, viudez, orfandad, creación de cuentas individuales a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones, entre otras. Subrayamos que las propuestas proponen de creación de cuentas individuales a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones[40].

También el informe recoge las conclusiones del informe del Consejo Evaluador de Pensiones[41], el cual considera que actualmente el sistema previsional presenta diversos problemas que afectan directamente su eficiencia, su cobertura y la sostenibilidad del

[39] //www.sbs.gob.pe/Portals/0/Archivos/Lineamientos-para-reforma-del-sistema-de%20pensiones.pdf
[40] https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/CEM-sistema-previsional/files/presentaciones/informe_de_gestion_comision_para_la_reforma_integral_del_sistema_previsional_peruano.pdf
[41] INFORME CONSEJO EVALUADOR DE PENSIONES – Creado mediante Ley N° 30939

SNP, problemas que se acrecientan por el contexto demográfico que enfrentamos, menor tasa de natalidad y mayor expectativa de vida; dentro de un mercado laboral altamente informal. Para ello propuso un primer lineamiento de reforma, que establece un sistema de pensiones de esquema multipilar, donde el pilar cero, no contributivo, está focalizado en personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de extrema pobreza. Asimismo, el Pilar 2 y 3 están basados en un sistema de cuentas individuales que asegura que todos los afiliados puedan acceder a una pensión. Subrayamos, la propuesta de la Comisión sobre la creación de cuentas individuales.

La comisión técnica comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar los informes técnicos que contengan una evaluación del sistema previsional peruano, así como una propuesta normativa para crear el nuevo sistema de pensiones (Decreto Supremo N° 081-2022-PCM), en su Primer Informe Técnico, sobre la evaluación de la situación actual del sistema previsional peruano, describe que el sistema de pensiones del Perú está compuesto por una serie de subsistemas de diversa naturaleza. La actual configuración consta de dos subsistemas principales, el Sistema Nacional de Pensiones SNP (sistema de reparto) administrado por la Oficina de Normalización Previsional ONP y el Sistema Privado de Pensiones SPP (sistema de capitalización individual) administrado por las AFPs, además de varios regímenes especiales (Régimen de Jubilación Pesquera REP, Pensión Militar Policial, Régimen D. Ley 20530 de empleados públicos cerrado y Régimen de pensiones del Servicio Diplomático) y programas de asistencia social de pensiones No contributiva (Pensión 65 y Programa Contigo – pensión por discapacidad) [42].

En lo referente a suficiencia considera que, el sistema previsional se caracteriza por tener bajas tasas de reemplazo, la cual es una de las más bajas de la región. La baja tasa de reemplazo está asociada a reducidas tasas de aporte, bajos niveles de densidad de cotización, mayor esperanza de vida, una relativa baja edad de jubilación, retiros extraordinarios anticipados de las cuentas individuales de capitalización, entre otros.

También, que el SNP es un fondo de reparto que tiene como característica la solidaridad intergeneracional mediante el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas, que son financiadas con la recaudación de los aportes de los afiliados activos. Es decir, un sistema de reparto que se organiza sobre la base de un aporte obligatorio, realizado

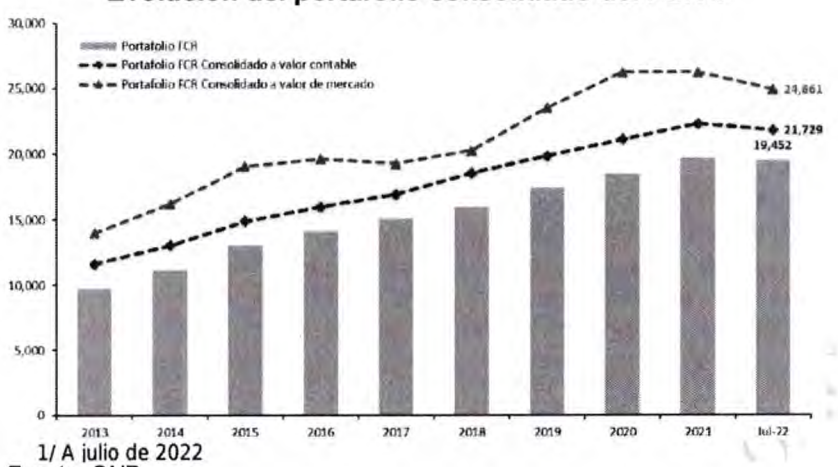
[42] Primer Informe Técnico: Evaluación de la situación actual del sistema previsional peruano
Informe de la comisión técnica comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar los informes técnicos que contengan una evaluación del sistema previsional peruano, así como una propuesta normativa para crear el nuevo sistema de pensiones. (Decreto Supremo N° 081-2022-PCM)

por los trabajadores en actividad, con el que se forma un fondo para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados.

Igualmente, que uno de los problemas a los que se enfrenta el SNP es el envejecimiento de la población. La tendencia hacia bajas tasas de natalidad junto con el aumento de la esperanza de vida genera problemas en la sostenibilidad fiscal del sistema que, al ser un sistema de reparto, emplea las contribuciones de los afiliados (trabajadores activos) para pagar las pensiones de los jubilados. Actualmente, esta problemática aun no es tan visible pues el Perú goza de lo que es conocido como un "bono demográfico" dado que la concentración de su población aún se centra en edades jóvenes.

De igual manera, el año 2022, la principal fuente de financiamiento para el pago de planilla de pensiones es la recaudación de aportes, representando el 66%, el resto del financiamiento proviene del Tesoro Público (22%) y del FCR (12%). Se evidencia una reversión en las fuentes de financiamiento de la planilla del SNP en los últimos 88 años, por ejemplo, en el 2004 la principal fuente de financiamiento era el Tesoro Público (70%), mientras que en la actualidad es la recaudación de aportes; sin embrago, el sistema aun no alcanza a ser plenamente fondeable en razón de sus ingresos.

Evolución del portafolio consolidado del FCR1/

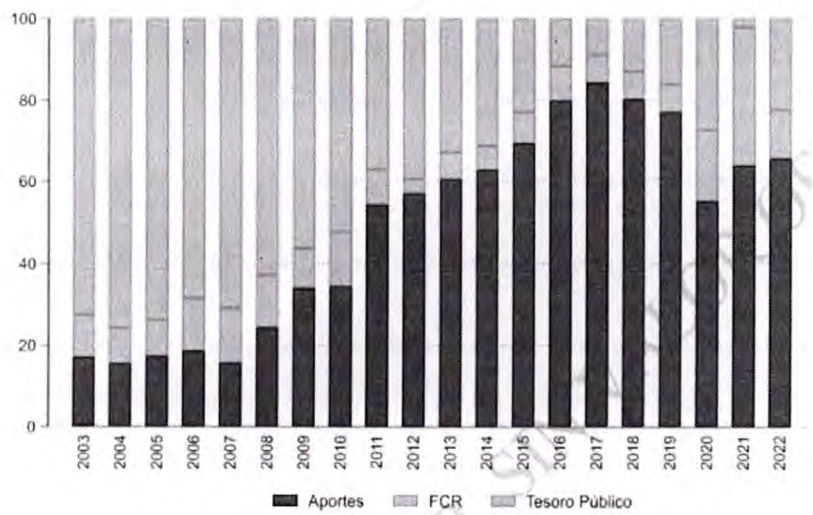


1/ A julio de 2022
Fuente: ONP

El creciente ingreso de aportantes, junto con otros componentes económicos y legales, ha permitido reducir la brecha. En el 2019 el número de aportantes alcanzo su máximo valor (1 600 000 aproximadamente), pero producto de la crisis sanitaria de la COVID-19 dicho valor tuvo una considerable caída, llegando a 1 400 000, si bien en el 2021 hubo una leve recuperación aún no se llega a los niveles previos a la pandemia.

Si observamos el financiamiento de las pensiones con recursos del Tesoro Público, en el 2003 representaba el 74% del pago total de pensiones, a partir de ahí se observa una clara tendencia decreciente hasta al año 2017, donde alcanza su menor valor (9%). En los años siguientes dicho porcentaje iría en aumento, llegando a su máximo valor (27%) en el año 2020. Si bien en el 2021 se observó una reversión a la baja, para los próximos años se espera un aumento, producto de que muchos de los actuales afiliados se jubilen y la cantidad de aportantes no crezca al mismo ritmo. Así, a futuro, habrá una cantidad insuficiente de aportantes – y consiguientemente, de recursos- para financiar estas pensiones.

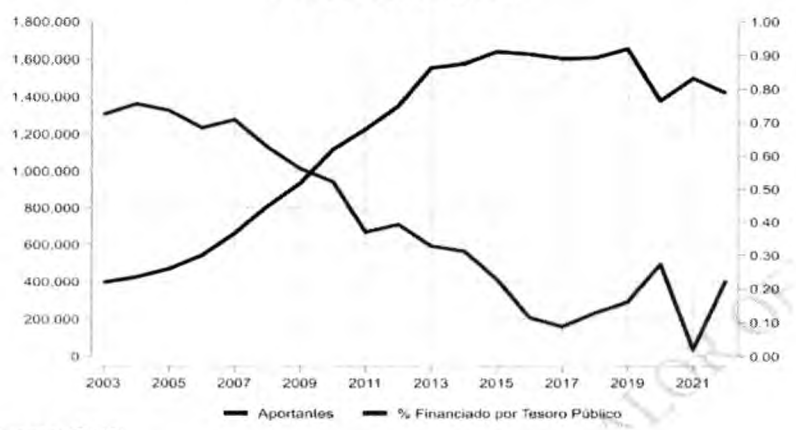
Fuente de financiamiento del SNP
(%)



Fuente: ONP

Otra forma de evaluar la situación financiera del SNP es medir la capacidad en que la recaudación de aportes (por si sola) sirve para hacer frente al pago de las pensiones. Este instrumento es denominado ratio de equilibrio financiero, si observamos el valor que se necesita para que los aportes financien totalmente la planilla, se estima en 9, no obstante, el valor real observado siempre ha sido inferior a dicho umbral. En el año 2003 el valor estuvo alrededor de 2 y aunque hubo mejoras sustantivas en los últimos 16 años, en el 2020 se observa una caída considerable producto de la COVID-19, producto de lo anterior la tendencia creciente de dicha ratio se ha visto estancada alrededor del valor de 5. Dada las condiciones actuales se esperaría que una mejora en la ratio en los próximos años, esto sin tener en cuenta posibles shocks aleatorios, sin embargo, la brecha respecto al equilibrio es aún amplia.

Aportes versus el % de financiamiento de las pensiones cubierto con recursos del Tesoro Público



Fuente: ONP

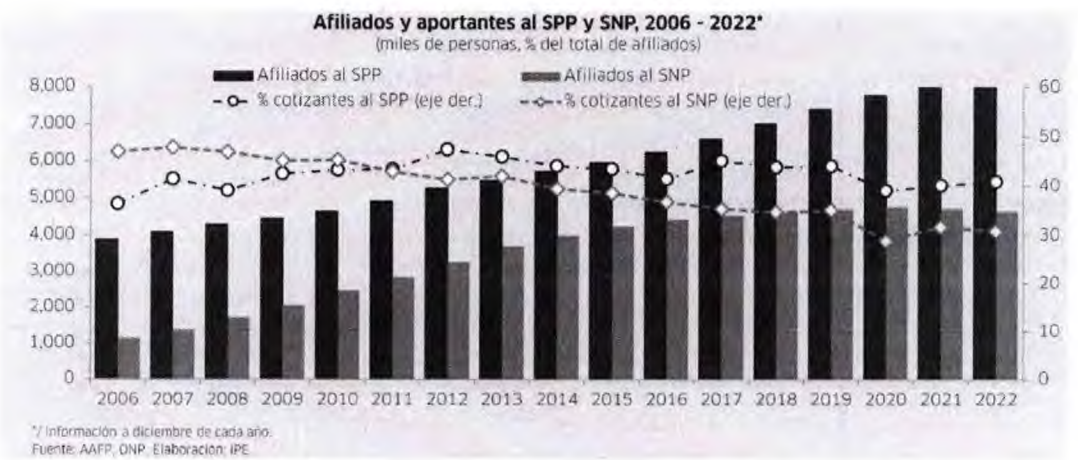
Más aún, y existe bastante evidencia, como lo han señalado Robert Palacios y Klaus Schmidt-Hebbel, que los sistemas de capitalización individual contribuyen a mejorar la

cobertura, al equiparar los beneficios con los aportes, al sentir el trabajador que lo que está aportando es igual al valor presente de lo que espera recibir en el futuro[43].

Sobre la necesidad de apertura de Cuentas Individuales de Capitalización Acumulativas

El Régimen de Reparto del Sistema Nacional de Pensiones, el cual es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el mismo que en el tiempo se ha vuelto insostenible, debido a que el Estado continúa subsidiando al Sistema Nacional de Pensiones dado que cada vez hay más jubilados y menos aportantes. Como se muestra en el siguiente cuadro adjunto:

Total de Afiliados y Afiliados con aportes al SPP y SNP 2006-2022



En el cuadro, se puede observar que anualmente van disminuyendo los afiliados que están aportando al SNP reduciéndose a poco más del 30%, lo que hace que el sistema nacional de pensiones sea insostenible. Por lo mencionado, este dictamen busca que el

[43] www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/04/arthur.pdf

sistema nacional de pensiones aperture cuentas individuales de capitalización (CICA) a los afiliados, con la finalidad de capitalizar el total de sus aportes. De esta manera, los sistemas público y privado coexistirán en igualdad de condiciones y la ONP deberá ser responsable de tomar las mejores decisiones de inversión para generar rentabilidad sobre los aportes de los afiliados. Adicionalmente, debemos mencionar la importancia de que los afiliados sigan teniendo libertad de elección sobre a qué sistema de pensiones van a pertenecer y tengan la decisión de elegir sobre la base de otro factor: la rentabilidad de los fondos, con lo cual, el afiliado podrá tener otro factor determinante para elegir a qué sistema pertenecer. Por otro lado, de los datos obtenidos de la presentación del Instituto Peruano de Economía (IPE), podemos señalar que entre el 2011y 2021, el Estado ha destinado S/ 3,140 millones en promedio por cada año para financiar las pensiones de la ONP. (ver cuadro adjunto)

Presupuesto institucional de la ONP según fuente, 2011 – 2021 (millones de S/)



Fuente: IPE

Por lo que, este dictamen busca que la ONP rentabilice los fondos de tal manera que la probabilidad de financiamiento de parte del Estado sea casi nula, estos recursos podrían

utilizarse por el gobierno central en las reformas complementarias de educación y mercado laboral.

La Asociación de AFP, con relación a la Reforma del Sistema de Pensiones, sostiene que actualmente, los sistemas de reparto en el mundo enfrentan serios problemas de sostenibilidad[44].

¿Por qué pasar del sistema de reparto a uno de capitalización individual?

Un sistema de reparto es aquel en el que los trabajadores más jóvenes financian con sus aportes las pensiones de los jubilados, esos sistemas están enfrentando graves problemas de sostenibilidad en todo el mundo, debido al proceso de envejecimiento poblacional, hoy, existe un mayor número de personas mayores y menos jóvenes. Es por ello que se hace imposible mantener un número creciente de jubilados con los aportes de un número decreciente de trabajadores activos.

Como ejemplo de este fenómeno es el caso del sistema público de España, que tendrá un déficit de €30,000 millones este año. El sistema francés, por su parte, tendrá un déficit €13,500 millones para 2030. En Perú sucede algo similar con la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que entre 2014 y 2019 recibió transferencias anuales de S/1,800 millones para cubrir su déficit.

Por lo que debemos ir hacia sistemas de capitalización individual, donde cada trabajador tiene su cuenta propia, a su nombre y apellido, y en la que se acumulan sus aportes y la rentabilidad generada por la administradora de su fondo. Esto garantiza la sostenibilidad del sistema previsional y, por ello, es la tendencia mundial[45].

La Comisión considera, que el tránsito de la ONP de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales es fundamental en vista que actualmente, el sistema nacional de pensiones que tiene el régimen de reparto, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) está quebrado y que los sistemas de capitalización individual han tenido impactos positivos sobre la vida de los afiliados y la población, como los que se detallan:

---

[44] Asociación de AFP - Joaquín Rey, asesor en políticas públicas de la Asociación de AFP, 30 marzo, 2023

[45] https://www.asociacionafp.pe/reforma-por-que-pasar-del-sistema-de-reparto-a-uno-de-capitalizacion-individual/

- Derechos de propiedad sobre los fondos acumulados
- Acumulación de ahorros en las cuentas individuales constituyen para la mayoría de los afiliados su principal o único patrimonio
- Mayor flexibilidad y movilidad en el mercado laboral
- Mayor acceso de los afiliados y personal en general a financiamiento de largo plazo a menores tasas
- Mejoras en infraestructura en beneficio de las personas y de los diferentes sectores productivos
- Mayor crecimiento económico genera más y mejores empleos para las personas.

La Comisión estima que, con la transición de las cuentas de reparto del Sistema Nacional de Pensiones a cuentas de capitalización individual, es posible asegurar una pensión mínima a todos los aportantes con un gasto menor que el de mantener la Oficina Nacional Previsional (ONP) del Sistema Nacional de Pensiones.

Transición hacia un esquema de capitalización individual



Fuente: IPE

Finalmente, el costo de transición a un sistema de capitalización individual se reduce a lo largo del tiempo, en el mediano y largo plazo, el costo de mantener a la *Oficina* de Normalización Previsional (*ONP*) supera largamente el costo de transición.

Balance: costos fiscales de la transición vs. Costos de mantener la ONP, 2017 – 2063 (en % del PBI real)



Fuente: IPE

6.4 Mayor competencia en el sistema privado de pensiones y mejores condiciones

6.4.1 Apertura del mercado pensionario

En la actualidad, en el Perú coexisten dos sistemas pensionarios, uno estatal y uno privado, a su vez, dentro del sistema privado, existen cuatro empresas de carácter privado que se encargan de captar fondos con y sin fines previsionales. Dicho esto, las pensiones actualmente son muy bajas ya que oscilan entre los 125 soles mensuales (programa Pensión 65 para ancianos en extrema pobreza que entrega 250 soles bimestralmente) hasta los 1,500 soles mensuales para personas con un alto aporte durante toda su vida. No obstante, estos montos no alcanzan para cubrir el costo de vida de una persona, quien muchas veces vive en la pobreza, ya que la pensión que recibe no alcanza a cubrir el costo de una canasta básica de alimentos.

Así pues, en el año 1992 como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto Ley 25897, por el que se crea el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones, se crea el mercado y -mediante el cual se crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP)- nace el mercado de pensiones y según Céspedes (2005):

> *"El producto que se transa en este mercado son los servicios de administración y custodia de los fondos individuales de pensiones, y no las pensiones de jubilación como se podría suponer en una primera*

impresión, el nivel que tomen las pensiones depende de la magnitud de los aportes realizados por los afiliados y también de los resultados de política de inversiones de las AFP[46]".

Desde el momento en el que se crea el Sistema, empezaron a operar en el mercado privado de pensiones ocho AFPs (Horizonte, Integra, Profuturo, Unión Vida, Unión, El Roble, Providencia y Megafondo) y en 1995 "la AFP Horizonte absorvió a la AFP Megafondo, la AFP Nueva Vida absorvió a la AFP Providencia, la AFP Profuturo absorvió a la AFP El Roble, y AFP Nueva Vida se fusionó con AFP Unión y crea AFP Unión Vida"[47], posteriormente, AFP Horizonte fue absorbida por Profuturo e Integra y Prima AFP se fusionaron con AFP Unión Vida, por lo que en la actualidad sólo existen cuatro AFPs.

En ese sentido, resulta importante para esta comisión promover la competencia, ya que en la actualidad sólo existen cuatro empresas que se dedican a administrar fondos previsionales: Hábitat, Profuturo, Integra y Prima, lo que genera gran malestar en la población, ya que en la actualidad, la alta concentración de este mercado genera una situación de oligopolio, que tiene un efecto pernicioso, ya que genera incentivos para que estas empresas a menudo se confabulen con la finalidad de equiparar precios, productos y, con ello, aumentar los precios y las utilidades económicas.

Debido a la regulación actual, se han generado barreras para que otras entidades financieras entren a competir con las AFP que existen actualmente. Como es sabido, según el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, el Estado peruano está obligado a fomentar y promover la competencia, así como también combate toda práctica que limite la competencia y el abuso de las posiciones dominantes.

Es por ello, que esta Comisión considera que en base al mandato constitucional recogido en el artículo 61 y con el afán de seguir combatiendo el abuso de posiciones dominantes en todo sector, la apertura del mercado pensionario resulta una medida necesaria toda vez que beneficiará al mercado pensionario y sobre todo, a los

[46] Céspedes, Nikita (2005) Un Enfoque de Teoría de Juegos del Sistema Privado de Pensiones Peruano. ECON WPA 0505002. p. 6. https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/io/papers/0505/0505002.pdf. Consultado el 17 de mayo de 2013.

[47] Thorne Leon. .laime (2010). Op. Cit. p.64-65

afiliados y aportantes. La inclusión de nuevos actores financieros resulta pues, una forma de mejorar el Sistema Previsional Peruano en su conjunto.

Sobre el tema, Goodwin (2007) señala sobre la competencia entre empresas, lo siguiente:

> *"(...) Es buena porque aumenta la eficiencia. Comúnmente, la eficiencia se considera buena en sí misma, (...) incrementa las oportunidades de consumo haciendo posible la obtención de un mayor producto dado un cierto nivel de insumos."*[48]

Entonces, podemos afirmar que el abrir el mercado a nuevos actores financieros, que se acojan a la regulación peruana y estén dispuestos a captar aportes con y sin fines previsionales, tendrá una consecuencia positiva, toda vez que la eficiencia en todo el mercado pensionario mejorará e incrementará las oportunidades de consumo, en este caso en concreto, más peruanos serán parte del sistema de pensiones peruano, ya que, debido a la competencia, el afiliado obtendrá mejores resultados y un mejor servicio.

El presente Dictamen apunta a dos objetivos destacables. El primer objetivo, es que los ahorros previsionales de los afiliados al Sistema Previsional Peruano sean mejor remunerados, es decir, que tengan mejor rentabilidad en el tiempo y un segundo objetivo, es que haya mayor competencia en el mercado de administradoras de fondos de pensiones y un amplio abanico para que los afiliados puedan elegir libremente el destino de tus aportes con y sin fines previsionales.

Adicionalmente, el Proyecto de Ley 1513/2021-CR, presentado por el Congresista Juan Carlos Mori Celis, menciona, muy acertadamente, lo siguiente:

> *"En ese contexto, es fundamental promover la competencia en el mercado para la administración de los fondos previsionales con la finalidad de que los trabajadores aportantes tengan mejores condiciones de prestación en el futuro que garantice su calidad de vida, y para ello urge la necesidad de que la SBS autorice a las entidades del sistema*

[48] Neva Goodwin (2007). La competencia entre empresas: ¿Quién se beneficia? https://www.bu.edu/eci/files/2019/06/OpinionSur_NevaGoodwin_Nov07.pdf

financiero ya sean bancos y cajas, la apertura de cuentas de ahorros previsionales intangibles (...)"[49]

Esta Comisión coincide con la propuesta de incluir más actores a competir por brindar un mejor servicio a los afiliados, por lo que, como se ha dicho en líneas anteriores, al mejorar la competencia se generan mejores incentivos a las empresas para mejorar su servicio.

No obstante, ya desde el año 1999, Muñoz junto con el Instituto Peruano de Economía (IPE) publican un documento de investigación sobre la Reforma del Sistema de Pensiones y señala como alternativa el ampliar la competencia:

> *"Para incrementar la competencia en el sistema y reducir los costos operativos del mismo debiera permitirse que bancos y empresas de seguros puedan también administrar fondos de pensiones. Los bancos podrían utilizar sus redes de oficinas, infraestructura y fuerza de ventas para distribuir estos productos a un menor costo. Las empresas de seguros podrían utilizar su experiencia en el mercado de rentas vitalicias, administración del riesgo de invalidez y sobrevivencia y otros productos vinculados al manejo de pensiones para competir eficientemente con las AFPs. El ingreso de estas instituciones al mercado –en particular los bancos- contribuiría a una mayor penetración de las AFPs en el mercado de menores ingresos, debido a la mayor familiaridad de estos sectores con las instituciones bancarias. Asimismo, para promover un mayor nivel de competencia y diferenciación entre las AFPs debiera otorgárseles una mayor flexibilidad para estructurar sus comisiones*[50]*."*

Muñoz considera que al incrementar la competencia se logrará reducir costos operativos debido a que estas empresas podrán utilizar su infraestructura para distribuir los productos pensionarios a menor costo, así como las empresas aseguradoras podrán utilizar su experiencia en el mercado de rentas para competir eficientemente con las AFPs. Bajo este contexto, la comisión coincide con lo antes mencionado, pues considera que el que haya más actores en el Sistema Previsional Peruano hará que los servicios mejoren y se aminoren los gastos operativos y por ende, las comisiones.

---

[49] Proyecto de Ley 1513/2021-CR

[50] Ítalo Muñoz (1999). Documento de investigación sobre la Reforma del Sistema de Pensiones.

Adicionalmente, el actual ministro de economía, Alex Contreras, ha mencionado que su sector está a favor con ampliar la competencia para generar mejores comisiones[51], por tal motivo, esta comisión afirma que, para tener un justo y correcto funcionamiento del sistema, se requiere la presencia de más empresas que estén dispuestas a captar aportes con fines previsionales.

Entonces, podemos señalar que existen muchos beneficios, los mismos que, por mencionar algunos, se señalan a continuación:

Beneficios de la apertura de mercado del Sistema de Pensiones

Beneficios	Detalle
Libertad de elección	• Permitirá a los afiliados trasladar sus fondos de pensiones de una AFP a una nueva institución, según corresponda. • La libertad de elección será inherente al afiliado.
Menores costos	• Las entidades que se incorporarán al sistema competirán por ofrecer mejores comisiones. • Tanto las AFP como los nuevos actores están sujetas a seguir disminuyendo sus gastos para ofrecer mejores servicios al afiliado.
Menor riesgo	• Los fondos mantendrán su intangibilidad y serán inembargables. • Se busca evitar que, ante la quiebra del administrador de fondos, el esfuerzo del afiliado se vea afectado.

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, luego de los argumentos expuestos, esta Comisión considera importante promover la competencia para evitar posiciones dominantes en el mercado mediante la participación de empresas de operaciones múltiples y

[51] Nota en Diario La República, medio digital: https://larepublica.pe/economia/2023/05/16/mef-sobre-reforma-previsional-se-debe-ampliar-la-competencia-para-generar-menos-comisiones-691088

empresas de seguros, no obstante, esta comisión considera que para que las empresas de operaciones múltiples y aseguradoras puedan ofrecer Cuentas Individuales de Capitalización Acumulativa (CICA) deben cumplir con las disposiciones contenidas en el Título III del TUO de la Ley del SPP y las disposiciones normativas que la SBS emita sobre la materia, además, estos fondos deberán ser constituidos en un patrimonio independiente y distinto al patrimonio de dichas empresas, todo esto con la finalidad de proteger los fondos previsionales de los afiliados, ya que en caso que alguna de estas empresas quiebre se mantenga el íntegro de los aportes y la rentabilidad de los afiliados.

6.4.2 Comisión por desempeño

Sobre este tema, resulta importante comenzar el análisis mencionando que las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP son empresas con capital privado y tienen como única finalidad el de administrar los fondos de pensiones, que se constituyen los aportes obligatorios y voluntarios de las personas, a los cuales se les llaman afiliados a sus respectivas cuentas individuales de capitalización, estas empresas, a su vez, cobran una comisión por administras dichos fondos.

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, las AFP tienen como núcleo de negocio captar los aportes obligatorios y/o voluntarios de los aportantes. Respecto a ello, los aportes obligatorios están constituidos por el diez por ciento (10%) de la remuneración de cada afiliado. Estos aportes son destinados a una Cuenta de Individual de Capitalización, que es intangible, heredable y pertenece al aportante.

Respecto a ello, la legislación peruana actual establece cuatro tipos de fondos en base a la volatilidad del mismo y dentro de los límites de inversión establecidos en la Ley. Los fondos son los siguientes:

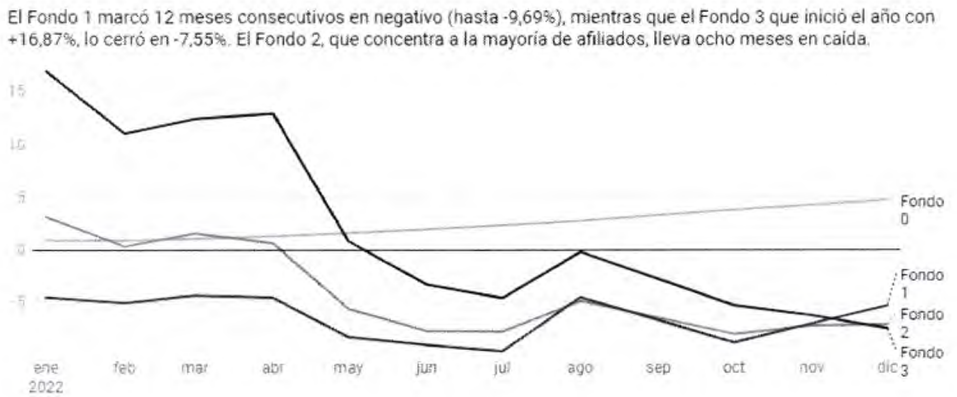
1. Fondo de Pensiones Tipo 0 o Fondo de Protección de Capital.
2. Fondo de Pensiones Tipo 1 o Fondo de Preservación de Capital.
3. Fondo de Pensiones Tipo 2 o Fondo Mixto.
4. Fondo de Pensiones Tipo 3 o Fondo de Apreciación de Capital (Fondo de Crecimiento.

Los fondos son elegidos libremente por cada afiliado según el riesgo y rentabilidad que están dispuestos a afrontar.

En ese orden de ideas, es necesario señalar que en el siguiente cuadro[52] se logra graficar que, en el 2022, los fondos 1, 2 y 3 han perdido rentabilidad, perjudicando la vejez de sus afiliados.

Como se puede observar en el cuadro precedente, los fondos 1, 2 y 3 (del más conservador al más agresivo, respectivamente) han tenido una constante pérdida de rentabilidad, que según expertos en la materia, obedecen al contexto de inflación mundial y al alza de tasas de interés que los bancos centrales en el mundo han tenido que aplicar para contener la inflación[53].

Evolución de la rentabilidad de fondos AFP en el 2022



[52] Web Ojo Público - Las AFP ganaron S/.471 millones en un año marcado por la pérdida de fondos de afiliados. https://ojo-publico.com/4283/las-afp-ganaron-s471-millones-un-ano-perdida-para-los-afiliados#:~:text=Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20rentabilidad%20de,lleva%20ocho%20meses%20en%20ca%C3%ADda. Consultado el 30 de marzo de 2023

[53] Proyecto de Ley 4743/2022-CR

No obstante, las AFP no han dejado de tener rentabilidad como empresa, a pesar de que sus decisiones de inversión y el contexto mundial perjudicó a sus propios afiliados. Por ejemplo, el portal Ojo Público[54] señala que:

> *"Según **los reportes de la SBS** y los **Hechos de Importancia** publicados en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), las AFP obtuvieron utilidades por más de S/471,3 millones durante el 2022. Este monto fue menor al año previo, pero superior al año de la pandemia, el 2020."*

Dicho esto, el marco normativo del Sistema Privado de Pensiones se ha visto expuesto a modificaciones y reformas que han buscado la eficiencia del sistema y, por ende, del sistema de comisiones, en las que, diversos sectores políticos y técnicos coinciden que debe modificarse.

En relación a ello y con la finalidad graficar las grandes modificatorias, se muestra el siguiente gráfico elaborado por la Asociación de AFP[55], la misma que cuenta con la información de la Superintendencia de Banca y Seguros y el Congreso de la República.

---

[54] Web Ojo Público - Las AFP ganaron S/.471 millones en un año marcado por la pérdida de fondos de afiliados. https://ojo-publico.com/4283/las-afp-ganaron-s471-millones-un-ano-perdida-para-los-afiliados#:~:text=Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20rentabilidad%20de,lleva%20ocho%20meses%20en%20ca%C3%ADda. Consultado el 30 de marzo de 2023

[55] Asociación de AFP. Fecha de Consulta: 05 de mayo de 2023. Recuperado de: https://www.asociacionafp.pe/wp-content/uploads/2021/06/Documento-de-investigacio%CC%81n-N2-2020_El-SPP-en-el-entorno-del-retiro-del-95.5.pdf

Principales modificaciones al Sistema Privado de Pensiones



Fuente: Asociación de AFP

No obstante, a pesar de que se han buscado formas en las que el sistema previsional peruano sea más eficiente, resulta importante mencionar que las comisiones cobradas por las AFPs son las que generan problemas y malestar entre los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, sobre todo cuando las AFP las perciben las comisiones aun cuando generan un perjuicio directo al afiliado, ya que, en algunos periodos de tiempo, no generan rentabilidad o tienen pérdidas; lo mismo que se ve reflejado en sus respectivas Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Aunado a ello, es importante mencionar que hasta febrero de 2023, el sistema de comisiones de las AFP estaba formada de la siguiente manera:

a) Comisión sobre el flujo, la que es cobrada sobre el sueldo del aportante y que, en la actualidad, según la normatividad peruana, no es posible acogerse a este tipo de comisión, ya que sólo se acogieron a este tipo de comisión los afiliados que ingresaron al sistema hasta 2013.

b) Comisión mixta: Bajo esta modalidad las AFP obtienen un porcentaje del sueldo y una comisión anual sobre el saldo de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC). La comisión mixta forma parte de la implementación de la Ley N°29903, Ley de la Reforma del SPP y está compuesta por una comisión sobre el flujo, es decir, el sueldo de cada aportante y una comisión anual sobre el saldo.

En ese sentido, la comisión mixta se conformaba y se graficaba de la siguiente manera

COMISIÓN MIXTA	
Comisión sobre el flujo	Comisión anual sobre saldo
Comisión mensual sobre el sueldo del afiliado.	Comisión sobre el saldo de la Cuenta Individual de Capitalización, aplicado anualmente.

Sin embargo, debido a que el TUO del Sistema Privado de Pensiones previa que este esquema de comisiones sólo existiera hasta febrero de 2023, el actual esquema se configura de la siguiente forma[56]:

Comisiones y primas de seguro del SPP

Mes de devengue : 2023-05 Buscar Datos

Al mes de devengue 2023-05 1/

AFP	COMISIÓN SOBRE FLUJO (% Remuneración Bruta Mensual)	COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO	PRIMA DE SEGUROS (%) 3/ (% Remuneración Bruta Mensual)	APORTE OBLIGATORIO AL FONDO DE PENSIONES (% Remuneración Bruta Mensual)	REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE
HABITAT	1.47%	1.25%	1.84%	10.00%	11,629.68
INTEGRA	1.55%	0.79%	1.84%	10.00%	11,629.68
PRIMA	1.60%	1.25%	1.84%	10.00%	11,629.68
PROFUTURO	1.69%	1.20%	1.84%	10.00%	11,629.68

1/ Las comisiones sobre la remuneración y las primas retenidas correspondientes a un determinado mes deben pagarse dentro de los 5 primeros días útiles del mes siguiente.
2/ A partir de Enero de 1997 se eximió el cobro de Comisión Fija.
3/ Porcentaje a descontar sobre la Remuneración Bruta hasta el límite determinado por el Reglamento de la Ley del SPP(Remuneración Máxima Asegurable Art. 67º del Título VI del Compendio de Normas reglamentarias del SPP).
*** A partir de Febrero de 2023, el componente de flujo de la Comisión Mixta es 0%, resultando únicamente en Comisión anulado sobre saldo.

[56]Cuadro elaborado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Comisiones de Primas y Seguros del SPP. https://www.sbs.gob.pe/app/spp/empleadores/comisiones_spp/paginas/comision_prima.aspx Consultado el 16 de mayo de 2023.

Fuente: SBS

En cuadro precedente se observa que en la actualidad la comisión mixta ya no se aplica; sin embargo, las comisiones siguen generando un perjuicio a cada afiliado en tanto las AFPs continúan cargando un porcentaje que debería ser destinado a las cuentas de los afiliados en caso estas empresas no generen rentabilidad.

En ese orden de ideas, lo que busca el presente Dictamen es recoger las solicitudes de los afiliados y establecer una nueva alternativa que permite que las AFP y los aportantes compartan el riesgo de inversión, teniendo en cuenta que los aportantes son socios de las AFP, pues las AFP trabajan administrando e invirtiendo el dinero de los aportantes.

Esta Comisión ha contemplado el condicionar la productividad de las AFP y por ende, las inversiones que estas realizan, al cobro de una retribución según la productividad de la AFP en un periodo determinado de tiempo, es decir, si la AFP ha perjudicado o no ha hecho generar ganancias al fondo al aportante ya no serán aplicables los dos componentes de la "retribución por productividad", sino, únicamente el componente que permite que las AFP cubran sus gastos operativos.

Sobre el tema, Iglesias (2008)[57] en el capítulo VII llamado "Estructura de comisiones de comisiones en un sistema de AFP", publicado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, señala lo siguiente: "Si se desea incentivar algunos atributos específicos del sistema de pensiones, como, por ejemplo, la rentabilidad de los fondos, entonces la comisión sobre saldo acumulado (o sobre rentabilidad) parece una alternativa posible." (p.286).

En ese sentido, lo que esta comisión considera es el sistema de comisiones propuesto genera que los inversionistas de las AFPs tomen las mejores decisiones de inversión para generar mayor rentabilidad en los fondos de inversión de los afiliados.

Dicho esto, podemos concluir que los aportantes y afiliados a las AFP se ven constantemente perjudicados económicamente por las decisiones de inversión que toman las AFPs, en las que no han podido decidir sobre la inversión y que, además, a pesar de la pérdida de sus afiliados, las AFPs siguen teniendo ganancias. En ese sentido, y con la finalidad de que las AFPs compartan el riesgo solidariamente con los

[57] Iglesias, Pablo. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2022. Estructura de comisiones en el sistema de AFP. Fiapinternacional.org. https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/01/augusto_iglesias_1.pdf

afiliados, es que se plantea modificar el esquema de comisiones que contempla la normativa peruana para evitar que los aportantes afiliados a las AFP se sigan viendo perjudicados económicamente por las decisiones de inversión en la que no han intervenido. En ese sentido, y para que las AFP pueda buscar obtener mayor rentabilidad, se ha establecido en el Texto Sustitutorio, un condicionante que permitirá que las AFP inviertan los aportes de los afiliados de una forma más eficiente y eficaz estableciendo un componente fijo para que las AFP puedan cubrir gastos operativos y un componente variable que la AFP podrá percibir siempre que genere rentabilidad.

6.5 Régimen de aportes complementarios del Sistema Previsional

6.5.1 De la promoción del ahorro con fines previsionales

El artículo 1 de la Constitución Política del Perú consagra que "*la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado*".

En ese orden de ideas, el principio-derecho de dignidad de la persona humana no solo se constituye en el fundamento de todos los derechos fundamentales, sino también en el objeto y fin de la existencia de todo Estado, de modo que es deber constitucional del Estado, salvaguardar el principio-derecho de dignidad de las personas adultas mayores a través de la promoción del ahorro con fines previsionales.

En ese sentido, en el marco de un Estado Constitucional y Democrático en el cual los derechos son considerados como mandatos de optimización, el rol del Estado supone la obligación constitucional de promover su ejercicio.

La creación de cuentas individuales de capitalización acumulativa es entonces un instrumento que contendrá un sistema de aportes complementarios del Sistema Previsional que asume el Estado en el ejercicio de su deber constitucional de promover el bienestar general (artículo 44 de la Constitución Política del Perú), debido a la baja conciencia de ahorro previsional y formalidad laboral que existe en la población.

Ahora bien, hay personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que, por tanto, requieren de una especial protección por parte del Estado. Dentro de esa población vulnerable se encuentran las personas adultas mayores. Así lo reconoce la propia Constitución Política en su artículo 4 cuando dispone que "*la comunidad y el*

Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono".

Con relación al citado deber constitucional no solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, de brindar especial protección a los adultos mayores, se tiene que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 5157-2014-PA/TC, señala lo siguiente:

"8. El Tribunal advierte que el deber que el Estado peruano ha asumido en relación con la tutela de los derechos de las personas adultas mayores obedece a la especial condición en la que ellas se encuentran. En efecto, las personas adultas mayores se caracterizan por vivir, en general, en un contexto de vulnerabilidad, es decir, en una exposición constante a riesgos de difícil enfrentamiento, que son producidos, en la mayoría de los casos, por diversos obstáculos que la sociedad les impone

9. En efecto, existen distintos factores que comprueban la especial situación en la que se encuentran los adultos mayores. Uno de los mayores flagelos radica en la asignación de estereotipos vinculados a la vejez. Muchas veces se piensa que una avanzada edad es sinónimo de inoperancia o falta de capacidad para emprender actividad o proyectos. Del mismo modo, se le suele asociar con un estado de constante dependencia, y que termina por generar en el adulto mayor la sensación respecto de su falta de autonomía para el desarrollo de sus actividades diarias. Ello resulta contrario a las ideas de autonomía e independencia que se vienen implementando y fomentando a favor de este colectivo, más aún si se considera los valiosos aportes que ellos realizan a la sociedad y al Estado

10. Tampoco puede dejarse de lado el hecho de que la vejez, en distintas etapas, genera un deterioro de la salud de la persona, lo que ha ocasionado que, tanto para su familia como para la sociedad, se le entienda más como una carga que como una persona que se encuentra en condiciones de desenvolverse de manera autónoma. Esta clase de estereotipos se han condensado en el contexto de una sociedad en el que las oportunidades no eran las mismas para las personas adultas mayores. La situación es considerablemente distinta en la actualidad. Se ha empezado a resaltar la idea relativa a su progresiva autorrealización personal, lo cual no solo se vincula con el diseño particular de vida, sino también con la posibilidad de ser determinantes en la vida de los demás.

11. Finalmente, esta vulnerabilidad se ve acentuada por las bajas probabilidades que este colectivo padece en relación con el acceso a distintos medios de realización personal, y que terminan por generar dependencia, como ocurre con las dificultades para generar ingresos económicos o las dificultades para desempeñarse en ciertos empleos. El Tribunal nota que, en estos casos, el Estado peruano debe velar porque se mantengan las condiciones adecuadas para el desenvolvimiento de la vida de la persona adulta mayor, y que ello le permita ejercer sus actividades cotidianas, en la medida de lo posible, sin dependencia de terceros".

Las personas adultas mayores, pese a haber ingresado a dicha etapa de la vida, siguen siendo titulares de derechos fundamentales; en ese sentido, el Estado debe no solo garantizar sino también promover y facilitar el ejercicio de tales derechos. De ese modo, resulta necesario e imprescindible que, a nivel normativo, así como de políticas públicas, el Estado garantice que, alcanzada dicha edad, las personas cuenten con un mínimo nivel de ingresos, esto es, que tengan recursos, pues sin estos, la dependencia de las personas adultas mayores, sea del Estado, de sus familiares o de terceros es inevitable.

En ese contexto, se tiene que el Estado debe promover el ahorro, esto es, que las personas, responsablemente, velen por su futuro y para la realización de sus proyectos personales, para que sus decisiones sean tomadas con libertad y autonomía, sin dependencia del asistencialismo estatal. De ahí que, por ejemplo, se tenga que el artículo 87 de la Constitución Política dispone que *"el Estado fomenta y garantiza el ahorro"*, precepto constitucional que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia recaída en el Expediente 410-2002-PA/TC, en la que indicó lo siguiente:

"2. (...). A juicio del Tribunal Constitucional, a través de dicha cláusula de la Norma Suprema, se ha reconocido el ahorro en cuanto derecho constitucional y como garantía institucional

En cuanto derecho subjetivo constitucional tiene, prima facie, una estructura semejante a lo que sucede con cualquier derecho de carácter reaccional: garantiza que el Estado no se apropie arbitrariamente del ahorro de los privados. Sin embargo, también participa de una faz positiva, por cuanto garantiza que el Estado realice todas aquellas medidas necesarias y acordes con los deberes de fomento y garantía del ahorro. Si en su vertiente de derecho reaccional, el derecho de ahorro tiene directamente como sujeto obligado al Estado, en forma indirecta, el mismo derecho constitucional tiene también por sujeto pasivo u obligado a las "empresas que reciben ahorros del público"

Y, como garantía institucional, esto es, en cuanto instituto constitucionalmente garantizado, impide que el Estado pueda legislativamente suprimirla o vaciarla de contenido. Tal garantía no sólo tiene una vertiente negativa, en el sentido de prohibir su supresión o vaciamiento de contenido, sino también una vertiente positiva, pues, como expresa la primera parte del artículo 87º de la Constitución, impone al Estado el deber de fomentarla y garantizarla.

A efectos de salvaguardar no solo la autonomía, sino fundamentalmente una vida digna y saludable, de las personas adultas mayores; el Estado ha previsto que, desde el inicio de su vida laboral primero, y de manera libre luego, las personas puedan realizar "aportes" al Estado o entidades privadas, con la finalidad de que puedan asegurarse en su vejez un mínimo nivel de ingresos. Nos referimos a las pensiones.

Ya se ha definido la naturaleza conceptual de las pensiones y se ha desarrollado cronológicamente la historia y el marco normativo del sistema previsional en el Perú en los parágrafos 6.1 y 6.2, de modo que en este acápite nos ceñiremos al **Régimen de aportes complementarios del Sistema Previsional.**

6.5.2 De la pensión por consumo

En comparación con países de la región, en el Perú la pensión promedio es baja y además existe un gran nivel de inequidad causada por la fragmentación y características intrínsecas de los sistemas.

Por ejemplo, se sabe que solo el 25% de la fuerza laboral está afiliada al sistema contributivo de pensiones (SNP y SPP); de los afiliados al SNP se estima que el 60% no calificará para acceder a una pensión de jubilación debido a que no contribuye ni en los montos ni por los períodos mínimos requeridos por ley. De los afiliados al SPP, el 60% no ha acumulado ahorros suficientes para una renta vitalicia[58].

Al respecto, es importante comentar que el Perú ocupó el puesto 16 de un total de 34 en el Índice Global de Pensiones de Melbourne de Mercer. Según dicho estudio[59], nuestro país obtuvo una calificación de C+, la cual refleja que, a pesar de existir algunas

[58] Arrieta, A., Jaramillo, M., Prieto, L., Seinfeld, J., De la Torre, A., & Tuesta, D. (Setiembre, 2017). Propuestas de Reformas en el Sistema de Pensiones, Financiamiento en la Salud y Seguro de Desempleo. enero 31, 2019, de Comisión de Protección Social Sitio web: trabajodigno. pe/wp- content/.../2017/11/Informe_Final_ComisiónProtecciónSocial pdf.
[59] https://elcomercio.pe/economia/peru/sistema-pensionesperuobtienebajacahficacionindicemercer noticia-570303.

características positivas, existen importantes riesgos y/o deficiencias que requieren atención y reformas integrales con miras a convertirse en sistemas sostenibles.

La informalidad laboral es otro de los grandes problemas estructurales de nuestro país, y sea quizá el freno principal de un sistema previsional sostenible. La informalidad laboral puede ser definida como aquel sector de la masa laboral que opera fuera de las normas legales, por lo que quienes se desempeñan en ella no son beneficiarios de los derechos sociales reconocidos en la legislación sobre la materia, y no cumplen con las obligaciones tributarias por lo que no contribuyen al sostenimiento del fisco.

Distribución de trabajadores según tamaño de empresa

	FORMAL	INFORMAL	TOTAL
Empleados en microempresas	1, 379, 400 (11.4%)	10, 720, 600 (88.6%)	12, 100, 000
Empleados en pequeñas empresas	856, 800 (50.4%)	843, 200 (49.6%)	1, 700, 000
Empleados en empresas medianas y grandes	2, 192, 400 (79.3%)	607, 600 (21.7%)	2, 800, 000
			PEA TOTAL 16, 500, 000

Fuente: Proyecto de Ley 344/2021-CR

En el Perú actualmente la informalidad laboral representa aproximadamente un 70% del total de la población económicamente activa (esto equivale a decir que, por cada 10 personas activas en PEA, 7 se encuentran en la economía informal y tan solo 3 son parte de la economía formal). Una consecuencia de la informalidad laboral claramente identificada es el no acceso a un sistema de pensiones que permita el sostenimiento -mediante la garantía de un ingreso mínimo y adecuado- de la persona, una vez que por razón de la edad deba salir de la población económicamente activa. Esto es más grave si se tiene en cuenta que durante el tiempo de actividad del trabajador en la economía informal, este no cumplió con sus obligaciones tributarias, generando de esta manera un perjuicio al fisco al reducir sus ingresos.

Dicho de una manera más sencilla, por cada 10 personas, durante el tiempo que dure la vida útil económica de una persona, solo 3 contribuirán al sostenimiento del fisco y

tendrán derecho a percibir una pensión durante su vejez. Las otras 7 personas no contribuirán tributariamente, porque no tienen los incentivos para hacerlo al significarle un costo que no revertirá en un beneficio individualizable, y tampoco tendrán derecho a una pensión a través del sistema de pensiones, pues durante su vida económica útil no habrán realizado los aportes necesarios.

Entonces, si bien es necesario corregir el problema de la informalidad laboral mediante la solución de sus principales causas; también es necesario, paralelamente, combatir sus consecuencias nocivas en el fisco y el sistema previsional. Por ello, el presente dictamen presenta un sistema complementario de pensión por consumo, el cual busca ofrecer a las personas una pensión que otorgue protección ante los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento, siempre que cumplan con los requisitos que establece la presente Ley. Así, en primer lugar, se aumenta la recaudación tributaria al generar incentivos para que el propio contribuyente exija el pago del Impuesto General a las Ventas y, en segundo lugar, permite la creación de una fuente de financiamiento para poder afrontar las necesidades de personas que no tienen actualmente pensión o expectativa o necesidad de pensión.

Evasión tributaria

La evasión tributaria es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, debido a que apenas 12 700 empresas aportan el 75% de la recaudación total y 1.8 millones de empresas y pequeños negocios aportan el 25% restante, esto es, un pequeño porcentaje de contribuyentes aporta la gran mayoría del dinero recaudado.

Tenemos en el país 2 tributos importantes: el impuesto general a las ventas, en el cual la evasión alcanza el 36.3% de la recaudación potencial, y el impuesto a la renta, donde la situación es más compleja y cuya evasión representa el 57.3% de la recaudación potencial[60].

La evasión de impuestos se esconde dentro de la formalidad. Al menos 3 de cada 10 empresas registradas como formales no cumplen con sus obligaciones tributarias y el otro 70% de los contribuyentes registrados cumple parcialmente ya que pueden tener

[60] SUNAT. (2018). Incumplimiento del IGV. diciembre 26, 2018, de MEF Sitio web: https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doclincumplimiento_IGV.pdf.

declaraciones disímiles, pueden estar declarando un porcentaje de sus ingresos facturados y otros no[61].

Los contribuyentes utilizan diversas formas de evasión, siendo una de ellas la omisión de ventas, que es cuando no se declara la totalidad del monto correspondiente a una operación de venta efectuada en un periodo determinado, lo que origina a su vez un mayor incumplimiento si se considera que se deja de pagar el Impuesto a la Renta también. Según cifras de la SUNAT[62] se estima que la evasión del IGV en el sector comercio minorista asciende a los S/. 1000 millones y la evasión correspondiente a IR por rentas de tercera categoría vinculada al sector comercio minorista asciende a S/. 873 mil soles.

Otro método utilizado es el del uso de facturas falsas, clonándolas o constituyendo otras empresas para emitir estas facturas (ficticias) y así reducir el pago del IGV. Según información de la SUNAT mediante esta modalidad se ha calculado una evasión por un monto de S/. 4 400 millones[63].

Comparando nuestra realidad con la de otros países, se observa que el promedio de evasión fiscal del IGV en Europa es de 15.2% mientras que en Chile llega al 21%, siendo esta última una meta razonable de alcanzar, considerando que sería una disminución de 15 puntos, lo que implica entre S/ 10 000 a S/ 12 000 millones al año.

Un elemento importante de análisis de la evasión fiscal está relacionado con el hecho de que los consumidores peruanos no exigen comprobantes de pago, es así que una estrategia para reducir el alto grado de evasión de nuestro país es la promoción del uso masivo del comprobante de pago electrónico. A través de ello, se genera un círculo virtuoso de formalización en toda la cadena de pagos. En este orden de ideas, la presente ley se configura como un mecanismo de incentivo para que las personas soliciten comprobante de pago por sus adquisiciones de bienes o servicios.

Es importante que la población se eduque en finanzas y entienda que es necesario ahorrar para la vejez. Asimismo, los niveles de informalidad y los bajos ingresos no

---

[61] Avila, R. (2017). Sunat: Al menos 3 de cada 10 empresas formales no paga impuestos. febrero 8, 2019, de Grupo Verona Sitio web: https://www.grupoverona.pe/sunat-al-menos-3-de-cada-10-empresasformales-no-paga-impuestos/.
[62] Fuente: SUNAT 2018, Recuperado de: http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/nota_tributaria/cdro_A7.xls.
[63] Carrillo, M. (2018). Sunat detecta evasión del IGV por S/ 4,400 millones vía facturas falsas. febrero 8, 2019, de PUCP Sitio web: http://blog pucp.edu. pe/blog/miguelcarrillo/2018/11/21/sunat-detecta-evasion- del-igv-por-s-4400-millones-via-facturas-falsas/.

permiten que los ahorros obligatorios puedan brindar una pensión digna para los adultos mayores. En ese sentido, la propuesta planteada sobre este acápite en el presente dictamen busca generar ahorros complementarios a lo largo de la vida de los afiliados, generando así conciencia en la población sobre los niveles de ahorro que debe cumplir para contar con una pensión digna. Además, se hace hincapié que el ahorro a través del IGV es una alternativa a muchas que el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo puedan plantear con fin del cumplimiento del objetivo.

En conclusión, el sistema previsional de nuestro país requiere la adopción de una reforma estructural que permita hacer frente a los puntos críticos actuales, así como a los riesgos y amenazas futuras al sistema pues, de no hacerlo, el Perú enfrentará graves problemas de estabilidad financiera de los sistemas actuales, además de enfrentar grandes retos en lo referido a la provisión de protección social para sus ciudadanos.

6.6 Fondo Solidario de Pensiones

Como se ha mencionado, nuestro país se encuentra bajo un sistema dual, en el cual coexisten el sistema de reparto a través de la ONP y el sistema de contribución definida en el sector privado. Sin embargo, uno de los grandes problemas del sistema de pensiones es la baja tasa de reemplazo que se materializa bajo estos dos sistemas. Este problema no es ajeno a los demás países de América Latina.

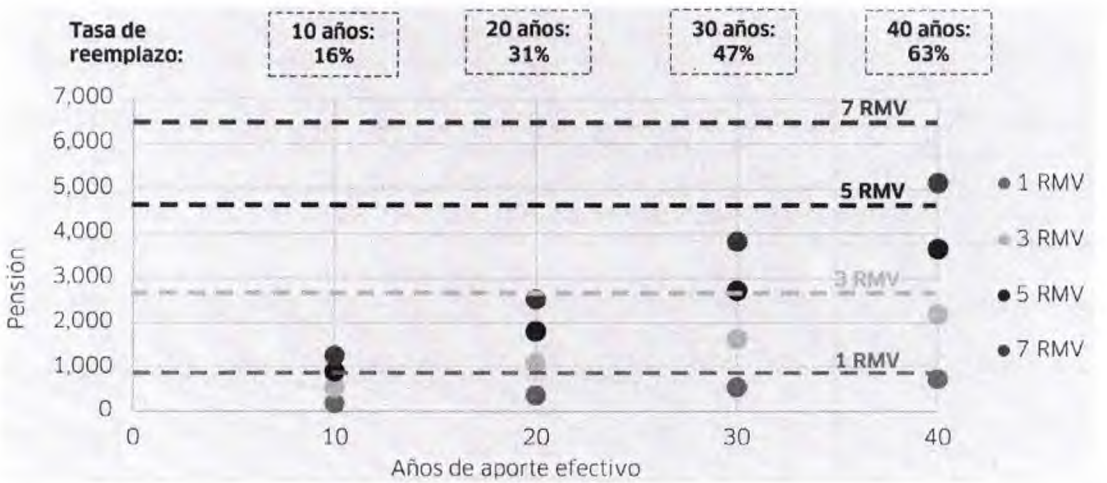
Tasas de reemplazo netas simuladas para asalariados que se retiran a la edad mínima de cada país, 2020

	Años de contribución	Asalariados	
		Hombres	Mujeres
Argentina	Siempre	81,2	85,0
	Mínimo	66,6	72,1
Brasil	Siempre	65,9	72,1
	Promedio	48,1	45,8
Chile	Siempre	40,1	41,3
	Promedio	34,3	22,0
Colombia (BD)	Siempre	86,0	87,9
	Mínimo	57,0	65,3
Colombia (CD)	Siempre	33,1	40,6
	Promedio	31,9	40,6
Ecuador	Siempre	111,9	119,3
	Mínimo	82,9	87,1
México	Siempre	22,5	29,5
	Mínimo	21,6	29,8
Perú (BD)	Siempre	46,3	43,9
	Mínimo	45,9	44,5
Perú (CD)	Siempre	36,1	29,1
	Promedio	22,4	21,3
Panamá	Siempre	60,8	61,9
	Mínimo	44,8	32,3
Uruguay	Siempre	51,8	54,5
	Mínimo	46,3	46,5

Fuente: Los sistemas de pensiones y salud en América Latina, CAF.

Bajo el sistema de la ONP al pensionista se le asegura una pensión mínima de S/ 500 para los afiliados con 20 o más años de aportes. En el sistema privado, dado el sistema de contribución definida, no existe una pensión mínima asegurada, el pensionista puede optar por un retiro programado o por una renta vitalicia principalmente. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la tasa de reemplazo máxima por 40 años de trabajo efectivo sería de 63%; sin embargo, la realidad de nuestro sistema de pensiones sólo alcanza en promedio una densidad de cotización del 50%, es decir, 20 años por lo que el promedio de tasa de reemplazo esperado sería de 31%.

Simulación del nivel de pensiones en el sistema privado de pensiones según ingresos y años de aporte efectivo (Soles)



Fuente: Sistema de pensiones: retos y propuestas de reforma. IPE.

Este contexto demuestra los bajos niveles de pensiones que se reciben y recibirán sino se realizan reformas estructurales en el país de tipo laboral y educativa que eleven la productividad laboral, los ingresos promedios y por ende, los aportes por afiliado.

En este contexto la Comisión propone la generación un Fondo Solidario de Pensiones que permita complementar hasta una pensión mínima la contribución que un trabajador reciba después de su jubilación. Ello dado que, es altamente probable, que un gran grupo de personas reciba una pensión menor a una pensión mínima. Este tipo de instrumento compensatorio es algo que existe en otros países como México y Chile. A continuación se presenta el funcionamiento del Fondo de Reserva de Pensiones como experiencia a tomar en cuenta para el desarrollo del Fondo Solidario de Pensiones para el Perú.

Chile: Fondo de Reserva de Pensiones[64]

[64] Recuperado de: https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/fondos-soberanos/fondo-de-reserva-de-pensiones/politica-de-inversion

El Fondo de Reserva de Pensiones se constituyó el 2006, con un aporte inicial de US$ 604 millones, su creación responde al escenario demográfico caracterizado por una mayor esperanza de vida y un aumento de la población de tercera edad, lo cual implica mayores costos previsionales futuros, sumado a la necesidad de garantizar pensiones básicas solidarias a quienes no han logrado ahorrar lo suficiente para su jubilación.

El objetivo es apoyar el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal de las pensiones básicas solidarias de vejez y de invalidez, así como los aportes previsionales solidarios considerados en la Reforma Previsional. De este modo, se complementa el financiamiento de futuras contingencias en materia de pensiones.

El Fondo de Reserva de Pensiones se incrementa cada año en un monto mínimo equivalente al 0,2% del PIB del año anterior. Si el superávit fiscal efectivo es superior a 0,2% del PIB, el Fondo recibe un aporte equivalente a dicho superávit con un máximo de 0,5% del PIB. Esta regla de acumulación asegura anualmente recursos nuevos para el Fondo, independientemente de la situación fiscal que el país viva cada año.

A continuación se presentan algunas pautas o directrices de inversión que precisan los objetivos, límites y parámetros de riesgo que determina el Ministerio, con la asesoría del Comité Financiero, y que son utilizadas por el Banco Central de Chile y los administradores externos en la gestión del fondo.

Portafolio de Inversión de Largo Plazo (PLP)

El principal objetivo de inversión es generar recursos que permitan financiar parte de las obligaciones fiscales en pensiones. Con este fin, se ha definido el objetivo específico de lograr un retorno esperado anualizado en pesos de al menos 2% por sobre la inflación chilena en un período de 10 años con una probabilidad de al menos 60%. Se considera que el horizonte de inversión es de mediano a largo plazo, considerando el tamaño y la oportunidad de las obligaciones que debe financiar.

La composición de cartera es de 31% en Acciones, 34% en Bonos Soberanos y Otros Activos Relacionados, 13% en Bonos Corporativos, 8% en Bonos de Alto Rendimiento,

6% en Bonos con Respaldo de Hipotecas de Agencias de EE.UU., y 8% en Bonos Soberanos Indexados a Inflación.

Para cada componente de la composición estratégica de activos se ha definido un comparador referencial o benchmark, que corresponde a un índice representativo del mercado respectivo:

Clase de Activos	Porcentaje del PLP	*Benchmarks*
Acciones	31%	MSCI All Country World Index ex Chile (USD unhedged, con los dividendos reinvertidos)
Bonos Soberanos y otros Activos Relacionados (a)	34%	Bloomberg Barclays Global Aggregate: Treasuries Index (USD unhedged)
		Bloomberg Barclays Global Aggregate: Government-Related Index (USD unhedged)
Bonos Corporativos	13%	Bloomberg Barclays Global Aggregate: Corporates Index (USD unhedged)
Bonos de Alto Rendimiento	8%	Bloomberg Barclays Global High Yield Index (USD unhedged)
Bonos con Respaldo de Hipotecas de Agencias de EE.UU.	6%	Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Bonos Soberanos Indexados a Inflación (real)	8%	Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Index (USD unhedged)
(a) Cada subíndice de esta clase de activos se agrega de acuerdo a su capitalización relativa.		

Los portafolios de Bonos Soberanos y Otros Activos Relacionados y de Bonos Soberanos Indexados a Inflación son gestionados directamente por el Banco Central de Chile, en calidad de agente fiscal. Los portafolios de Acciones, Bonos Corporativos, Bonos de Alto Rendimiento, y Bonos con Respaldo de Hipotecas de Agencias de EE.UU. son gestionados por administradores externos contratados por el Banco Central de Chile, seleccionados mediante procesos de licitación.

Se ha definido un límite de tracking error ex ante de 50 puntos base para el portafolio agregado de Bonos Soberanos y Otros Activos Relacionados y Bonos Soberanos Indexados a Inflación, de 60 puntos base para el de Acciones, de 50 puntos base para el de Bonos Corporativos, y de 150 puntos base para Bonos de Alto Rendimiento. En el caso de Bonos con Respaldo de Hipotecas de Agencias de EE.UU. se exige que el promedio del mes sea inferior a 20 puntos base y que en forma diaria no exceda 30 puntos base.

El Perú no ha sido ajeno a este tipo de iniciativas, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), se crea en abril de 1996, con el objeto de consolidar la reforma previsional peruana y respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El FCR administra cuatro clases de Fondos: Fondos con reserva actuarial constituidos por empresas públicas privatizadas o liquidadas, Fondo Bonos de Reconocimiento, Fondo FCR-D.L.19990 y el Fondo de la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional FCR-DL 28046.

El FCR es un administrador de recursos brindados por norma expresa, es intangible, tiene personería jurídica de derecho público y es administrado por un Directorio. Por su carácter intangible, los recursos que administra no pueden ser donados, rematados, embargados, dados en garantía o destinados para otro fin que no sea de carácter previsional.

Los recursos del FCR provienen de:

- Las reservas actuariales de los regímenes previsionales del Sector Público que administra la ONP.
- Los recursos que se destinen por parte del Tesoro Público mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- Derechos económicos de ELECTROPERÚ S.A.
- Libre Desafiliación Informada.
- La rentabilidad del Fondo, deducidos la retribución acordada con empresas especializadas en administración, custodia y servicios financieros conexos en cartera de inversiones, así como otros gastos y comisiones directamente relacionados con sus inversiones financieras, que autorice el Directorio.

- Otros ingresos, como donaciones, créditos, legados, transferencias y demás recursos provenientes del sector privado, así como de la cooperación nacional e internacional.

A fin de evitar el agotamiento del Fondo antes de la fecha esperada, debido a la implementación de la Ley 29426, Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, el cual generaría un efecto de adelanto en la redención de los Bonos de Reconocimiento, en el año 2013 se autorizó a la Dirección General de Tesoro Público del MEF la transferencia al Fondo FCR-Bonos de Reconocimiento la suma de S/ 400 millones. Actualmente, el Fondo es cubierto íntegramente por recursos ordinarios.

Al 31 de diciembre de 2020, el valor del Fondo fue de S/ 11.7 millones producto de reembolsos de pensiones no pagadas.

Evolución del Fondo FCR-Bonos de Reconocimiento al 31-12-2020 (expresado en millones de S/ y %)

FCR - BONOS DE RECONOCIMIENTO	2016	2017	2018	2019	2020
Valor del Fondo	8.4	9.2	9.8	10.5	11.7
Rentabilidad Nominal Anual	3.75%	5.24%	4.29%	6.47%	10.84%

Fuente: Estados Financieros Auditados del FCR-Bonos de Reconocimiento.

Al 31 de diciembre de 2021, el valor del portafolio administrado por el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales Macrofondo asciende a S/ 18,822,891,912 equivalentes a US$ 4,756,859,214.

Esta experiencia representa una oportunidad de mejora para la constitución de un nuevo Fondo exclusivo para pensiones en el país con una institucionalidad y lineamientos con un tenor similar al de Chile. Ello permitirá asegurar pensiones mínimas a una generación futura que cada vez se encuentra más concentrada en la vejez. Asimismo, para la

sostenibilidad del Fondo es importante que se generen reformas estructurales laborales y educativas de manera que la tasa de formalidad de la economía sea cada vez mayor y los ingresos promedio se eleven de forma sostenida.

6.7 Pensión mínima para aportantes

En el Perú existe la necesidad de crear un sistema de pensiones sostenible que permita integrar y regular el derecho de todos los peruanos de contar con una pensión de jubilación que le permita vivir dignamente y contar con una cobertura suficiente y de sostenibilidad al costo presente y futuro, garantizando así las coberturas y prestaciones comprometidas con su bienestar personal. Ante esta situación es necesario implementar diversas medidas, que permita proveer liquidez a fin de cubrir el costo de vida de una persona, para aliviar sus necesidades u obligaciones.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) menciona su preocupación acerca de los sistemas de pensiones que han tenido un impacto negativo en el mercado laboral a nivel mundial, debido a que ha generado una fuerte crisis incrementando el desempleo y como consecuencia de la pérdida de ingresos que han originado la necesidad de tomar medidas que van desde "el apoyo directo, la flexibilización y mayor generosidad del seguro de desempleo, el otorgamiento de subsidios a las contribuciones hasta la liberalización de los fondos de pensiones de los sistemas de capitalización individual" [65], tratando de minimizar el impacto económico negativo en nuestro país.

De esta manera la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) busca enfrentar a los principales desafíos que ha tenido que afrontar el sistema de pensiones, que le permita alcanzar la cobertura, la suficiencia de aportes y la sostenibilidad. La cobertura hace referencia a la cantidad de la población que tiene acceso efectivo a una pensión. La suficiencia, se vincula al nivel o cuantía de las prestaciones monetarias y la sostenibilidad, al costo presente y futuro del sistema de pensiones para garantizar las coberturas y las prestaciones comprometidas[66].

---

[65] *Boletín Semanal – SBS Informa – mayo 2021, https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1161?title=Retos%20y%20desaf%C3%ADos%20para%20los%20sistemas%20de%20pensiones#:~:text=Por%20otro%20lado%2C%20la%20profesora,el%20aumento%20de%20la%20longevidad.*

[66] *Opinión Apoyo Consultoría – abril 2023 – Cinco propuestas para mejorar el sistema de pensiones peruano, https://www.apoyoconsultoria.com/es/cinco-propuestas-para-mejorar-el-sistema-de-pensiones-peruano/*

También, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que busca que las pensiones sean homogéneas, tanto en el sistema público como privado, de manera que no se generen distintos incentivos entre uno y otro. En ese sentido "La visión que tiene el MEF es abrir más la cancha, generar una mayor competencia en el sistema, porque el tema no es, necesariamente, mantener un sistema de AFP, es mantener una gestión de fondos en favor del afiliado" [67]. En relación a ello, se muestra el siguiente grafico donde se puede apreciar que existe una falta de cobertura y baja densidad de contribuciones en el sistema de pensiones peruano.

Radiografía del sistema de pensiones peruano

[67] *Nota del Diario la República. Medio digital: https://larepublica.pe/economia/2023/04/11/pensiones-mef-busca-que-la-pension-minima-sea-homogenea-en-el-sistema-publico-y-privado-jubilacion-onp-afp-reforma-pensiones-sistema-privado-pensiones-929566*



Hay una falta de cobertura y baja densidad de contribuciones en los sistemas de pensiones

Categoría	SNP (ONP)*	SPP (AFP)
Número de afiliados	4.7 millones (junio 2022)	8.8 millones (diciembre 2022)
Número de aportantes	1.4 millones (junio 2022)	3.6 millones (diciembre 2022)
Número de pensionistas	605.000 (junio 2022)	666.000 (diciembre 2022) 2/
Ingreso promedio mensual afiliados 1/	S/1.793, Enaho (3T-2022)	S/2.452, Enaho (3T-2022)
Ingreso mediano mensual afiliados 1/	S/1.500, Enaho (3T-2022)	S/1.732, Enaho (3T-2022)
Densidad de cotización	34 por ciento, FMI (2018)	40 por ciento, FMI (2018)
Recaudación de contribuciones	S/2.100 millones (a junio 2022)	S/14.500 millones (2022)

Fuente: Diario la República. https://larepublica.pe/economia/2023/04/11/pensiones-mef-busca-que-la-pension-minima-sea-homogenea-en-el-sistema-publico-y-privado-jubilacion-onp-afp-reforma-pensiones-sistema-privado-pensiones-929566

Es por lo que esta Comisión busca crear un sistema de pensiones que incorpore a todos los peruanos que cumplan con los requisitos establecidos en la norma y sea sostenible a partir de un conjunto de mecanismos de aportes, con una eficiente y transparente administración con rentabilidad que permita gozar de una pensión digna a la edad de jubilación, independiente de su condición económica o social y de la condición laboral que haya tenido durante su vida [68].

Actualmente el sistema de pensiones es percibido como un sistema exclusivo, que contribuye a exacerbar las grandes desigualdades sociales que existen en el país. Dentro de este grupo exclusivo de personas que puede acceder a este sistema, pocos trabajadores reciben una pensión digna. Por ello, no sorprende que casi toda la

[68] *Una pensión **digna** y **suficiente** para que **todos** los ciudadanos peruanos que se jubilen tengan una cobertura de ingresos **sostenible** durante sus años de retiro de la actividad laboral, y así evitar que los futuros jubilados sufran de indigencia y desprotección social cuando envejezcan. https://gerens.pe/blog/reforma-sistemas-pensiones-peru-aspectos-sentido-comun/#_ftn1*

población esté en contra del sistema existente, y por ello es necesario buscar una nueva reforma.

El Instituto Peruano de Economía manifiesto que esta reforma al sistema previsional se debe dar mediante dos objetivos básicos:

> *"Lograr sostenibilidad y aumentar su cobertura (apenas 3.7% en el quintil más pobre de la PEA). Para eso, hay que cerrar el SNP y fortalecer el SPP. Lo primero, porque el desbalance del SNP es tal que el subsidio del Tesoro ha subido de 18% de la planilla en 1995 a 75% de la misma en 2005. Y lo segundo, porque el SPP demostró que puede autofinanciarse. Reformas complementarias básicas para aumentar la cobertura son: una pensión mínima (equivalente al primer pilar propuesto por el Banco Mundial, pero financiada con el ahorro que obtuvo el Estado por la reforma, en vez de hacerlo con los aportes de los afiliados a las AFP); obligar a cotizar a los trabajadores independientes (el número de cotizantes en abril apenas fue de 38% de los afiliados activos) e incentivar el ahorro voluntario (lo que permitiría concentrar el subsidio a la pensión mínima en las capas efectivamente más pobres)"* [69] .

En ese sentido, resulta importante para esta comisión promover la reforma del sistema de pensiones en el Perú el cual enfrenta tres problemas principales: la baja cobertura, la insuficiente cantidad de aportes y el aumento de la esperanza de vida. Estos problemas estructurales que se han venido generando por los recurrentes retiros anticipados que se han aprobado en los últimos tres años, amenazan su sostenibilidad y afectan negativamente las pensiones que recibirán los peruanos que la integren.

Muchos especialistas en pensiones han planteado una serie de medidas para mejorar el sistema de pensiones en el Perú, impulsando el desarrollo de políticas que permitan disminuir los riesgos a los fondos previsionales, una de las más mencionadas es la necesidad de una pensión mínima.

Mediante Ley 31670, de fecha 10 de junio de 2022, se propuso la creación de pensiones mínimas y la ampliación de las alternativas de aportes voluntarios para los afiliados al

[69] *Instituto Peruano de Economía - https://www.ipe.org.pe/portal/hablemos-sobre-el-acceso-al-sistema-previsional/*

Sistema Privado de Pensiones. La finalidad de esta ley es crear una mejor cultura previsional a través de la determinación de metas con miras a una jubilación con una pensión mínima y promover alternativas para los aportes voluntarios de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, con cargo de ser devuelto a nombre de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones[70]. Se podría establecer supuestos y/o sistemas de una pensión anticipada y precisar que la pensión mínima no será menor al monto correspondiente a la remuneración mínima vital vigente.

El sistema debe estar diseñado para garantizar que aquellas personas que han aportado durante un tiempo determinado al sistema previsional tengan derecho a una pensión mínima, que les permita acceder a una canasta básica de consumo individual. En el sistema público peruano, todo afiliado que aporte al menos 20 años tiene derecho a una pensión mínima de S/500 mensuales (o una pensión proporcionalmente menor si aporta menos años).

Es evidente que la regla de ajuste de la pensión mínima garantizada tendrá impactos en el costo fiscal proyectado de esta política. El ejemplo más elocuente es el de Chile en el escenario base; es el único país que establece la indexación con tasa de inflación, y previo a considerar los incrementos extraordinarios otorgados a fines de 2019. En este caso, el costo fiscal que arroja el modelo tiende a desaparecer a medida que se avanza en el periodo de proyección.

Esto ocurre porque, con el transcurso del tiempo, el monto del haber garantizado se va reduciendo en relación con el salario medio, de modo tal que casi la totalidad de los beneficiarios alcanza la pensión mínima con sus propios fondos. Es así como se obtendría una baja también considerable en el costo fiscal proyectado de esta política en los demás países si adoptaran esta regla de ajuste de la pensión mínima garantizada.

Sin embargo, esta alternativa fiscalmente sostenible resulta política y socialmente de difícil aceptación por las reducidas tasas de reemplazo que arrojan los sistemas de capitalización de la región debido a los bajos rendimientos de los fondos de pensión. De hecho, si bien la regla de ajuste en Chile aún no ha sido modificada, a fines de 2019 se otorgaron, como ya se ha mencionado, incrementos adicionales escalonados en la pensión mínima garantizada que, en dos años, acumulan un aumento del 50% por sobre

[70] *Ley N° 31670 - Ley que crea las pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios alternativos con fines previsionales.*

la inflación, al tiempo que se encuentran actualmente en discusión otras reformas del sistema.

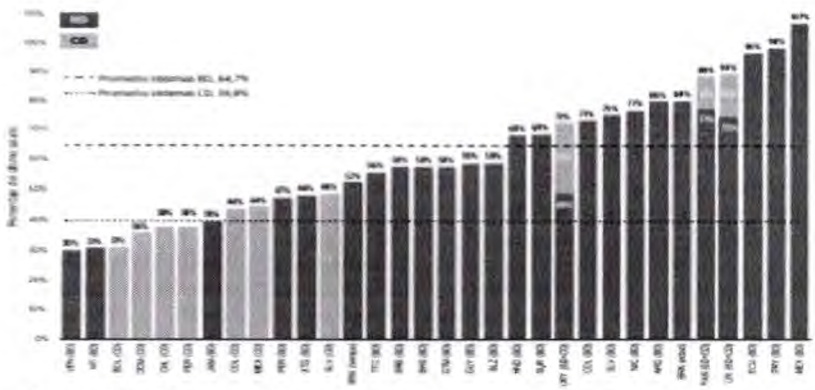
El mecanismo alternativo de ajuste de la pensión mínima garantizada que aplican varios países de la región procede de acuerdo con la variación del salario mínimo, que en el modelo se supone que evoluciona en línea con el salario medio de la economía. Este es el caso de Colombia, México y República Dominicana. En cambio, en Bolivia, El Salvador y Perú, el ajuste de la pensión mínima garantizada no se rige por una regla preestablecida, por lo que en el modelo se adoptó como supuesto que también sigue la evolución del salario mínimo. A las personas que tienen una pensión menor a la mínima en el sistema de AFP o en el sistema previsional antiguo, el Estado les aporta un complemento en dinero a través del Pilar Solidario.

A fin de cuentas, es importante recordar que la alta informalidad es la principal traba para contar con una mayor cobertura y densidad previsional. Por lo tanto, si no se trabaja en paralelo una política general del Estado que incentive la formalización laboral y empresarial, el impacto de estos esfuerzos puede ser insuficiente. Dado que este es un proceso de largo plazo, pero urgente empezar a discutirlo.

Diseño de los sistemas pensionales: Beneficios, retornos y subsidios

La gran mayoría de sistemas de pensiones hoy ofrecen beneficios que subsidian a los trabajadores que participan de manera continuada en estos. Es decir, los aportes del trabajador promedio no lograrían financiar la totalidad de la pensión que el sistema de pensiones otorga. Llegar a esta afirmación requiere del análisis de varios elementos. La tasa de reemplazo media en los sistemas de beneficio definido en América Latina y el Caribe es del 64,7 %.

Tasas de reemplazo promedio de los sistemas previsionales en América Latina y el Caribe (100% de densidad de cotización)



Fuente: BID

Es decir, el trabajador promedio en el escenario base pasa de un ingreso laboral de 100 a un ingreso pensional de 64,7 al jubilarse[71]. Esta tasa de reemplazo es mayor que el promedio en países de la OCDE. Sin embargo, existe una gran variación entre las promesas que hacen los países en sus sistemas de beneficio definido. Hay un grupo de países que ofrecen más del 80 % de tasa de reemplazo (Brasil, Ecuador, Paraguay y México). La gran mayoría ofrece entre 50 % y 80 % de tasas de reemplazo (Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Guatemala, Belice, Guyana, Honduras, Surinam, Colombia, El Salvador, Argentina, y los componentes de beneficio definido de los sistemas mixtos de Panamá, Costa Rica y Uruguay). En Brasil, bajo la modalidad de pensión por tiempo de contribución —referido como "BRA (tiempo)"—, se obtiene una tasa de reemplazo media de 52 %. Hay países que ofrecen menos de un 50 % (Venezuela, Haití, Jamaica, Antigua y Barbuda y Perú).

En la región hay tres países con sistemas mixtos (Panamá, Costa Rica y Uruguay18), que combinan componentes de beneficio definido y de contribución definida. La tasa de reemplazo media en estos sistemas es del 80 %, y es Panamá el país que ofrece una tasa de reemplazo conjunta cercana al 90 %. En los sistemas mixtos, la mayor parte de la pensión está determinada por el componente de beneficio definido (78 % en Panamá, 75 % en Costa Rica y 49 % en Uruguay).

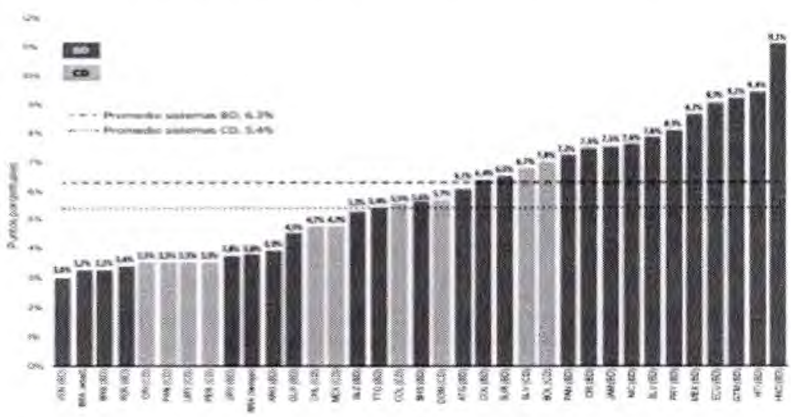
[71] La tasa de reemplazo se mide como porcentaje del último salario del trabajador.

La tasa de reemplazo media en los sistemas de contribución definida en América Latina y el Caribe es del 39,8 %19. Es decir, el trabajador promedio en el escenario base pasa de un ingreso laboral de 100 a un ingreso pensional de 39,8 al jubilarse. La variabilidad es menor que en el caso de los esquemas de beneficio definido, pero igualmente notable: desde 31 % en Bolivia hasta 48 % en El Salvador.

Una vez establecido el nivel de pensión para el trabajador promedio hipotético, analizamos la relación entre aportes y beneficios a través de los indicadores de tasa de retorno implícita.

La tasa de retorno implícita de los sistemas de beneficio definido en la región es del 6,3 % real anual. Esto significa que, para financiar la pensión de los trabajadores de una manera actuarialmente justa, el Estado tendría que haber capitalizado los aportes a una tasa del 6,3 % real. Algunos países como Honduras, Haití, Guatemala y Ecuador ofrecen tasas por encima del 9 % real anual.

Tasa de retorno implícita de los sistemas previsionales en América Latina y el Caribe (100% de densidad de cotización)



Fuente: BID

Si se definen como "subsidios al trabajador" las tasas de retorno mayores que el 3,5 % anual, en 20 de los 24 países analizados con sistemas de beneficio definido el trabajador tipo recibe un subsidio del sistema. Este subsidio se expresa a continuación de varias maneras.

El subsidio se puede expresar como puntos porcentuales subsidiados en la tasa de reemplazo. Los países con subsidios más altos son también los que presentan tasas de retorno implícito mayores. El trabajador promedio en la región recibe un subsidio de 28 puntos porcentuales en su tasa de reemplazo, lo que es equivalente al 44 % del total de su pensión. Los sistemas de beneficio definido que otorgan mayores subsidios son los de México (80 %), Ecuador (70 %), Paraguay (64 %) y Honduras (59 %).

Alternativamente, el subsidio se puede expresar en valor presente en el momento del retiro. La diferencia en valor monetario, ajustado por paridad de poder de compra, entre el capital necesario para financiar la pensión que promete la regla de beneficio definido y el capital que se hubiera acumulado al 3,5 %. El subsidio promedio en la región es cercano a US$ 75 000. Los países que más subsidian a sus cotizantes son México, Paraguay y Ecuador, con subsidios de más del 60 % sobre la tasa de reemplazo y con montos de US$ PPP 230 000, US$ PPP 213 000, y US$ PPP 207 000 por año, respectivamente. Los países que menos subsidian a sus cotizantes son Brasil, Barbados y Venezuela, con subsidios negativos de alrededor del 5 % de sus correspondientes tasas de reemplazo, lo que corresponde a un "impuesto" a través del sistema de pensiones de US$ PPP 16 000.

También existen importantes subsidios en los sistemas de contribución definida. Este es el caso de El Salvador, República Dominicana y Colombia, donde la pensión mínima hace que la tasa implícita de retorno suba hasta el 6,7 %, 5,7 % y 5,5 %, respectivamente. Solo en Perú, en Bolivia y en el componente de contribuciones definidas de los sistemas mixtos (Uruguay, Costa Rica y Panamá), la tasa de retorno implícita es igual a la tasa de interés de capitalización de aportes.

El Estado o un fondo de garantía de pensión mínima es el que financia el exceso de pensión. Según cálculos, estos subsidios representan entre US$ PPP 35 000 en República Dominicana (14 % del ingreso medio), US$ PPP 33 000 en México (12 % del ingreso medio), US$ PPP 50 000 en Colombia (15 % del ingreso medio), US$ PPP 52 000 en Bolivia (14 % del ingreso medio) y US$ PPP 54 000 en El Salvador (23 % del ingreso medio). Un caso especial es el de Chile, donde existe un subsidio explícito de pensión complementaria que disminuye conforme crece el ahorro individual (Informe Final - Comisión Presidencial sobre Pensiones, 2015). En este caso, el subsidio para el trabajador medio equivale a US$ PPP 30 000 (9 % del ingreso medio).

La garantía estatal es un complemento a la pensión, el que varía de acuerdo con determinadas características y/o requisitos que debe cumplir la beneficiaria o beneficiario. Como se ha podido visualizar este es un elemento utilizado como parte de las recetas de pensiones de otros países; sin embargo, debe buscarse que los fondos tengan la más alta rentabilidad posible (mercados financieros) y también cumplan con la sostenibilidad fiscal.

6.8 Pensión mínima no contributiva

6.8.1. El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), fue creado en octubre de 2011 con el objetivo de brindar protección social a los adultos mayores de 65 años que viven en situación de pobreza extrema. El programa brinda básicamente los siguientes servicios:

- Entrega de subvenciones económicas bimensuales equivalentes a S/. 250 (es decir, S/. 125 mensuales). Adicionalmente, la población afiliada a Pensión 65 recibe servicios de salud pública sin costo alguno y son elegibles para el seguro integral de salud (SIS).

- Fomento de la protección social mediante acciones de articulación intersectorial e intergubernamental orientadas a facilitar el acceso de los usuarios de Pensión 65 a servicios públicos que presta el Estado (Salud, Identificación y Estado Civil-RENIEC). De manera complementaria, y con el apoyo de redes locales, se desarrollan acciones orientadas a mejorar el bienestar de la población adulta mayor por medio de redes de apoyo local.

6.8.2. Antecedentes

"Pensión 65" fue constituido sobre el Piloto de Asistencia Solidaria "Gratitud", creado y encargado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en agosto de 2010 y tenía el objetivo de transferir de manera directa subvenciones económicas (S/. 100 mensuales) a los adultos mayores de setenta y cinco (75) años o más de edad, en condición de extrema pobreza (de acuerdo a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH y en ámbitos de intervención del Programa Juntos). El Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" fue creado el 19 de octubre de 2011

mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), organismo encargado de diseñar e implementar las políticas públicas y estrategias dedicadas a reducir la pobreza y desigualdad de las poblaciones vulnerables. A partir del 2012, la intervención se constituyó como 'Programa Presupuestal.

6.8.3 Diagnóstico

Los adultos mayores en condición de pobreza son un grupo particularmente vulnerable. La edad avanzada y muchas veces su estado de salud son factores de riesgo para la realización de actividades económicas. Agravando esta situación, tres de cada cuatro trabajadores en el Perú tienen un trabajo informal, y por lo tanto no contribuyen a un fondo de pensiones. En este contexto, la mayoría de los adultos mayores no recibe ningún ingreso una vez que dejan de participar en el mercado laboral. La falta de ingresos tiene efectos directos sobre el bienestar. Por ejemplo, muchas veces los adultos mayores dejan de buscar atención médica para no tener los medios necesarios para pagarlos. Asimismo, dejan de ser participantes activos de la sociedad, olvidados y viviendo un vida falta de dignidad.

La población objetivo del Programa son adultos mayores de 65 años viviendo en extrema pobreza, como se muestra en el siguiente gráfico.

Población potencial, objetivo y priorizada del programa presupuestal Pensión 65

Población Potencial	Personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH.
Población Objetivo	Personas que cumplen con los criterios de elegibilidad para ser usuarios del Programa Pensión 65 según la normatividad vigente.
Población Priorizada	Es la población objetivo que cumple con los criterios de priorización establecidos.

Fuente: MEF

Los criterios de focalización del Programa son:

A. Personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza extrema de acuerdo con los criterios del Sistema de Focalización Categórica y Focalización Socioeconómica.

B. Personas que no cuenten con alguna pensión o subvención que provenga del ámbito público o privado, incluyendo a ESSALUD, así como ser beneficiario de algún programa social, a excepción del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "JUNTOS", Seguro Integral de Salud (SIS), los Programas de Alfabetización, los Programas de Asistencia Alimentaria que como población objetivo atiendan a adultos mayores a partir de 65 años y los Programas de Reparaciones.

C. Para acceder a los beneficios del Población Potencial, los potenciales usuarios deberán entregar, al representante debidamente acreditado una copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y una declaración jurada debidamente suscrita.

A causa de restricciones de asignación presupuestaria, existen los siguientes criterios de priorización:

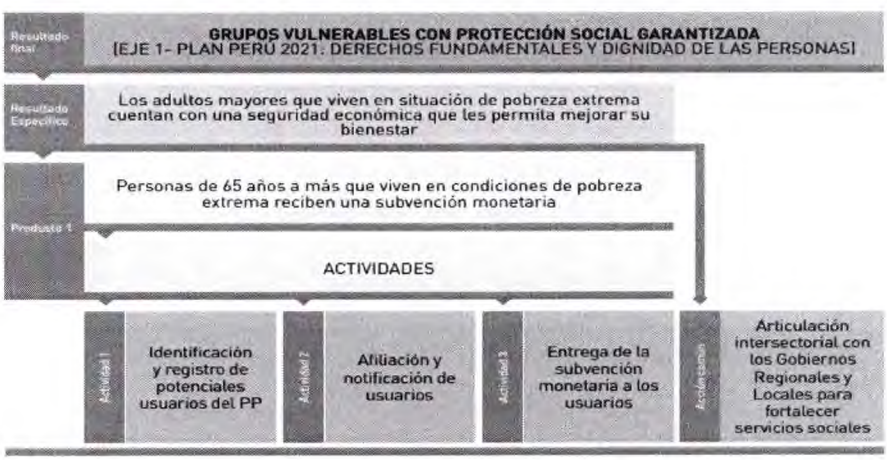
A. Se priorizan los usuarios por el orden decreciente de edad, es decir, que se seleccionarán aquellos potenciales usuarios que a nivel distrital tengan mayor edad.

B. Distritos de pobreza extrema, priorizando aquellos cuyo nivel de pobreza extrema es superior al 50% según el mapa de pobreza 2009 del INEI.

C. Distritos en zonas de conflicto social latente, es decir, los distritos que de manera directa o indirecta están vinculadas al VRAEM, Alto Huallaga, etc.

D. Personas con lengua distinta al castellano.

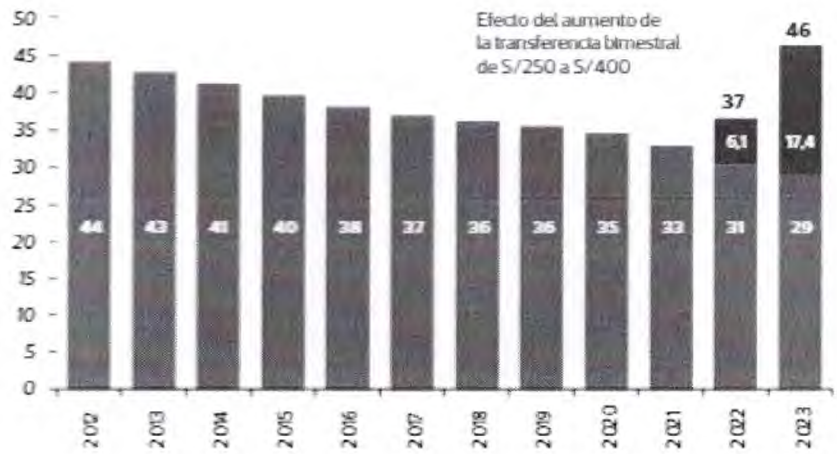
Resultado, producto y actividades del programa presupuestal Pensión 65



FUENTE: MEF

En el año 2021, se fijó como meta atender a 557,043 usuarios, cifra que fue superada al finalizar el periodo, logrando atender a 568,599 personas de 65 años a más, que viven en condiciones de extrema pobreza en 24 departamentos, 196 provincias y 1,787 distritos del país. Dicha meta, también, superó la cantidad de usuarios atendidos durante el año 2020 (563,386 usuarios). Se priorizó la atención de la población más vulnerable, de este modo se atendió a 4,721 usuarios en 20 distritos de las zonas de frontera, 14,662 usuarios en 37 distritos en las zonas del CODE Huallaga y 26,965 usuarios en 69 distritos en las zonas del CODE VRAEM. Del total de usuarios se destaca que 1,457 usuarios fueron mayores de 100 años.

Transferencia mensual del programa Pensión 65, 2012-2023 (% del valor de una canasta básica por habitante)



Fuente: MIDIS, INEI, MEF, estimaciones IPE.

6.8.4 El Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO,

Es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), encargado de brindar una pensión no contributiva a personas en condición de discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

El Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza, fue creado en el ámbito del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Decreto Supremo N° 004-2015- MIMP. Dicho decreto fija el monto de la pensión no contributiva en S/ 150.00 (Ciento Cincuenta y 00/100 Soles), correspondiente a la brecha de ingreso por compensar, movilidad y transporte. Cabe señalar que la entrega se realizará de manera bimestral por la cantidad de S/ 300.00 soles (Trescientos y 00/100 Soles).

Asimismo, con el Decreto Supremo N° 007-2016-MIMP, se modificó el Decreto Supremo N° 004- 2015-MIMP que crea el Programa de Pensión por Discapacidad Severa, en lo concerniente a la etapa de entrega. Al respecto, se establece en el numeral 12.4.2, que "Para el caso de los beneficiarios mayores de edad que no pueden manifestar su voluntad y de los beneficiarios menores de edad el pago de la pensión puede realizarse, a solicitud de parte, de acuerdo al siguiente criterio de prelación:

> a) A solicitud de quien ejerce la patria potestad, la tenencia o tutela del menor de edad, en ese orden, según corresponda.
>
> b) A solicitud de un familiar directo hasta el tercer grado de consanguinidad y que viva con el beneficiario.
>
> c) A solicitud de una persona que viva con el beneficiario y que, además, sea quien realice los cuidados constantes de esta.

Se debe cumplir con los requisitos para ser receptor del programa:

- Contar con un certificado de discapacidad con calificación de severa, emitido por los establecimientos de salud autorizados por el Ministerio de Salud.
- No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través del Seguro Social de Salud – ESSALUD.
- Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH.
- Ser menor de 65 años.

Los sistemas de pensiones contributivos solo están en la obligación de cubrir a los trabajadores formales y dependientes. Si se considera que el 75.2% de los trabajadores en el país son informales, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y que el 82% de los independientes no se encuentran afiliados a ningún sistema de pensiones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tenemos que la cobertura del sistema de pensiones peruano es bajísima, con lo que su efectividad para proteger a la población también lo es.

En el 2022, recibieron subvención adicional extraordinaria las 577 043 personas adultas mayores en situación de pobreza del programa Pensión 65; y las 77 063 personas en situación de discapacidad del programa Contigo, recibieron este apoyo económico dispuesto por el gobierno.

Finalmente, este año 2023, los adultos mayores recibieron una subvención adicional extraordinaria del programa Pensión 65 el cuyo monto es S/250; y las personas con discapacidad del programa Contigo recibieron S/300; incremento de los bonos beneficiaron a 629 mil usuarios de la Pensión 65 y 106 mil usuarios del programa Contigo.

6.9 Usos de aportes previsionales

Para dar inicio al análisis correspondiente, esta comisión considera pertinente y relevante señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en específico y los tratados internacionales de derechos humanos en general forma parte de la legislación interna, tienen rango constitucional y, por lo tanto, debe observarse su cumplimiento. Sustentando dicha observación en lo dispuesto en el artículo 3 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que prescriben lo siguiente:

> *"**Artículo 3.- Derechos Constitucionales. Númerus Apertus***
> *La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno."*
>
> ***"Disposiciones Finales y Transitorias***
> *(...)*
> ***Cuarta. -** Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú."*

Es entonces que, dentro del marco legal señalado líneas arriba, las propuestas contenidas en las iniciativas legislativas: 3133/2022- CR, 4200/2022-CR, 04528/2022-CR, 04743/2022-CR y que son materia de análisis tienen por finalidad, fijar las condiciones por las cuales los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán disponer de un determinado porcentaje del fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios, en pos de la materialización del mencionado derecho universal a la vivienda, ya sea para pagar la cuota inicial para la compra de un inmueble mediante un crédito hipotecario, amortizar dicho crédito o, utilizarlo para la

adquisición de un inmueble al contado, sin pasar por el crédito hipotecario y pudiendo constituir dicho aporte el total o parte del precio.

El Proyecto de Ley 4200/2022-CR sostiene para tal efecto que, a la fecha aún persiste un singular número de habitantes que no cuentan con viviendas propias. Así por ejemplo, señala que Lima Metropolitana es la región con el menor porcentaje de personas con vivienda propia, llegando solo al 64.2%, seguido de la Provincia Constitucional del Callao con un 66.3%, Junín con el 66.3% y Madre de Dios con el 67.6%, entre otros.

La situación mencionada en el párrafo precedente, para el autor del Proyecto de Ley 4200/2022-CR resulta preocupante y, por tal motivo considera que aumentar el porcentaje de disponibilidad para el retiro fondos de las Cuentas Individuales de Capitalización de aportes obligatorios del 25% al 50%, planteando además su utilización para amortizar todo tipo de créditos contraídos en el sistema financiero, contribuiría a que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones tengan una mayor capacidad económica para adquirir una vivienda o un mejor historial crediticio que permita que las entidades financieras les ofrezcan mejores créditos hipotecarios a los ciudadanos.

Viviendas particulares propias, según departamento, 2011-2021 (Porcentaje del total de viviendas particulares)

Departamento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total	74.1	74.8	75.0	75.8	74.8	74.0	74.2	74.7	74.3	75.6	73.3
Amazonas	83.6	81.7	82.9	81.2	82.4	80.9	80.8	81.8	79.2	80.4	78.6
Áncash	77.7	75.6	80.3	79.2	78.9	82.2	80.0	80.4	79.2	82.1	80.6
Apurímac	80.1	83.4	84.0	82.0	82.3	80.9	81.0	81.8	78.3	82.7	77.4
Arequipa	70.5	73.1	74.0	75.5	73.6	77.0	72.3	75.5	74.0	77.8	72.3
Ayacucho	80.5	80.2	80.2	76.8	77.7	77.6	75.9	76.9	77.9	76.9	75.6
Cajamarca	80.9	80.8	80.8	80.6	80.2	79.4	75.5	79.6	81.1	81.8	77.2
Prov. Const. del Callao	68.6	67.9	68.8	70.4	68.3	66.0	66.9	69.1	66.4	68.1	66.3
Cusco	74.0	76.2	78.7	81.3	78.5	75.3	79.6	78.9	75.4	77.4	78.3
Huancavelica	80.0	80.6	83.7	82.4	84.7	83.0	82.9	84.0	83.5	85.3	83.3
Huánuco	83.3	79.5	81.7	78.9	81.1	80.8	78.3	79.9	81.3	79.4	77.4
Ica	74.7	76.0	77.8	80.7	78.1	79.4	80.2	79.2	79.4	79.8	78.3
Junín	69.9	69.0	68.7	72.2	70.9	69.7	72.2	71.6	68.3	70.8	66.3
La Libertad	77.4	73.5	75.6	74.7	77.2	75.8	74.3	73.8	74.7	76.0	75.2
Lambayeque	78.9	78.5	77.2	76.5	75.3	73.4	75.5	76.5	78.3	78.6	73.6
Lima Metropolitana 1/	65.7	67.9	69.4	68.3	66.5	64.2	65.7	65.0	66.0	66.7	64.2
Lima 2/	68.3	71.0	71.4	75.2	71.7	69.6	68.7	72.5	67.3	70.1	71.0
Loreto	85.4	84.3	84.8	85.4	85.8	83.6	85.0	86.0	83.9	88.0	87.3
Madre de Dios	67.1	69.5	72.1	70.3	71.8	67.3	67.7	69.2	69.6	71.5	67.6
Moquegua	84.3	80.8	82.7	81.8	79.6	82.4	81.0	81.1	84.0	82.6	79.0
Pasco	66.4	68.4	69.0	68.3	70.8	71.4	70.3	69.4	69.5	77.5	72.3
Piura	84.1	85.8	86.9	86.1	84.4	87.2	88.9	88.4	89.1	90.4	89.0
Puno	79.5	83.6	82.9	80.3	79.3	81.0	79.0	80.5	80.4	80.6	80.4
San Martín	80.1	80.6	79.5	81.3	82.1	80.4	79.1	81.8	78.8	79.7	79.6
Tacna	75.4	76.1	75.3	75.5	73.6	77.2	77.7	76.8	74.8	77.3	72.6
Tumbes	84.0	85.1	83.2	85.1	84.9	84.8	88.5	85.7	86.0	87.8	86.5
Ucayali	82.3	80.1	83.1	84.1	84.6	82.8	83.0	81.3	81.8	84.5	82.6

Fuente: INEI

Sobre el particular y como se ha mencionado ya, los sistemas de seguridad social nacen con el objetivo de proporcionar protección a los ciudadanos frente a los diversos riesgos sociales que, traducidos en acontecimientos futuros e inciertos ajenos a la voluntad de las personas, les impediría a estas obtener ingresos, o les provocaría una importante disminución en su calidad o nivel de vida.

En el sentido antes expuesto, y para el caso específico del Sistema Privado de Pensiones, este, como sistema previsional debe propender a:

- Evitar la pobreza en la vejez, proporcionando un ingreso suficiente que permita financiar necesidades básicas de sus afiliados.
- Suavizar el consumo, evitando caídas abruptas en la capacidad de consumo de sus afiliados al llegar a la edad de jubilación.

Como señalan Rofman, Apella y Vezza[72]:

> *"Los objetivos centrales de los sistemas de seguridad social son suavizar el nivel de ingreso durante el ciclo de vida de los individuos, a partir del reemplazo de sus ingresos laborales luego del retiro, y reducir la incidencia de la pobreza entre aquellos de edad avanzada"*[73] y; para los fines antes mencionados, un aspecto medular es el de garantizar que los recursos de los fondos de pensiones no sean destinados para fines distintos al de la protección de sus afiliados frente al riesgo de longevidad."

Así pues, todo diseño de políticas públicas en materia de pensiones, conforme a lo expresado en la opinión técnica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP sobre el proyecto de ley materia de análisis, debería emplear un modelo denominado Teoría del Ciclo de Vida[74], que indica que todo individuo tiene un periodo activo en el cual genera ingresos y gasta menos, por lo que tiene capacidad de ahorrar para formar un capital que les servirá para financiar su consumo durante la etapa de jubilación (periodo pasivo), en la que dicho individuo ya no cuenta con capacidades físicas para seguir trabajando corriendo peligro que sus ingresos sean inferiores a los gastos.

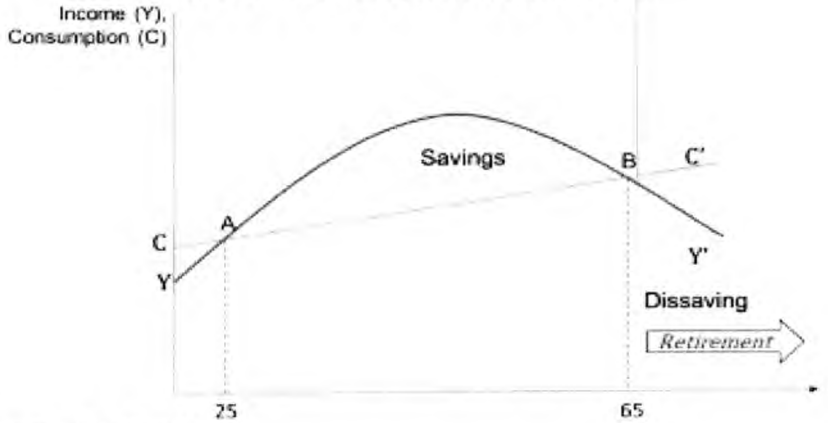
---

[72] Román, Rafael; Apella, Ignacio y Vezza, Evelyn, "Más allá de las Pensiones Contributivas Catorce experiencias en América Latina", Banco Mundial Editores, Pag 13.

[73] Ver:
https://documents1.worldbank.org/curated/en/624841468047055585/pdf/827240WP0P12960siones0contributivas.pdf

[74] Modigliani, Franco (1986), Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations (Nobel Lecture delivered in Stockholm, Sweden, December 9, 1985), The American Economic Review, vol. 76, no. 3, pp. 297-313

Gráfico N° 1: Teoría del Ciclo de Vida



Fuente: Modigliani (1986).

En el sentido antes expuesto, la Comisión coincide con la preocupación expresada por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el sentido que se debe desincentivar medidas que dejen a las personas sin protección frente a los riesgos propios de la longevidad; y, generen mayores cargas al resto de la sociedad, debido a que será esta última en su conjunto, la que finalmente tendrá que proveer los recursos financieros para financiar la protección y prestación de servicios a aquellas personas que quedaron desprotegidas o no ahorraron para su vejez.

En este punto cabe recordar que ya el Sistema Privado de Pensiones ha sido objeto de distintas modificaciones normativas que han permitido en reiteradas oportunidades el retiro de los fondos de las cuentas individuales de capitalización sin objetivos pensionarios con la consecuente afectación de los fondos del sistema; siendo un momento especialmente neurálgico el producido con ocasión de la pandemia del COVID-19.

Así, con la finalidad de coadyuvar a mitigar las consecuencias negativas en la economía generadas por el COVID-19 en el Perú, se dictaron diversas medidas que permitieron a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones retirar y utilizar parte de su fondo de pensiones para fines distintos a los pensionarios, tales como:

- Decreto de Urgencia 034-2020 : "Decreto de Urgencia que establece el retiro extraordinario del fondo de pensiones en el Sistema Privado de Pensiones como medida para mitigar efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras medidas", publicado el 1 de abril del 2020, mediante el cual se otorgó a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, la posibilidad de poder realizar, por única vez, el retiro extraordinario de hasta S/ 2,000.00 (dos mil y 00/100 soles) de su Cuenta Individual de Capitalización, siempre que, hasta el 31 de marzo de 2020, no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta, por al menos 6 meses consecutivos.

- Decreto de Urgencia 038-2020 : "Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas", publicado el 14 de abril del 2020, a través del cual se amplió la posibilidad de retirar de forma extraordinaria por única vez y de manera excluyente al universo de personas comprendidas en el Decreto de Urgencia 034-2020, hasta S/ 2,000.00 (dos mil y 00/100 soles) a los afiliados que al momento de la evaluación de la solicitud se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

  - Comprendidos en una medida aprobada de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente;
  - Que no cuenten con aportes previsionales en el mes de febrero o marzo de 2020; o,
  - Que cuenten con acreditación de aportes para febrero o marzo de 2020 y su última remuneración declarada o la suma de estas percibidas en un solo periodo sea menor o igual a S/ 2,400.00 (dos mil cuatrocientos y 00/100 soles).

- Ley 31017 : "Ley que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020", publicada el 1 de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó el retiro de hasta 25% del total de los fondos acumulados en la Cuenta Individual de Capitalización, estableciendo como monto máximo de retiro el equivalente a 3 UIT y como monto mínimo 1 UIT, permitiendo el retiro de 100% del saldo de dicha cuenta a los afiliados cuyo saldo sea menor o igual a 1 UIT.

- Ley 31068 : "Ley que faculta el retiro de los Fondos Privados de Pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19", publicada el 18 de noviembre de 2020, autoriza, de manera extraordinaria y facultativa a retirar:

  - Hasta 4 UIT del total de sus fondos acumulados en su Cuenta Individual de Capitalización a los afiliados que, hasta el 31 de octubre de 2020, no cuenten con acreditación de aportes previsionales en dichas cuentas, por al menos 12 meses consecutivos;
  - 1 UIT para los afiliados que no registren aportes acreditados en el mes de octubre de 2020 y que no sean beneficiarios de lo establecido en el artículo 1 de la presente ley;
  - Hasta 4 UIT en un solo retiro de los fondos de las Cuentas Individuales de Capitalización de aquellos afiliados, estén o no aportando y que sufran enfermedades oncológicas diagnosticadas por una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS), que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud (RENIPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y que hayan registrado la autorización sanitaria para la práctica de la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) de oncología y/o hematología clínica, según corresponda.

- Ley 31192: "Ley que faculta a los afiliados al Sistema Privado de Administración de fondos de pensiones el retiro de sus fondos", publicada el 7 de mayo de 2021, que autoriza de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, a retirar de manera facultativa hasta 4 UIT del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización.

- Ley 31478: "Ley que faculta el retiro extraordinario de los Fondos Privados de Pensiones en el contexto de la pandemia COVID – 19 en el año 2022", publicada el 21 de mayo de 2022, que autoriza de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, a retirar de manera facultativa hasta 4 UIT del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización.

Como resultado de los retiros autorizados, a diciembre de 2022, se habían retirado en total S/ 87 843 millones de los fondos de pensiones, representando el 80.49% del total de los fondos del sistema.

Retiros del fondo de pensiones distintos al de una pensión durante la pandemia por el COVID-19 (S/ millones)

Valor del fondo de pensiones a febrero 2020	171 131
Retiros pandemia Decretos de Urgencia – abril 2020 (S/ 2 000)	5 061
Retiro Ley 31017 – mayo 2020 (25% o 3 UIT)	19 647
Retiro Ley 31068 – noviembre 2020 (4 UIT)	9 016
Retiro Ley 31192 – mayo 2021 (4 UIT)	32 219
Retiro Ley 31478 – mayo 2022 (4 UIT) (1)	21 900
Total de retiros del fondo – COVID-19	**87 843**
Valor del fondo de pensiones a enero 2023	**109 138**

(1) Monto a diciembre 2022

Fuente: SBS

Como se ha mencionado reiteradas veces, cualquier retiro de fondos de pensiones efectuado para un fin distinto al del financiamiento de las pensiones, además de afectar, en el largo plazo, a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, termina por afectar también al conjunto de la sociedad, pues genera, entre otros, los siguientes problemas:

- Hace más complejo el objetivo de alcanzar una pensión adecuada.
- Aumenta el riesgo de caer en una situación de pobreza en la vejez, pues los retiros que se efectúen hoy reducen la futura pensión que reciban al momento de la jubilación.
- Genera una mayor carga financiera a la sociedad, la cual tendrá que ser la que provea los recursos para financiar la protección de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones que, mediante el retiro anticipado de sus fondos, afectarán el nivel de sus pensiones.
- Generan en las AFPs incentivos perversos para la inversión en instrumentos más líquidos y fácilmente convertibles a efectivo para pagar los retiros de fondos, pero que son menos rentables para las futuras pensiones.

Ahora bien, bajo el análisis efectuado, las modificaciones establecidas por las leyes 30478 y 30822 en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-94-EF; pasando las Cuentas Individuales de Capitalización de los afiliados de ser un fondo de garantía para la compra de un primer inmueble, a ser fondos disponibles de

ser retirados para dicha adquisición, en principio, tendrían la misma evaluación negativa respecto a su impacto en el Sistema Privado de Pensiones; sin embargo, en su oportunidad, encontraron una justificación por parte del legislador y hoy son una realidad existente en el marco normativo actual.

Por el contrario, la viabilidad y conveniencia de incorporar en el marco normativo del Sistema Privado de Pensiones la posibilidad de permitir el retiro de fondos de las cuentas individuales de capitalización para la compra de inmuebles sin ningún tipo de límite o su utilización para el pago de cualquier tipo de deudas contraídas con el sistema financiero y aumentar el porcentaje de disponibilidad de retiro de los fondos antes mencionados constituyen las propuestas que deben ser evaluadas por la Comisión para determinar si ellas encuentran justificación.

En el sentido antes expuesto, las iniciativas legislativas materia de análisis sustentan sus propuestas de ampliación de los conceptos pasibles de autorización para el retiro de fondos de las cuentas individuales de capitalización para incluir la compra de inmuebles sin ningún tipo de límite, así como su utilización para el pago de cualquier tipo de deudas contraídas en el sistema financiero, en el derecho a la vivienda que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos[75].

Sobre el particular, es menester recordar que el derecho a la seguridad social es también un derecho reconocido expresamente en la mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos; en concreto, en el artículo 22 del citado documento, el cual señala lo siguiente:

> *"**Artículo 22***
> *Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,*

[75] **Declaración Universal de los Derechos Humanos**
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
(...)

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad."

Asimismo, el derecho a la seguridad social también está reconocido expresamente en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú[76].

En efecto, el texto vigente del artículo 40 del TUO del SPP, señala expresamente la posibilidad de retirar hasta el 25% del fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios de un afiliado para:

- Pagar la cuota inicial para la compra de un primer inmueble, o
- Amortizar un crédito hipotecario, que haya sido utilizado para la compra de un primer inmueble

Como puede observarse, hoy en día, la posibilidad de atender al derecho universal a la vivienda ya está plenamente garantizado en el texto de la actual Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, en la medida que, el solo hecho de acceder a esa "primera" vivienda constituye per se la satisfacción del aludido derecho universal.

Por el contrario, de aprobarse la propuesta del proyecto de ley 3133/2022-CR para permitir la disposición de hasta el 25% del fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios de un afiliado para la compra de inmuebles sin ningún tipo de límite, se estaría afectando al afiliado en el largo plazo y generando los

---

[76] **Constitución Política del Perú**
Artículo 10.- Derecho a la Seguridad Social
El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

Artículo 11.- Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones
El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado.

Artículo 12.- Fondos de la Seguridad Social
Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.

mismos impactos negativos en la gestión de los fondos de pensiones que implican los retiros anticipados aprobados recientemente y que han sido reseñados líneas arriba en el análisis del presente proyecto de ley.

En el mismo sentido antes expuesto, la Comisión encuentra contraproducente la propuesta del proyecto de ley 4200/2022-CR y 4528/2022-CR para incrementar del 25% al 50% el límite de disposición del fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios de un afiliado para la compra un primer inmueble, en tanto dichas iniciativas legislativas no han presentado un argumento sólido que sustente la preeminencia del derecho a la vivienda sobre el derecho a la seguridad social de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones y, mucho menos, justifique derivar, en un porcentaje de tal magnitud, el uso de fondos creados y destinados para asegurar la satisfacción del último de los derechos antes mencionaos en favor del primero de ellos.

En este punto del análisis resulta importante tomar en cuenta lo que señala la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, en materia de interpretación de los derechos fundamentales:

> ***"Cuarta.- Interpretación de los derechos fundamentales***
> *Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú."*

Así pues, en atención a lo señalado en la mencionada disposición constitucional, las propuestas normativas en materia previsional no solo deben garantizar el cumplimiento de los principios de la Constitución Política sino también deben considerar el respeto de las disposiciones de los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por el Perú.

En este punto, es preciso señalar que, en materia de seguridad social y prestaciones de vejez, el Perú es suscriptor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo[77], relativo a la norma mínima de la seguridad social (Convenio 102 OIT).

[77] Convenio ratificado mediante Resolución Legislativa 13284

El mencionado convenio, del cual el Perú aceptó las partes II, III, V, VIII y IX[78] del mismo, y se acogió a las excepciones temporales[79] que figuran en los artículos 9,d); 12,2; 15,d); 18,2; 27,d); 48,c) y 55,d), establece que los Estados garantizan prestaciones de vejez.

Así lo señala su artículo 25 (incluido en la Parte V. Prestaciones de Vejez):

> *"**Artículo 25***
> *Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte."*

Así por ejemplo, en el expediente N° 0050-2004-AI, el Tribunal Constitucional señaló:

> *"97. La pensión como parte del patrimonio y no como propiedad*
> *(...) Por su naturaleza, la pensión, a diferencia de la propiedad no es un derecho real sobre un bien, sino un derecho a percibir un determinado monto de pago periódico al que se tiene acceso una vez que se han cumplido los requisitos legalmente establecidos. (...)"*

En similar sentido, en el Expediente N° 7457-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional expresó lo siguiente:

> *"18. (...) Asimismo ha puntualizado que la pensión no es un derecho real sobre un bien sino un derecho a percibir un determinado monto de pago periódico derivado del cumplimiento de requisitos legales. (...).*

---

[78] **Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)**
Parte I. Disposiciones Generales,
Parte III. Prestaciones Monetarias de Enfermedad,
Parte V. Prestaciones de Vejez,
Parte VIII. Prestaciones de Maternidad,
Parte IX. Prestaciones de Invalidez

[79] **Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)**
Artículo 3
1. Todo Miembro cuya economía y cuyos recursos médicos estén insuficientemente desarrollados podrá acogerse, mediante una declaración anexa a su ratificación -- si las autoridades competentes lo desean, y durante todo el tiempo que lo consideren necesario --, a las excepciones temporales que figuran en los artículos siguientes: 9, d); 12, 2; 15, d); 18, 2; 21, c); 27, d); 33, b) ; 34, 3; 41, d); 48, c); 55, d), y 61, d).

En el sentido antes expuesto, la Comisión considera que a la luz de la normativa específica internacional y de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza de los fondos pensionarios, se puede afirmar que el derecho a la pensión es reconocido en el Convenio 102 de la OIT, el cual ha sido ratificado y en consecuencia se encuentra reconocido como parte de la legislación nacional, por lo que, permitir que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), puedan disponer de sus fondos de pensiones de manera parcial o totalmente para fines distintos a la pensión, involucraría incumplir el convenio internacional mencionado, respecto a la garantía del otorgamiento de una prestación en la etapa de vejez, así como desconocer el carácter intangible y fin específico que revisten los fondos en mención .

En cuanto a la propuesta de habilitar la disponibilidad y retiro de hasta el 50% del fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios de un afiliado para el pago de todo tipo de deudas contraídas con el sistema financiero peruano, la Comisión encuentra que esta no supera ningún análisis de racionalidad y proporcionalidad, pues su aplicación no solo no cumpliría por si misma el fin por el que se plantea la propuesta, es decir, asegurar la satisfacción del derecho a la vivienda, sino que distorsionaría completamente la naturaleza y fin de los fondos de las Cuentas Individuales de Capitalización de aportes obligatorios, al permitir por la vía propuesta, su eventual utilización en fines para nada vinculados al aseguramiento de la seguridad social y futuras pensiones de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, como podría ser el pago de deudas por créditos de consumo.

En opinión de la Comisión, los fondos de pensiones deben cumplir la finalidad para lo cual han sido creados y garantizados, es decir deben cumplir con proteger a los afiliados del riesgo de vejez una vez llegada la etapa de jubilación en el mercado laboral y no para cubrir cualquier otro riesgo, el cual debería ser cubierto con medidas que deben crearse de manera pertinente

De lo expuesto se desprende con meridiana claridad que la iniciativa legislativa contenida en el Proyecto de Ley 4200/2022-CR contravendría lo estipulado en el artículo 12 y en la Cuarta Disposición Final de la Constitución, desnaturalizando el objetivo del sistema Privado de Pensiones, pues en la práctica lo transformaría en un Sistema Privado de Ahorros con diversas finalidades.

En efecto, si se considera la inversión que implica la adquisición de un inmueble no es una de menor envergadura sino todo lo contrario, y que parte, o la totalidad, de los fondos con las que se viabilizaría dicha adquisición corresponden a fondos que, en

principio, tienen una finalidad distinta a la adquisición de activos, pues tienen como objetivo asegurar un ingreso dinerario que asegure una vida digna para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones cuando estos ya no estén en capacidad de producirlos; resulta imperativo para el Estado y la sociedad en su conjunto garantizar que, el eventual retiro de parte de los fondos en mención corra el menor riesgo posible y sea destinado efectivamente para asegurar otro derecho sustancial del afiliado; en este caso, el derecho a la vivienda.

En el sentido antes expuesto, la compra diligente de un inmueble implica la realización de tareas previas como:

- Una indagación de mercado para obtener una valorización aproximada del inmueble (una tasación que efectúa de manera formal cualquier institución financiera que vaya a desembolsar un crédito hipotecario para la compra de un inmueble)
- Un estudio de títulos del inmueble para determinar que el mismo se encuentre saneado y libre de cualquier carga o impedimento para su enajenación.

Así pues, no obstante que el afiliado al Sistema Privado de Pensiones podría tratar de realizar dichas diligencias por su cuenta o encargándoselas a un tercero, la Comisión considera que, realizar la operación de compraventa de un inmueble con la intervención de una empresa del sistema financiero, cuando de por medio esta la utilización de fondos provenientes de la cuenta individual de capitalización del afiliado, garantiza en gran medida que este no sea estafado con inmuebles no saneados o con documentación irregular que impida la transferencia de propiedad del inmueble. Ello porque dichas entidades cuentan con profesionales asignados a las tareas específicas antes mencionadas, que aseguran la idoneidad para el encargo, así como abaratar los costos involucrados para tal fin haciendo economías de escala.

En adición a lo expuesto, ante el argumento que la facilitación de la compra al contado de un inmueble sería conveniente porque libraría al afiliado del Sistema Privado de Pensiones de los costos financieros de un crédito hipotecario, es preciso hacer hincapié en que dicho planteamiento no representa mayor ventaja, pues en el caso el afiliado no desee mantener el crédito hipotecario por los costos financieros que involucra, este tiene el derecho de pagar anticipadamente la totalidad o parte de dicho crédito sin ninguna penalidad.

Lo antes mencionado está dispuesto en el inciso 11 del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS 3274-2017, el mismo que al consignar las cláusulas abusivas que no pueden ser incorporadas en los formularios contractuales que utilicen las empresas del sistema financiero en perjuicio de sus usuarios, consigna lo siguiente:

> *"**Artículo 53. Criterios para la determinación de cláusulas abusivas en materia de tasas de interés, comisiones y gastos***
> *(...)*
> *53.2 Constituyen cláusulas abusivas que no pueden ser incorporadas en los formularios contractuales que utilicen las empresas, entre otras, las que se indican a continuación:*
> *(...)*
> *11. Las que excluyan o limiten los derechos reconocidos a los usuarios a efectuar pagos anticipados o prepagos en forma total o parcial, a oponer excepciones de incumplimiento o a imponer obstáculos o condiciones innecesarias que determine la Superintendencia de acuerdo al caso concreto, para el ejercicio de los derechos reconocidos al usuario en los contratos.*
> *(...)"*

En atención a lo antes expuesto, esta comisión considera conveniente asegurar el derecho universal a la vivienda mediante la disposición de hasta el 30% del fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones; es que la Comisión considera conveniente modificar el texto del artículo antes mencionado, para precisar en sus literales a) y b) que la adquisición del primer inmueble al que se hace referencia en ellos deberá tener la condición de urbano y tener como única finalidad la de constituirse en casa-habitación del adquiriente.

En ese sentido, las propuestas legislativas[80] que esta comisión ha considerado sostienen algunas razones válidas para aumentar al 30% el uso de fondos previsionales, por ejemplo: permite el acceso a una vivienda a los afiliados y reactiva el crédito hipotecario y la economía del país, reactiva el mercado e industria inmobiliaria en general, facilita a los afiliados acceder a una vivienda y por ende, a un activo que se

[80] Proyecto de Ley 4528/2022-CR, iniciativa de la Congresista Patricia Juárez.

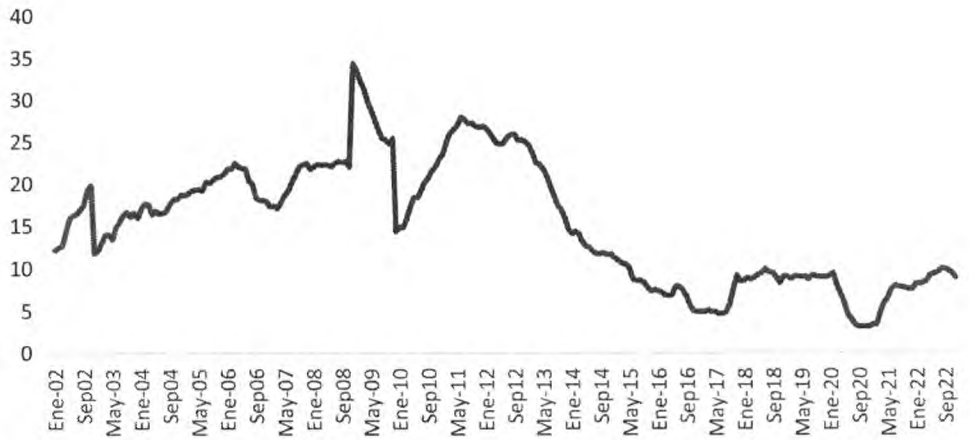
aprecia en el tiempo, reduce la morosidad de créditos hipotecarios y sobre todo, asegura al afiliado la propiedad de un bien inmueble.

Aunado a ello, la comisión considera importante señalar que, si bien el crédito hipotecario permite acceder a tener la oportunidad de ser propietario de un bien inmueble a un peruano, cabe la posibilidad de que la persona obligada no cuente, por cualquiera que fuera la circunstancia, con el poder de pago y pierda la propiedad en favor de la empresa financiera que ejecutará el crédito y obtendrá el bien inmueble sin perjuicio de todo lo aportado por la persona hasta el momento de la ejecución de la garantía hipotecaria.

Asimismo, el financiamiento para adquirir una vivienda impulsa el sector de construcción, ya que estimula el crecimiento y alimenta a otros sectores económicos, como los emprendedores ferreteros, metalúrgicos, entre otros, los mismos que se verán beneficiados con la construcción de viviendas.

Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, las tasas de crecimiento del crédito hipotecario tienen una alta correlación con el desempeño de la economía en los últimos 20 años. En el Grafico 1, se desprende que el crédito hipotecario, del 2002 al 2008, tuvo un crecimiento sostenido y al igual que toda la economía, fue duramente afectada con la crisis financiera el 2009, recuperándose el 2010 al 2012, y después del 2012 presenta menores tasas de crecimiento hasta el 2019; el 2020 tuvo una caída sustancial por la pandemia recuperándose el 2021; y el 2022 presenta una menor tasa de crecimiento por la incertidumbre política del 2022.

Tasa de Crecimiento Anual de los Créditos Hipotecarios 2002 – 2022



Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Cuadro extraído: Congresista Patricia Juárez - Proyecto de Ley 4528/2022-CR
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN00538MM/html

Según lo señalado y considerando la tendencia a la baja para finales del año 2022, la propuesta de los legisladores que han presentado propuestas referentes a la materia y la comisión, recoger esta medida podrá darle un impulso al acceso y por ende, al pago o cancelación de un crédito hipotecario.

Adicionalmente, consideramos que la presente propuesta beneficiará a afiliados que carecen de vivienda o tienen deudas hipotecarias, ya que la medida vigente ha generado que muchos peruanos hagan uso del 25% de los fondos para el pago de crédito hipotecario, por lo que esto resulta ser una muestra de las necesidades que tienen los peruanos para pagar sus créditos y cumplir con sus obligaciones. Según cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Asociación de Bancos del Perún ASBANC) son 114 mil afiliados que han usado sus fondos de AFPs para la compra de un primer inmueble.

En el Proyecto de Ley 4528/2022-CR se hace un breve análisis respecto a los retiros del 25% con la finalidad de comprar el primer inmueble:

> *"Como se puede observar en el Cuadro 1, al 31 de diciembre del 2022, son 114 mil afiliados que retiraron hasta el 25% de su Cuenta Individual de Capitalización*

para la compra de un primer inmueble, con un monto acumulado de 3,418 millones.

Del total, 73,707 afiliados (el 64%) lo usaron para la amortización de crédito hipotecario por un monto acumulado de 2,470 millones de soles (el 72% del monto total) y 41,013 afiliados (el 36%) lo usaron para el pago de la cuota inicial de crédito hipotecario, por un monto acumulado de 948 millones de soles (el 28% del monto total)[81]."

Número de Afiliados y montos que retiraron hasta el 25% de su Cuenta Individual de Capitalización para la compra de Primer Inmueble según AFP y Finalidad

AFP / Finalidad del Retiro	Afiliados	Part. por AFP (%)	Monto Total Millones	Monto Total %
Habitat	**7 723**	**6.7%**	**211**	**6.2%**
Amortización de crédito hipotecario	3 458		129	
Cuota Inicial de crédito hipotecario	4 265		82	
Integra	**39 592**	**34.5%**	**1 160**	**34.0%**
Amortización de crédito hipotecario	25 906		831	
Cuota Inicial de crédito hipotecario	13 686		330	
Prima	**41 795**	**36.4%**	**1 252**	**36.6%**
Amortización de crédito hipotecario	27 474		933	
Cuota Inicial de crédito hipotecario	14 321		319	
Profuturo	**25 610**	**22.3%**	**794**	**23.2%**
Amortización de crédito hipotecario	16 869		577	
Cuota Inicial de crédito hipotecario	8 741		218	
Total Sistema Privado de Pensiones SPP	**114 720**	**100%**	**3 418**	**100%**
Amortización de crédito hipotecario	73 707	64.2%	2 470	72.3%
Cuota Inicial de crédito hipotecario	41 013	35.8%	948	27.7%

Fuente: SBS, ASBANC. Elaboración: Proyecto de Ley 4528/2022-CR

Dicho esto, esta comisión considera relevante mencionar que en su propuesta de Texto Sustitutorio contempla que se pueda disponer de hasta 30% del fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización Acumulativa (CICA) de cada aportante, pues se

[81] Análisis extraído del Proyecto de Ley 4528/2022-CR

considera que al ampliar el porcentaje con la finalidad que los afiliados tengan la posibilidad de amortizar su crédito hipotecario, no sólo será de gran ayuda para el afiliado, sino que también logrará que el sector inmobiliario siga en crecimiento y por ende, los emprendedores, mypes y pymes también continúen expandiendo sus negocios, así como también, logrará que más personas logren cumplir con sus obligaciones.

VIII. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

El análisis situacional del sistema previsional en el Perú llevado a cabo infiere que si bien la creación del SNP fue necesaria y adecuada para el momento que vivía el país en aquel momento; las condiciones a largo plazo han cambiado y se debe evitar que el sistema colapse. En ese contexto se dio paso al SPP, con la finalidad de dar un respiro al SNP. Sin perjuicio de los aspectos positivos que inicialmente trajo consigo la implementación del SPP, vemos actualmente que el problema de fondo no ha sido solucionado.

En este contexto, el presente dictamen presente una serie de medidas para la mejora del SNP, el objetivo es contribuir a obtener una pensión digna que permita a las personas continuar con bienestar al llegar a la vejez. Las propuestas incluidas son las siguientes:

Pensión por consumo

Esta iniciativa permitirá que, por cada adquisición de bienes o servicios, realizada por el consumidor final que exija comprobante de pago electrónico, se destinen tres puntos porcentuales del IGV pagado en cada compra para su Cuenta Individual de Capitalización Acumulativa (CICA). En esta cuenta se irá acumulando un fondo en función de las compras que la persona realice a lo largo de su vida, fondo que también deberá generar una rentabilidad.

El Impuesto General a las Ventas es un impuesto que pagamos todos los ciudadanos al realizar una adquisición y se cobra en la compra final del bien o servicio. La tasa es del 18%; sin embargo, se aplica el 16% al IGV y un 2% al Impuesto de Promoción Municipal. El IGV grava la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos y la importación de bienes, según lo indica el

artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

El monto propuesto se añadirá a los aportes obligatorios o voluntarios que el afiliado pueda realizar, de manera que al cumplir los 65 años el fondo global pueda ser mayor para el cálculo de su pensión. La CICA es una cuenta que se apertura a partir de los 18 años, es decir, las personas tendrán la capacidad de ahorrar bajo este mecanismo desde esa edad hasta la edad de jubilación o puede decidir continuar actualizando sus fondos después de la jubilación con la continuidad de sus adquisiciones.

A medida que se incrementan los años, se incrementa la probabilidad de generar mayores ingresos y por ende mayor ahorro bajo esta medida. Sin embargo, también es válido mencionar que las personas con mayores ingresos tienen mayor capacidad de compra que los más pobres, es por ello que el dictamen contempla un límite mensual equivalente a una canasta básica de consumo determinada por el INEI como tope de ahorro por los tres puntos porcentuales de IGV.

Asimismo, el límite total de lo acumulado a lo largo de la vida del afiliado por la fuente referida asciende al valor que asegure una pensión equivalente al valor de una canasta básica mensual al momento de su jubilación. Es decir, para asegurar el correcto uso de los recursos públicos se han implementado dos límites, uno mensual y otro a lo largo de la vida de las personas. Finalmente, dado que es altamente probable que un gran número de personas exceda estos topes, el excedente de los aportes efectuados por cada afiliado como aportes complementarios serán destinados para el Fondo Solidario de Pensiones (FONSOL).

Evidentemente, el principal beneficio para los ciudadanos es que al contar con una pensión podrán gozar de una vejez digna y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Asimismo, los incentivos que se generarían como parte del extremo de esta propuesta ayudarían a generar formalidad en la economía debido a que todos los ciudadanos buscarán solicitar un comprobante con su número de DNI de manera que la devolución del IGV se acumule en su CICA.

Debido a la amplia cobertura de bienes y servicios sobre los que se puede gravar el IGV y que el hacerlo implica impulsar la formalización, es importante que pueda incorporarse como parte de los aportes complementarios del aportante. De igual modo, al incrementarse la recaudación tributaria, el ciudadano podrá disfrutar de mejores servicios públicos debido a que el Estado contará con mayores recursos.

En los últimos cinco años la recaudación por IGV como porcentaje del total de ingresos tributarios (internos y aduaneros) recaudados por la SUNAT ascendió a 43%. Al cierre del 2022 la recaudación por IGV ascendió a S/ 88 304 millones, tomando en consideración este monto, se estima que tres puntos del IGV considerado por el presente dictamen para transferencia a las CICAs ascendería a S/ 14 717 millones. Según información del Marco Macroeconómico Multianual 2023 - 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas, la proyección del crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno General es de 5,9% anual en promedio; asimismo, el IGV se proyecta con un crecimiento de 6% anual.

Adicionalmente a lo antes mencionado, es importante señalar que respecto a la transferencia del IGV como forma de aporte a la cuenta de cada afiliado, existe un consenso de todos los actores, así como también, existen varias propuestas legislativas respecto a la materia, por lo cual consideramos que, es necesario acoger esta propuesta en aras de universalizar las pensiones y fomentar la formalización, entendiendo que en el Perú existe una gran cantidad de personas que no se encuentran dentro del sistema de pensiones peruano y tampoco, son formales.

En lo referido a SUNAT, esta institución se ve beneficiada con esta propuesta ya que el incentivo descrito estimulará la inserción de más contribuyentes en las operaciones formales mediante los sistemas de emisión electrónica con lo cual se incrementará la base tributaria y, a la vez, se optimizarán los sistemas de control de obligaciones tributarias debido a que el uso del sistema electrónico permite mejorar y facilitar los procesos de fiscalización y control en tiempo real.

Asimismo, los miles de consumidores que exigirán el comprobante de pago para insertarse al sistema propuesto, harán las veces de "auditores" ya que solicitarán constantemente que se les entregue un comprobante de pago. Si bien en un primer momento se formalizarán las compras realizadas por el consumidor final, éste será el inicio de una cadena virtuosa que llevará a formalizar la cadena productiva en su totalidad.

El porcentaje de evasión en el pago del IGV publicado por SUNAT fue de 36% al 2018, porcentaje que como se señala, se estima vaya disminuyendo a razón de 2 puntos porcentuales por año, hasta llegar a estabilizarse en 20%. En este orden de ideas, se ha efectuado el siguiente análisis para hacer una estimación del beneficio por reducción de la evasión. Según datos de SUNAT al 2018 la recaudación del IGV en el sector

comercio, sector principal al cual está dirigido la propuesta, ascendió a SI 1800 millones al año. Entonces, si consideramos que existe un 36% de evasión, y que la presente propuesta busca reducirla gradualmente a razón de 2 puntos porcentuales por año aproximadamente hasta estabilizarse en 20%, tenemos que el monto a recaudar bajo este supuesto sería de S/ 1480 millones. Lo antes señalado puede ser observado en la siguiente tabla.

Cálculo estimado de reducción de evasión del IGV

Descripción	Monto
Ingresos recaudados IGV sector comercio 2018 S/	1,877,174,438
Evasión IGV (36.3%) S/	1,069,724,209
Propuesta plantea reducir evasión a 20% S/	589,379,729

Fuente: Proyecto de Ley 344/2021-CR

Asimismo, se ha estimado que la norma tendría un impacto secundario en la reducción de la evasión del Impuesto a la Renta por el entorno favorable a la formalización que se creará como consecuencia de la implementación de la propuesta. Según data de la SUNAT, los ingresos recaudados por renta de tercera categoría vinculados al sector comercio minorista ascienden a S/ 1650 millones al año. Por lo tanto, en un escenario en el cual la evasión se reduzca a 50% (en el 2018 fue 57,3%) la recaudación ascendería a S/ 111 millones.

Cálculo estimado de reducción de evasión del Impuesto a la Renta

Descripción	Monto
Ingresos recaudados IR 3ra categoría 2018 S/	650,610,673
Evasión IR (57.3%) S/	873,067,718
Propuesta plantea reducir evasión a 50% S/	761,839,196

Fuente: Proyecto de Ley 344/2021-CR

Bajo los supuestos mencionados, el Proyecto de Ley citado determina que el fisco tendría un beneficio total de la reducción en la evasión del pago del IGV de S/ 480 millones anuales aproximadamente cuando se logre bajar la evasión tributaria por IGV en 16 puntos porcentuales.

En lo correspondiente al Impuesto a la Renta, en un escenario donde la evasión se reduzca en 7 puntos porcentuales, se lograría recaudar S/ 111 millones. Es importante señalar que este monto solo corresponde a la evasión en el sector comercio minorista.

Se estima que los otros sectores económicos también serán formalizados con lo cual el incremento en recaudación será mayor como consecuencia del efecto positivo de esta norma. No menos importante es considerar el incremento de la recaudación producto del cumplimiento de otras obligaciones tributarias. Finalmente, el incentivo propuesto por este dictamen coadyuva al fortalecimiento de la estrategia de transformación digital de la SUNAT y masificación del uso de comprobante electrónico.

Gracias a la iniciativa propuesta, se incentivaría una cultura de ahorro en la población, otorgando un beneficio monetario que complementará a los actuales sistemas previsionales con todas sus deficiencias. Asimismo, generará un incremento en el cumplimiento de obligaciones tributarias formales y por ende se permitirá la incorporación de más contribuyentes a la formalidad.

De igual modo, a medida que se masifique el uso del sistema de emisión electrónica, se contará con información tributaria actualizada y en tiempo real, lo cual permitirá una mejora en la toma de decisiones y diseño de políticas públicas. El incremento en la recaudación permitirá al Estado contar con mayores recursos para proveer servicios públicos de calidad. Asimismo, la productividad nacional se verá beneficiada a través de la creación de puestos de trabajo formales los cuales se generarán como consecuencia del entorno formal que se creará a través de la formalización del consumo final.

Mediante el sistema propuesto, se estima un incremento importante en la recaudación tributaria a través de una reducción en la evasión en el pago del IGV de 36% a 20%, lo cual significará un aumento en la recaudación fiscal de SI 480 millones. De la misma manera, se estima una reducción en la evasión del pago del Impuesto a la Renta de tercera categoría de 57% a 50%, con lo cual se calcula un aumento en la recaudación de SI 111 millones.

De lo anterior se obtiene un total de S/ 591 millones de soles anuales. Esto se lograría ya que el acceso al beneficio propuesto está sujeto a que los ciudadanos efectúen compras formales. Es importante mencionar que también se reducirá la informalidad por impuesto a la renta y otras obligaciones tributarias que tendrán que ser cumplidas en un entorno favorable para la economía formal. Por tanto, existirán más recursos para el fisco que podrán ser destinados a la provisión de mejores servicios públicos.

Cuentas de capitalización individuales en la ONP

Los aportantes del Sistema Público, que son el principal sostén que mantiene el sistema de reparto, continúan disminuyendo. En el Perú hace dos años por pensionista había 2,8 aportantes, esta cifra se reduciría con el envejecimiento de la población y se espera que esa proporción caiga a 0,5 para el 2055. Consecuentemente, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), actualmente opera con un fuerte déficit financiero y requiere transferencias anuales del Estado equivalentes al 0,2% del PBI para completar el pago a sus pensionistas. Es decir, el Estado ha destinado entre el 2011 y 2021 S/ 3,140 millones en promedio por cada año para financiar las pensiones de la ONP

Este déficit fiscal será mucho mayor en la medida que los aportantes al SNP continúen descendiendo. En esa misma línea, de acuerdo a lo informado por lo Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado gasta en pensiones más de 11 mil millones de soles al año, en promedio, entre los cuatro subsistemas contributivos (Decreto Ley 19990, Decreto Ley 20530, Decreto Legislativo 1133 y la Caja Militar Policial). De igual manera, al SPP para pagar Bonos de Reconocimiento, Bonos Complementarios y Pensiones Mínimas.

El costo de mantener la ONP con el actual sistema de reparto, en que el aporte de sus afiliados se destina a un fondo común que financia las pensiones de los actuales jubilados, no es financieramente sostenible. Por tanto, de no migrar a un sistema de cuentas individuales de ahorro previsional en el SNP, el costo continuará con una clara tendencia creciente a partir del 2040, el cual aumentaría de, aproximadamente, 0,6% del PBI en el 2040 a 1,2% del PBI en el 2063, requiriendo mayores transferencias por parte del Estado. Además, considerando la pensión nula de miles de jubilados, la pensión promedio de los futuros jubilados sería de mucho menor a la que están recibiendo los actuales pensionistas a cargo de la ONP.

Contribución de microempresas e independientes

El presente dictamen propone que los empleadores y empleados de las microempresas así como los trabajadores independientes contribuyan para sus pensiones. En ambos casos estas normativas han existido en nuestro país, en el caso de las microempresas el Decreto Legislativo 1086 no había sido reglamentado por lo que la norma no se aplicaba y en el caso de los independientes la Ley 30082 fue derogada el 2014. Esta última no consideraba una amplia gradualidad en la aplicación, así como tampoco una diferenciación por ingresos lo cual dificulta el cumplimiento de la norma mencionada.

En ese sentido, la aplicación de esta propuesta permitiría que los empleadores y empleados de las microempresas así como los trabajadores independientes puedan afiliarse y contribuir al ahorro para sus pensiones futuras. De esta manera la posibilidad de que el Estado a mediano y largo plazo tenga que cargar con el costo de una pensión no contributiva se reduce. Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá determinar otros incentivos convenientes para seguir incorporando más contribuyentes y aportes al SNP.

Fondo Solidario de Pensiones (FONSOL)

El IGV es un impuesto es plurifásico, ya que el mismo se aplica a prácticamente todas las etapas del ciclo productivo y distribuir, ya que se aplica a quien produce un bien en el Perú o a quien importa el mismo bien hasta el consumidor final, quien es quien soporta la carga del impuesto.

Como parte del dictamen se propone destinar un punto porcentual del IGV pagado por las personas jurídicas para parte del financiamiento del FONSOL, ello permitirá el financiamiento del pago de las pensiones mínimas en el futuro. Asimismo es importante recalcar que este monto no será la única fuente de recursos, el Poder Ejecutivo podrá destinar otros recursos para dichos fines.

Dicho esto, son muchos los beneficios que tendrán la sociedad y las empresas y el Estado peruano con la aplicación del Fondo Solidario (FONSOL):

- Impulsa la formalización, ya que los aportantes tendrán incentivos a consumir, teniendo en cuenta que el 1% del total de los impuestos recaudados por las empresas, serán parte del fondo que, finalmente cubrirá pensiones de los ciudadanos que no llegan a una pensión mínima.

- Fortalece el perfil solidario de las empresas y del Estado, en el sentido que ambos podrán contribuir al retiro de las personas que cumplan con las características de la presente Dictamen.
- Aunado al punto anterior, se logra el objetivo principal de la reforma de pensiones, el mismo que es la universalización de las mismas, ya que, como se dijo en líneas anteriores, serán más personas que gocen de una pensión cuando se llegue a la edad de retiro.
- Se fortalecería la economía peruana al largo plazo, ya que el Estado no tendrá que asumir los gastos de salud, alimentación, entre otros; de una persona que no cuente con una pensión, ya que en la actualidad el Estado carga con los peruanos que no tienen acceso a la misma.

IX. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera recomienda, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la República, la **APROBACIÓN** de los Proyectos de Ley 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, con el siguiente texto sustitutorio:

El Congreso de la República,

Ha dado la Ley siguiente:

FORMULA LEGAL

LEY DE REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Principios rectores de la reforma del Sistema Previsional Peruano

Son principios rectores de la reforma del Sistema Previsional Peruano, los siguientes:

a) **Universalidad:** todas las personas, sin ninguna distinción, tienen derecho a recibir una cobertura previsional siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

b) **Progresividad:** el derecho a la pensión debe otorgarse de manera progresiva, en función de los recursos disponibles.

c) **Sostenibilidad:** el Sistema Previsional Peruano debe contar con los recursos económicos, financieros y fiscales que garanticen su permanencia en el tiempo solventando los gastos que generen el pago de las pensiones y la gestión de los fondos previsionales.

d) **Intangibilidad:** los recursos y fondos del Sistema Previsional Peruano se utilizan únicamente para el pago de pensiones.

e) **Eficiencia:** la administración y gestión de los fondos previsionales se efectúa procurando obtener los mejores resultados económicos, cautelando el mayor rendimiento financiero y el menor costo posible.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto efectuar modificaciones en los sistemas público y privado de pensiones, así como incorporar un régimen de aportes complementarios a aquellos aportes obligatorios dispuestos en dichos sistemas y establecer un fondo de cobertura para garantizar el pago de una pensión mínima a sus afiliados.

Artículo 2. Finalidad de la Ley

La presente ley tiene por finalidad lograr que sus beneficiarios accedan progresivamente a una pensión digna y justa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3. Beneficiarios de la Ley

Las disposiciones contenidas en la presente ley se aplican a todas las personas mayores de edad, afiliadas o no al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP), siempre que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en estas.

Artículo 4. Personas Jurídicas Gestoras de Fondos Previsionales en el Sistema Previsional Peruano

Las Personas Jurídicas Gestoras de Fondos Previsionales en el Sistema Previsional Peruano son las siguientes:

a) En el Sistema Privado de Pensiones: las Gestoras de Fondos Previsionales (GFP) a que se hace referencia en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF
b) En el Sistema Nacional de Pensiones: la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

CAPÍTULO II

CUENTA INDIVIDUAL DE CAPITALIZACIÓN ACUMULATIVA

Artículo 5. Creación de la cuenta individual de capitalización acumulativa

Se crea la cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA) en favor de todos los peruanos mayores de edad afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

La generación de la CICA de cada ciudadano se produce con la afiliación de este a una Gestora de Fondos Previsionales, pública o privada, mediante el procedimiento descrito en el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF.

Artículo 6. Características de la cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA)

La cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA) tiene las mismas características que las ofrecidas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) del Sistema Privado de Pensiones, conforme lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF, su reglamento y normas modificatorias.

Artículo 7. Adecuación de la cuenta individual de capitalización (CIC)

La cuenta individual de capitalización (CIC) a que se hace referencia en el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF, su reglamento y normas modificatorias, adquiere la naturaleza y nombre de la cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA).

CAPÍTULO III

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

Artículo 8. Modificación del Sistema Nacional de Pensiones

Se modifica el Sistema Nacional de Pensiones mediante la sustitución del régimen de reparto por un régimen de asignación de cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) de sus afiliados.

Artículo 9. Características de la cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA) del Sistema Nacional de Pensiones

La cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA) del Sistema Nacional de Pensiones tiene las mismas características que las ofrecidas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) del Sistema Privado de Pensiones, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF, su reglamento y normas modificatorias.

Artículo 10. Emisión de las cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) en el Sistema Nacional de Pensiones

10.1. A partir de la vigencia de la presente ley, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) emite cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) a sus nuevos afiliados, en las cuales se registran sus aportes y la rentabilidad acumulados.

10.2. Para los afiliados a los regímenes previsionales administrados por la ONP existentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley, dicha entidad abre una cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA), que comprende el total de sus aportes desde su incorporación a los regímenes antes mencionados con un monto límite definido por el Ministerio de Economía y Finanzas. La forma, plazo y otras condiciones de su implementación se establecen en el reglamento de la presente ley.

10.3. Los afiliados a los regímenes previsionales referidos en el numeral 10.2 que hayan adquirido la condición de pensionistas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continúan percibiendo sus pensiones conforme a lo establecido en dichos regímenes en la oportunidad en la que adquirieron tal condición. El monto de dichas pensiones se actualiza en función a la inflación anualizada sin perjuicio de los incrementos en las mismas que el Poder Ejecutivo determine en su oportunidad.

Artículo 11. Composición y tratamiento de las cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) en el Sistema Nacional de Pensiones

A las cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) en el Sistema Nacional de Pensiones les resultan aplicables, en lo que fuera pertinente, las disposiciones establecidas para las cuentas individuales de capitalización acumulativa del Sistema Privado de Pensiones en los capítulos II y IV del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF.

Artículo 12. Capitalización y rentabilidad de las cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) en el Sistema Nacional de Pensiones

12.1. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es responsable de capitalizar y rentabilizar las cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, procurando la eficiencia en el manejo de los fondos administrados a través del mayor rendimiento financiero de los mismos al menor costo posible.

Para tal efecto consideran los siguientes criterios:

a) La seguridad de su valor real

b) La garantía del equilibrio financiero del Sistema

c) La mayor rentabilidad posible

d) La liquidez

e) La contribución al desarrollo socioeconómico del país

12.2. Los fondos de las cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones son invertidos de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF.

Artículo 13. Tratamiento del aporte de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, trabajadores independientes y de las personas que no tengan la condición de trabajadores dependientes o independientes

Para el tratamiento de los aportes en el Sistema Nacional de Pensiones de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, de los trabajadores independientes y de las personas que no tengan la condición de trabajadores dependientes o independientes, se aplican las disposiciones que, para tal efecto, se establecen en los artículos 33, 33-A y 33-B del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF.

Artículo 14. Sujeción de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) al Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Oficina de Normalización Previsional ONP, en su condición de administrador de cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) del Sistema Nacional de Pensiones, se sujeta a las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF, que le fueran aplicables y en las normas reglamentarias que imparta la SBS en materia de actividades y procesos operativos que lleven a cabo, con miras al cumplimiento de su objeto social.

CAPÍTULO IV

AMPLIACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

Artículo 15. Participación de empresas de operaciones múltiples (EOM) y empresas de seguros en el Sistema Privado de Pensiones

Se autoriza la participación de las empresas de operaciones múltiples (EOM) y empresas de seguros, referidas en la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a participar en el Sistema Previsional Peruano como Gestoras de Fondos Previsionales, con el objeto de ofrecer cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA) a los beneficiarios. Para tal fin deben cumplir con las disposiciones contenidas en el Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF, y las disposiciones normativas que sobre la materia emita la SBS.

Artículo 16. Constitución de patrimonios independientes

Los fondos previsionales administrados por las Gestoras de Fondos Previsionales a que se hace referencia en el artículo 15 se constituyen en un patrimonio independiente y distinto al patrimonio de dichas empresas, las cuales están obligadas a llevar una contabilidad por separado de dichos fondos para garantizar que, en caso de insolvencia o quiebra, los afiliados mantengan el íntegro de sus cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA).

Artículo 17. Control y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Los fondos previsionales que administran las Gestoras de Fondos Previsionales se incorporan al control y la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

CAPÍTULO V

RÉGIMEN DE APORTES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

Artículo 18. Creación del Régimen de Aportes Complementarios del Sistema Previsional Peruano

Se crea el Régimen de Aportes Complementarios del Sistema Previsional Peruano para fortalecer en forma única y exclusiva el pago de pensiones.

Artículo 19. Creación de la Cuenta de Aportes Complementarios con Fin Previsional

Se crea la Cuenta de Aportes Complementarios con Fin Previsional como parte de la cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA) en favor de todos los peruanos mayores de edad, afiliados a cualquiera de los sistemas previsionales vigentes, la cual incorpora aportes complementarios a aquellos obligatorios y voluntarios dispuestos en dichos sistemas previsionales.

Artículo 20. Monto del Aporte Complementario con Fin Previsional de la Cuenta Individual de Capitalización Acumulativa

20.1. Se destina automáticamente como Aporte Complementario con Fin Previsional el importe equivalente a tres puntos porcentuales del impuesto general a las ventas (IGV) de todas las adquisiciones que realice el beneficiario con su documento nacional de identidad (DNI).

20.2. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo 20.1, se destina a la Cuenta de Aportes Complementarios con Fin Previsional los copagos del Estado a los que se hace referencia en los artículos 33, 33-A y 33-B del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo 054-97-EF, así como las demás transferencias que, con fines previsionales, el Estado pueda destinar a favor de sus beneficiarios

Artículo 21. Registro de aportes complementarios

21.1. Los montos a los que se refiere el artículo 20 deben ser registrados y consignados en la cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA) como un aporte complementario y adicional al fondo previsional que posea el afiliado en el sistema previsional público o privado. Todas las personas mayores de edad son beneficiarias de esta medida de manera automática.

21.2. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) establece y ejecuta los procedimientos y mecanismos electrónicos que faciliten el registro y la consignación de los importes que ingresan a las cuentas de aportes complementarios con fin previsional.

Artículo 22. Gradualidad y periodo de adecuación

La aplicación del porcentaje del IGV destinado a los aportes complementarios con fin previsional de la Cuenta Individual de Capitalización Acumulativa se hace efectiva de forma gradual en el tiempo. Para tal fin, el primer año de aplicación de la ley se destina 0.5 puntos porcentuales del impuesto general a las ventas (IGV), incrementándose en 0.5 puntos porcentuales por año hasta llegar a los tres puntos porcentuales establecidos en el párrafo 20.1 del artículo 20.

Artículo 23. Intangibilidad del aporte complementario

Los aportes complementarios con fin previsional realizados en la Cuenta Individual de Capitalización Acumulativa son intangibles. Estos y su realización no pueden ser objeto de descuento, embargo, retención, compensación contractual o legal o cualquier afectación por orden administrativa o judicial.

Artículo 24. Aportes complementarios posteriores a la jubilación

24.1. El afiliado que alcance la condición de jubilado y obtenga una pensión puede incorporar aportes complementarios a su cuenta individual de capitalización acumulativa. Los aportes adicionales incorporados son rentabilizados por la Gestora de Fondos Previsionales pública o privada correspondiente.

24.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10.3, a los pensionistas a los que se alude en el mismo les resulta aplicable lo dispuesto en el párrafo 24.1. Para tal efecto deben designar la Gestora de Fondos Previsionales pública o privada que administre la Cuenta de Aportes Complementarios con Fin Previsional que le corresponda.

Artículo 25. Límite del aporte complementario

25.1. Los aportes complementarios acumulados realizados por los afiliados en sus cuentas individuales de capitalización acumulativa que tengan como origen los tres puntos porcentuales del impuesto general a las ventas (IGV) de todas las adquisiciones realizadas tienen un límite mensual equivalente a una canasta básica de consumo determinada por el INEI.

25.2. El límite total de lo acumulado a lo largo de la vida del afiliado por la fuente referida en el párrafo 25.1 asciende al valor que asegure una pensión equivalente al costo de una canasta básica mensual al momento de su jubilación.

25.3. El excedente de los aportes efectuados por cada afiliado como aportes complementarios a los que se refiere el párrafo 20.1 es destinado al Fondo Solidario de Pensiones (Fonsol).

Artículo 26. Administración de aportes complementarios en cuentas individuales de capitalización acumulativa vigentes a la entrada en vigencia de la ley

La administración de las cuentas individuales de aportes complementarios con fin previsional de las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya se encuentran afiliadas a algún sistema previsional corresponde a la Gestora de Fondos Previsionales público o privada a la que estos se encuentren afiliados.

Artículo 27. Limitaciones en el empleo de los puntos porcentuales del IGV

27.1. Los aportes complementarios con fin previsional que posea el afiliado en el sistema previsional público o privado, originados por la aplicación de los puntos porcentuales del IGV a los que se refiere el párrafo 20.1 del artículo 20, no pueden ser deducidos para la determinación del Impuesto a la renta de personas naturales.

27.2. Los aportes complementarios con fin previsional que posea el afiliado en el sistema previsional público o privado, originados por la aplicación de los puntos porcentuales del IGV a los que se refiere el párrafo 20.1 del artículo 20, no pueden ser empleados simultáneamente como crédito fiscal del IGV por parte de algún contribuyente.

27.3. La SUNAT es responsable de la verificación y correcta aplicación de lo dispuesto en los párrafos 27.1 y 27.2.

Artículo 28. Pérdida de beneficios por retiro anticipado de fondos

Cualquier retiro de aportes con fin previsional provenientes de la Cuenta Individual de Capitalización Acumulativa antes de la jubilación, a excepción de los establecidos en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF, implica la pérdida de todo beneficio de los aportes complementarios con fin previsional realizados por el Estado, así como cualquier otra prestación o bonificación que este destine como incentivo a la jubilación, tuvieran o estuvieran por alcanzar.

CAPÍTULO VI

FONDO SOLIDARIO DE PENSIONES

Artículo 29. Creación del Fondo Solidario de Pensiones

Se crea el Fondo Solidario de Pensiones (Fonsol), administrado por del Estado, con la finalidad de coadyuvar a la obtención de una pensión mínima de aportantes (PMA) a los sistemas de pensiones público o privado.

Artículo 30. Composición del Fondo Solidario de Pensiones

El fondo solidario de pensiones (Fonsol) está conformado por:

a) Los ingresos correspondientes a un punto porcentual del impuesto general a las ventas (IGV) pagados por las personas jurídicas
b) El excedente de los aportes efectuados por concepto de aporte complementario de cada afiliado a que se refiere el artículo 25
c) Los aportes que por cualquier concepto reciba el Fonsol de forma voluntaria
d) Los demás aportes que el Estado establezca mediante ley

e) La rentabilidad obtenida por la inversión de los recursos a que se hace referencia en los literales a), b), c) y d)

Artículo 31. Exclusividad del Fondo Solidario de Pensiones

31.1. El fondo solidario de pensiones (Fonsol) se destina exclusivamente para completar, cuando corresponda, el saldo necesario para la obtención de la pensión mínima de aportantes (PMA) de los afiliados de los sistemas de pensiones público o privado que cumplan con los requisitos de la presente ley.

31.2. El fondo solidario de pensiones (Fonsol) no puede ser utilizado para financiar los programas "Pensión 65", "Contigo" ni cualquier otro programa social creado o por crearse.

CAPÍTULO VII

PENSIÓN MÍNIMA EN EL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

Artículo 32. Pensión Mínima para Aportantes

Se crea la Pensión Mínima para Aportantes (PMA) del Sistema Previsional Peruano, la cual aplica independientemente del sistema previsional al que pertenezca el aportante.

Artículo 33. Beneficiarios de la Pensión Mínima para Aportantes

33.1. Tienen derecho a percibir la pensión mínima para aportantes (PMA) todos los asegurados a un sistema previsional, en edad de jubilación, que acrediten como mínimo 240 aportes obligatorios o voluntarios con fin provisional y no realicen retiros de los mismos a partir de la vigencia de la presente ley.

33.2. Cada unidad de aporte obligatorio o voluntario previsional mínimo, para los efectos de la suma de los 240 aportes a los que se refiere el párrafo 33.1, se establece teniendo como base de cálculo el monto de la Remuneración Mínima Vital. Los

demás requisitos para acogerse a la pensión mínima para aportantes (PMA) se determinan mediante el reglamento

33.3. Los afiliados a un sistema previsional que no alcancen a acreditar el mínimo de 240 aportes obligatorios o voluntarios tienen derecho a recibir una pensión escalonada equivalente a una fracción proporcional de la pensión mínima para aportantes o a la devolución de los aportes efectuados y la rentabilidad generada por los mismos.

Artículo 34. Aportes y determinación del cálculo de la Pensión Mínima para aportantes

34.1 La pensión mínima para aportantes (PMA) está compuesta por los aportes obligatorios, voluntarios con fin previsional y complementarios acumulados del afiliado, el monto correspondiente a los aportes de carácter complementario a que se hace referencia en el capítulo V, así como la rentabilidad generada por los mismos.

34.2 El Poder Ejecutivo determina el monto de la pensión mínima para aportantes (PMA) así como los ajustes anuales respectivos, de corresponder.

34.3 Las Gestoras de Fondos Previsionales, públicas y privadas, están obligadas a proporcionar a sus afiliados información sobre los valores que estos deben aportar para lograr una pensión objetivo mínima.

Artículo 35. Subsidiariedad del Fonsol

En el supuesto de que el afiliado a un sistema previsional, cumpliendo los requisitos del artículo 33, no alcance el monto necesario para la obtención de la pensión mínima para aportantes (PMA), se autoriza el uso del fondo solidario de pensiones (Fonsol) para completar la aludida pensión.

Artículo 36. Pensión para población vulnerable

36.1 Son sujetos de la pensión para población vulnerable los mayores de 65 años que se encuentren en pobreza y extrema pobreza, así como las personas con

discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema correspondientes a los programas "Pensión 65" y "Contigo".

36.2 No pueden ser beneficiarios de la pensión para población vulnerable los sujetos a los que se hace referencia en el artículo 33.

36.3. La pensión para población vulnerable no puede ser menor al costo de la canasta básica mínima determinada por el INEI.

CAPÍTULO VIII

TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN EL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

Artículo 37. Inafectación de impuestos al patrimonio y operaciones de la CICA

El patrimonio que integra las cuentas individuales de capitalización acumulativas (CICA) y las operaciones que se realicen con cargo a las mismas se encuentran inafectas al pago de todo tributo.

Artículo 38. Inafectación del impuesto a la renta

Los dividendos, los intereses, comisiones y ganancias de capital percibidas en función del fondo que genere cada cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA) se encuentran inafectas al impuesto a la renta (IR).

CAPÍTULO IX

PROMOCIÓN DE LA CULTURA PREVISIONAL

Artículo 39. Promoción de la Cultura previsional en el currículo educativo

El Ministerio de Educación (Minedu), con la colaboración y participación del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de

Fondos de Pensiones, así como de las gestoras de fondos previsionales, fomenta y orienta el desarrollo de la cultura previsional entre los ciudadanos.

Para tal efecto, el Ministerio de Educación incorpora en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) el área curricular de educación financiera con la finalidad de desarrollar, en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital, el conocimiento sobre el sistema financiero nacional, la importancia del ahorro, la capitalización y el financiamiento de las pensiones.

Artículo 40. Obligación de informar

Anualmente, el Ministerio de Educación (Minedu) presenta un informe al Congreso de la República con datos cualitativos y cuantitativos de los avances y logros obtenidos en la promoción de la cultura previsional en la ciudadanía en general.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), en un plazo máximo de noventa días contados desde la publicación de la presente ley, aprueba las disposiciones reglamentarias para su aplicación inmediata.

SEGUNDA. Emisión de normas adicionales

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), en el ámbito de sus competencias funcionales, establecer mediante resoluciones de superintendencia las normas adicionales que requieran para la mejor aplicación y control de lo dispuesto en la presente ley.

TERCERA. Nuevo Texto Único Ordenando

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo máximo de sesenta días contados desde la publicación de la presente ley, aprueba el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

CUARTA. Plazo de adecuación de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) se adecuará a las disposiciones de la presente ley en un plazo máximo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

QUINTA. Informe de evaluación de resultados de la aplicación de la ley

El Ministerio de Economía y Finanzas presenta a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República un informe de la evaluación y el impacto que genere la aplicación de la Ley transcurridos tres años de su entrada en vigor.

SEXTA. Uso de las tecnologías a favor del ahorro previsional

Las Gestoras de Fondos Previsionales incorporan todos los incentivos de billeteras electrónicas u otros mecanismos innovadores para que los aportantes puedan ahorrar con fines previsionales.

SÉTIMA. Vigencia

La presente ley entra en vigencia el 1 de enero de 2024.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación de los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 7-A, 7-B, 7-C, 7-D, 7-E, 7-F, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 33 y 40 del Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF

Se modifican los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 7-A, 7-B, 7-C, 7-D, 7-E, 7-F,, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 33 y 40 del Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF; los cuales quedan redactados en los siguientes términos:

"**Artículo 1. Objeto del SPP**

El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) tiene por objeto contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema de seguridad social en el área de pensiones, a efectos de otorgar protección ante los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento, y está **constituido por las Gestoras de Fondos Previsionales (GFP) conformadas por las** Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), **así como las empresas de operaciones múltiples y empresas de seguros referidas en la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros que, cumpliendo los requisitos de la presente Ley,** administran los fondos de pensiones a que se refiere el Capítulo II del Título III de la **misma**. Complementariamente, participan del SPP las empresas de seguros que proveen las prestaciones que correspondan, así como las entidades o instancias que participan de los procesos operativos asociados a la administración de los Fondos de Pensiones.

El SPP provee obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio a que se refiere el Capítulo V del Título III de la presente Ley.

[...]

Artículo 3. Cuentas Individuales de Capitalización <u>Acumulativa</u>
El SPP funciona bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización **Acumulativa.**

[...]

Artículo 6. Afiliación a la GFP

Todo ciudadano al alcanzar la mayoría de edad se incorpora al Sistema Previsional mediante la afiliación a una GFP

El plazo para la afiliación del ciudadano a la GFP de su elección es de un año contado a partir de la adquisición de la mayoría de edad. Vencido el plazo antes mencionado sin haber realizado dicha acción, el ciudadano es afiliado a la **GFP** que ofrezca la menor comisión por administración de que trata el inciso a) del artículo 24, según el procedimiento de licitación previsto en el artículo 7-A, o en su defecto, es afiliado en las condiciones que señala el artículo 7-D o la vigésimo primera disposición final y **transitoria**.

El afiliado en una **GFP** que no es la adjudicataria puede cambiar de **GFP** en el momento que así lo decida, salvo lo señalado en la vigésimo primera disposición final y transitoria; el afiliado a una **GFP** que obtenga la adjudicación del servicio de administración de las cuentas individuales de capitalización **acumulativa**, sólo podrá cambiar de **GFP**, en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Si se afilió con anterioridad a la fecha de inicio del período de licitación a que se refiere el primer párrafo del artículo 7-A, salvo lo señalado en la vigésimo primera disposición final y transitoria; o,
b) Si cumplió el período de permanencia a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7-A.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, el afiliado presenta ante la **GFP** a la que desea trasladarse, la solicitud correspondiente. La Superintendencia establecerá las disposiciones reglamentarias sobre la materia.

El empleador que contrate en calidad de independiente a quien, por la naturaleza de los servicios prestados, tiene la calidad de trabajador dependiente, será responsable de regularizar todos los aportes al SPP devengados en el correspondiente período, incluidos los intereses por mora. Esta obligación existe sin menoscabo de las sanciones que aplique el Ministerio de Trabajo y Promoción Social en función de las normas laborales pertinentes.

Artículo 7. Obligación de las GFP de afiliar

Las **GFP** tienen la obligación de afiliar a cualquier **persona** a su solicitud o por motivo de la licitación a que se refiere el artículo 7-A, cuando corresponda y en las condiciones establecidas en la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones generales que emita la Superintendencia.

El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo precedente da lugar a la cancelación de la licencia de funcionamiento de la respectiva **GFP**. En tal caso, el Fondo pasa a ser administrado por otra **GFP**, según como lo determine la Superintendencia.

Artículo 7-A. Licitación del servicio de administración de cuentas individuales de capitalización acumulativa para las personas que se incorporen al SPP

La Superintendencia licitará el servicio de administración de las cuentas individuales de capitalización **acumulativa** de aportes de **las personas** que se incorporen al SPP. En cada licitación se adjudicará el servicio a la **GFP** que, cumpliendo con los requisitos establecidos por el reglamento de la Superintendencia, ofrezca la menor comisión de administración a que hace

referencia el inciso a) del artículo 24. La Superintendencia licitará el servicio de administración de cuentas individuales cada veinticuatro (24) meses.

El plazo de permanencia de un afiliado en una **GFP** adjudicataria, como producto de la licitación realizada, será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de su afiliación en la mencionada **GFP**. Durante este período, respecto a dicho afiliado, la **GFP** adjudicataria no podrá aumentar la comisión a que se refiere el párrafo anterior.

Los plazos señalados en el primer y segundo párrafo del presente artículo, pueden ser modificados en las Bases de Licitación que apruebe y publique la Superintendencia, con posterioridad a la primera licitación que se realice, teniendo en cuenta como límite máximo de modificación, los plazos señalados en los referidos párrafos.

La **GFP** adjudicataria de la licitación deberá aceptar a todos **las personas** que se incorporen al SPP, bajo las condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la licitación. En caso la **GFP** adjudicataria incumpla con esta obligación, se aplicará la sanción señalada en el segundo párrafo del artículo 7.

Artículo 7-B.- Bases de licitación y participación de las GFP

En el proceso de licitación podrán participar las siguientes empresas:

i. Las **GFP** existentes que se encuentren debidamente registradas en la Superintendencia; y,

ii. Las **GFP** en formación; estas son personas jurídicas de capitales nacionales y/o extranjeras que cuenten con el certificado para organizar una **GFP**, expedido por la Superintendencia.

Los requisitos exigidos para el otorgamiento del certificado se establecerán mediante regulación de carácter general y serán calificados previamente por la Superintendencia.

Tratándose de empresas en proceso de organización como **GFP** que cuenten con un certificado, para efectos de brindar el servicio de administración de cuentas individuales de capitalización, deberán haberse constituido como tales y obtener la licencia con anterioridad a la fecha prevista para el inicio de operaciones y captación de nuevos afiliados bajo el proceso de licitación.

Las normas referidas al proceso de licitación en cuanto a la determinación de la publicidad de su convocatoria, plazos, modos de participación, compromisos de los postores, mecanismo de adjudicación y transparencia de información a los nuevos afiliados, entre otros aspectos, serán establecidas en las respectivas Bases de Licitación, las que serán aprobadas y publicadas por la Superintendencia. Las bases de la licitación deben contener como mínimo la siguiente información:

i. Plazo y forma de presentación de las ofertas.

ii. Monto de la garantía de la seriedad de la oferta.

iii. Monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

iv. Período de permanencia en la empresa adjudicataria y período de mantención de la comisión licitada.

v. Procesos y mecanismos de adjudicación y desempate.

vi. Forma y plazo de comunicación de los resultados de la licitación.

vii. Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la Administradora.

Artículo 7-C.- Proceso de adjudicación

La comisión ofrecida en la licitación para los nuevos afiliados que se incorporen al SPP, deberá ser inferior a la comisión por administración de los aportes obligatorios más baja del mercado en los últimos doce (12) meses. La Superintendencia establecerá los lineamientos para determinar la comparación entre los tipos de comisiones señalados por la presente Ley.

La **GFP** adjudicataria de la licitación deberá aplicar y mantener la misma comisión a todos sus afiliados durante el período a que se refiere el primer párrafo del artículo 7-A.

Al término del período mencionado en el primer párrafo del artículo 7-A, la **GFP** adjudicataria podrá fijar libremente el monto de su comisión según lo establecido en el inciso a) del artículo 24, sin perjuicio de su derecho a participar en una nueva licitación. Los afiliados incorporados antes de finalizar este período seguirán pagando la comisión definida en la licitación anterior hasta que finalice su plazo de permanencia, salvo que la **GFP** adjudicataria les ofrezca una menor comisión.

Artículo 7-D.- Situación especial

La Superintendencia, por razones debidamente justificadas en razón de los criterios técnicos que lo ameriten, podrá prorrogar la fecha de realización de una nueva licitación del servicio de administración de las cuentas individuales de capitalización; para tal efecto, la Superintendencia emitirá las disposiciones reglamentarias determinando las causales por las cuales esta prórroga podría ser implementada. La prórroga de la fecha de la nueva licitación en ningún caso supone ampliar el plazo de adjudicación a la **GFP** que resulte ganadora de la licitación a que se refiere el artículo 7-A.

Para la asignación de los nuevos afiliados, en el caso del anterior párrafo, la afiliación del trabajador se realizará a la **GFP** con la menor comisión en los últimos doce (12) meses, salvo que expresamente y por escrito, en el plazo improrrogable de diez (10) días naturales, manifieste su deseo de incorporarse a otra **GFP**.

Artículo 7-E. Posibilidad de traspaso de los nuevos afiliados

Las personas que se hayan incorporado a la **GFP** adjudicataria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7-A, solo podrán traspasarse a otra durante el período de permanencia obligatorio, cuando aquella se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) La rentabilidad neta de comisión por tipo de Fondo de la **GFP** adjudicataria sea menor al comparativo del mercado.
b) Se solicite o se declare en quiebra, disolución o se encuentre en proceso de liquidación.

La Superintendencia establecerá los lineamientos para determinar lo señalado en el literal a) del presente artículo.

Al término del plazo de permanencia obligatoria establecido en el segundo párrafo del artículo 7-A, aquellos afiliados que se incorporaron a la **GFP** adjudicataria, podrán traspasarse libremente a otra **GFP**. Para ello deberán presentar la solicitud de traspaso correspondiente ante la **GFP** a la que desean trasladarse. La Superintendencia establecerá las disposiciones reglamentarias sobre la materia.

Artículo 7-F.- La transferencia de cartera de afiliados

En caso la **GFP** adjudicataria de la licitación transfiera la cartera de afiliados como producto de un proceso de reorganización societaria o bajo cualquier otro título, la entidad adquirente deberá respetar los términos ofrecidos en la

licitación, los que deberán hacerse extensivos a todos los afiliados que queden comprendidos bajo su administración.

[...]

Artículo 19. Constitución del Fondo

Cada Fondo está constituido por la suma correspondiente de las Cuentas Individuales de Capitalización **Acumulativa** de los afiliados que optaron por el mismo.

Las Cuentas Individuales de Capitalización **Acumulativa** pueden ser de Aportes Obligatorios, de Aportes Voluntarios **y de Aportes Complementarios**:

1. Los saldos totales de las Cuentas Individuales de Capitalización de Aportes Obligatorios están integrados por:

    a. Los aportes obligatorios de los afiliados;
    b. Los intereses y penalidades que establezcan los reglamentos;
    c. El producto de la transferencia efectuada por el primer titular o, de la redención de los Bonos de Reconocimiento;
    d. Las ganancias de capital y demás rendimientos que generen los montos de las Cuentas Individuales de Capitalización **Acumulativa**; y
    e. Los saldos correspondientes a los retiros programados y rentas temporales.

2. Los saldos totales de las Cuentas Individuales de Capitalización de Aportes Voluntarios están integrados por:

    a. Los aportes voluntarios que efectúen directamente los afiliados;
    b. Los aportes voluntarios que efectúen los empleadores o terceros en favor de los afiliados;
    c. Los intereses y penalidades que establezcan los reglamentos; y,

d. Las ganancias de capital y demás rendimientos que generen los montos de las Cuentas Individuales de Capitalización **Acumulativa.**

3. **Los saldos totales de las Cuentas Individuales de Capitalización de Aportes Complementarios están integrados por:**

   a. Los aportes del Estado resultantes de la aplicación de los tres puntos porcentuales del impuesto general a las ventas (IGV) de todas las adquisiciones que realicen los afiliados;
   b. Los aportes del Estado por la aplicación de los copagos a los que se refieren los artículos 33, 33-A y 33-B de la presente ley;
   c. Los intereses y penalidades que establezcan los reglamentos; y,
   d. Las ganancias de capital y demás rendimientos que generen los montos de las cuentas individuales de capitalización acumulativa.

Artículo 20. Inembargabilidad del Fondo
Los bienes que integran los Fondos de Aportes Obligatorios, el Encaje Legal, el Fondo de Longevidad, el Fondo Complementario y los aportes voluntarios **y complementarios** con fin previsional y, en general, las garantías que determine la Superintendencia son inembargables.

Artículo 21. Composición de las Cuentas Individuales de Capitalización Acumulativa

La Cuenta Individual de Capitalización **Acumulativa** de cada afiliado queda expresada en 2 libretas de registro denominadas "Libreta de Capitalización **GFP**" y "Libreta Complementaria de Capitalización **GFP**". En la primera se anotan todos los movimientos y saldos de los aportes obligatorios a que se refiere el inciso a) del Artículo 30, de los aportes voluntarios **y complementarios** con fin previsional a que se refiere el Artículo 30 y de los aportes del empleador a que se refiere el Artículo 31, así como las ganancias de todos ellos, debiendo especificarse la naturaleza y origen de cada uno de los aportes. En la segunda

se anotan los movimientos y saldos de los aportes voluntarios del afiliado a que se refiere el cuarto párrafo del Artículo 30, así como sus ganancias.

Las **GFP** deben informar por lo menos cuatrimestralmente y por escrito a sus afiliados de los movimientos y saldos de las Cuentas Individuales de Capitalización **Acumulativa**, sin perjuicio de las solicitudes que a dicho fin puedan efectuar los afiliados.

[...]

Artículo 24. Retribución de las GFP
Las **GFP** perciben por la prestación de todos sus servicios una retribución establecida libremente, de acuerdo al siguiente detalle:

a) **Por el aporte obligatorio de los trabajadores dependientes del régimen general, el aporte obligatorio de los trabajadores independientes, el aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes referidos en el numeral 32.2 del artículo 32, el aporte obligatorio y voluntario con fin previsional de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas referidos en el artículo 33-A, así como por el aporte voluntario con fin previsional de las personas que no tengan la condición de trabajadores dependientes o independientes referidas en el artículo 33-B de la presente ley, se aplica una comisión mixta por productividad que considera la rentabilidad del fondo administrado y está integrada por dos componentes:**

   a.1) Un componente fijo, expresado en términos porcentuales sobre el total del fondo administrado.

   a.2) Un componente variable expresado en términos porcentuales y asociado a la rentabilidad superior a la rentabilidad mínima de los últimos doce meses

Para efectos de la determinación de la procedencia del pago del componente variable de la comisión, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones establece las comparativas de rendimiento a ser utilizadas como base para el cálculo de la rentabilidad mínima de los fondos.

La retribución debe ser aplicada por la **GFP** por igual o todos sus afiliados. Sin embargo, cada **GFP** podrá ofrecer planes de descuento en las retribuciones de los afiliados en función al tiempo de permanencia o regularidad de cotización en la **GFP**. La Superintendencia dictará las normas reglamentarias sobre la materia.

b) Por los aportes voluntarios **sin fin previsional**, una comisión porcentual calculada sobre los referidos aportes voluntarios, en el caso de retiro de los mismos. **Para el presente literal, en caso la GFP no obtenga rentabilidad o genere pérdida, aplica lo establecido en el componente fijo señalado en el literal a).**

[...]

Artículo 29. Origen de los aportes
Los aportes al Fondo pueden provenir de los trabajadores dependientes, **cualquiera que sea su régimen,** de los trabajadores independientes, de los empleadores, **así como de las personas que no tengan la condición de trabajadores dependientes o independientes.** En el primer caso, los empleadores actúan como agentes retenedores.

Artículo 30. Constitución de los Aportes Obligatorios, Voluntarios y Complementarios
Los aportes de los **afiliados al SPP** pueden ser obligatorios, voluntarios **y complementarios**.

Los aportes obligatorios están constituidos por:

a) El 10% (diez por ciento) de la remuneración asegurable destinado a la Cuenta Individual de Capitalización **acumulativa**.
b) Un porcentaje de la remuneración asegurable destinado a financiar las prestaciones de invalidez y sobrevivencia y un monto destinado a financiar la prestación de gastos de sepelio.
c) Los montos y/o porcentajes que cobren las **GFP** por los conceptos establecidos **en el literal a)** del artículo 24 de la presente Ley, aplicables sobre la remuneración asegurable.

Cuando las **GFP** cobren la comisión por retribución sobre la remuneración asegurable desde el día siguiente de la publicación de la presente Ley en el diario oficial El Peruano, deberán realizar una provisión correspondiente a la retribución por la administración de los nuevos aportes, de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 18. Por normas reglamentarias de la Superintendencia, con opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas, se establecerán las condiciones de implementación gradual de la NIC 18.

Los afiliados al SPP se encuentran facultados a efectuar aportes voluntarios con fin previsional, los que tienen la condición de inembargables y están sujetos a retiros al final de la etapa laboral activa del trabajador.

Asimismo, podrán efectuar aportes voluntarios sin fin previsional, los que podrán ser convertidos en aportes voluntarios con fin previsional, los afiliados que así lo soliciten. La Superintendencia determinará las normas complementarias sobre la materia.

Los afiliados al Sistema Previsional Peruano efectúan aportes complementarios con fin previsional. Su tratamiento se rige por la ley de la materia y las normas complementarias que emita la Superintendencia.

Entiéndase por remuneración asegurable el total de los ingresos provenientes del trabajo personal del afiliado, percibidas en dinero, cualquiera que sea la categoría de renta a que deban atribuirse de acuerdo a las normas tributarias sobre renta.

Los subsidios de carácter temporal que perciba el trabajador **afiliado**, cualquiera sea su naturaleza, se encuentran afectos a los aportes al **Sistema Previsional Peruano**.

[...]

Artículo 33. Aportes del trabajador independiente

33.1. A los trabajadores independientes afiliados al Sistema Previsional Peruano que perciban ingresos mensuales que constituyan rentas de cuarta categoría o quinta categoría prevista en el literal e) del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, se les aplica una tasa de aporte obligatorio. Dicha tasa es gradual y diferenciada, conforme al siguiente cuadro:

Año	Ingresos declarados mensuales hasta 1 UIT	Ingresos declarados mensuales mayores a 1 UIT
2024	1 %	2 %
2025	2 %	4 %
2026	3 %	6 %
2027	4 %	8 %
2028	5 %	9 %
2029	6 %	10 %

33.2. Los trabajadores independientes afiliados al Sistema Previsional Peruano que perciban ingresos mensuales menores a una

remuneración mínima vital efectúan aportes voluntarios con fin previsional. El Estado efectúa un aporte, en la cuenta de aportes complementarios con fin previsional del afiliado, hasta una tasa determinada o por la suma equivalente a los aportes del afiliado de conformidad con las previsiones presupuestarias y las condiciones que se establecen en el reglamento de la presente ley. En ningún caso, el aporte del Estado será menor al 50% ni mayor al 100% de la suma equivalente de los aportes del afiliado.

33.3. Las personas, empresas y entidades obligadas a llevar contabilidad de acuerdo al artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta están obligadas a retener los aportes señalados en el numeral 33.2 cuando paguen o acrediten rentas de cuarta categoría o quinta categoría prevista en el literal e) del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta

33.4. En el caso de los trabajadores independientes que perciban ingresos no sujetos a retención, o cuando el agente de retención no cumpla con la obligación de retener los aportes, dichos trabajadores deben declarar y pagar conforme a las reglas de periodicidad que establezca el reglamento. El agente retenedor es solidariamente responsable por los aportes no pagados y por las obligaciones derivadas de ellos.

33.5. Los aportes a que se refiere el presente artículo se determinan mensual y anualmente según corresponda y deben ser declarados y pagados en los plazos establecidos en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Código Tributario.

33.6. Los trabajadores independientes deben declarar y regularizar el pago correspondiente al aporte anual, considerando las retenciones y pagos directos realizados durante el año anterior a la declaración anual.

33.7. Lo dispuesto en los literales b) y c) del segundo párrafo y el cuarto párrafo del artículo 30 de la presente ley se aplica a los aportes voluntarios con fin previsional. Su administración queda a cargo de las GFP sin perjuicio de los convenios que estas puedan celebrar con la entidad centralizadora, a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 14-A, en los que se establecen el lugar, la forma, el plazo y las condiciones para el pago de los aportes.

33.8. En los casos a que se refiere el presente artículo, las GFP pueden elaborar productos cuyas características principales sean la flexibilidad y la adaptabilidad a la frecuencia de los pagos

[...]

Artículo 40. Alcances

Las prestaciones en favor de los trabajadores incorporados al SPP son exclusivamente las de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, y no incluyen prestaciones de salud ni riesgos de accidentes de trabajo.

Los pensionistas de jubilación, invalidez y sobrevivencia del SPP señalados en la presente Ley, se encuentran comprendidos como asegurados obligatorios del Régimen de Prestaciones de Salud, establecido por el Decreto Ley N° 22482, en las mismas condiciones respecto a la tasa de las aportaciones y a las prestaciones de salud que corresponden a los pensionistas del SNP.

La **GFP** o Empresa de Seguros que pague la pensión actuará como agente retenedor, procediendo a efectuar la retención y el pago de dicha aportación al Régimen de Prestaciones de Salud, salvo que medie solicitud por escrito del asegurado a la cual deberá acompañar la documentación que acredite fehacientemente que este se encuentra cubierto por algún programa o régimen de salud privado.

Los afiliados al SPP podrán disponer de hasta el **30**% del fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización de aportes obligatorios para:

a) Pagar la cuota inicial para la compra de un primer inmueble **urbano, cuya única finalidad sea la de casa-habitación,** siempre que se trate de un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema financiero o una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 2 o 3 inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

b) Amortizar un crédito hipotecario, que haya sido utilizado para la compra de un primer inmueble **urbano, cuya única finalidad sea la de casa-habitación,** otorgado por una entidad del sistema financiero o una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera con sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 2 o 3 inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

Dicha afectación podrá darse en cualquier momento de su afiliación."

SEGUNDA. Incorporación de los artículos 33-A y 33-B al Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF.

Se incorporan los artículos 33-A y 33-B al Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF; los cuales quedan redactados en los siguientes términos:

"**Artículo 33-A. Aportes de trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa**

33-A.1. El aporte obligatorio mínimo mensual de los trabajadores de la micro y pequeña empresa que se encuentren bajo los alcances del Texto Único

Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado mediante Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, es establecido mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Dicho aporte no excede del seis por ciento (6%) de la remuneración mínima vital (RMV) correspondiente, sobre la base de doce (12) aportaciones al año. Este aporte es gradual según lo establecido en el literal A párrafo 33.1 de la presente ley.

33-A.2. El afiliado puede efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo obligatorio establecido en el párrafo precedente.

33-A.3. Por cada aporte del afiliado el Estado contribuye con un aporte, en la cuenta de aportes complementarios con fin previsional, a una tasa determinada o por la suma equivalente a los aportes del afiliado. En ningún caso, el aporte del Estado es menor al 50% ni mayor al 100% de la suma equivalente de los aportes del afiliado. La tasa de aporte y las condiciones de la emisión, redención y otras características son señaladas por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas.

33-A.4. El pago del aporte del Estado se efectúa a favor de los afiliados que perciban una remuneración no mayor a 1.5 RMV y se realiza de conformidad con las previsiones presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley.

33-A.5. Lo dispuesto en los literales b) y c) del segundo párrafo y el cuarto párrafo del artículo 30 de la presente ley se aplica a los aportes obligatorios y voluntarios con fin previsional. Su administración queda a cargo de las **GFP**, sin perjuicio de los convenios que estas puedan celebrar con la entidad centralizadora, a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 14-A, en los que se establecen el lugar, la forma, el plazo y las condiciones para el pago de los aportes.

Artículo 33-B Aportes de personas que no tengan la condición de trabajadores dependientes o independientes

33-B.1. Los afiliados que no se encuentren en las categorías de trabajadores dependientes del régimen general o de la pequeña y microempresa ni de los trabajadores independientes pueden efectuar aportes voluntarios con fin previsional en su Cuenta Individual de Capitalización Acumulativa (CICA).

33-B.2. El Estado efectúa un aporte en la cuenta de aportes complementarios con fin previsional del afiliado hasta una tasa determinada o por la suma equivalente a los aportes del afiliado de conformidad con las previsiones presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley.

33-B.3. En ningún caso, el aporte del Estado es mayor al 50% de la suma equivalente de los aportes del afiliado y solo realiza dicho aporte hasta que el fondo acumulado permita asegurar una canasta básica de consumo, determinada por el INEI.

33-B.4. Lo dispuesto en los literales b) y c) del segundo párrafo y el cuarto párrafo del artículo 30 de la presente ley les es aplicable a los aportes voluntarios con fin previsional. Su administración queda a cargo de las **GFP**, sin perjuicio de los convenios que estas puedan celebrar con la entidad centralizadora, a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 14-A, en los que se establecen el lugar, la forma, el plazo y las condiciones para el pago de los aportes.

33-B.5. Los aportes realizados recibirán incentivos progresivos como programa de salud a partir del segundo año de afiliación. Los demás incentivos y condiciones se establecen en el reglamento de la presente ley."

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

CONGRESO
REPÚBLICA

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano".

ÚNICA. Derogación del Capítulo II del Título VIII del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE

Se deroga el Capítulo II del Título VIII del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE

Salvo mejor parecer.
Dése cuenta.
Sala de la Comisión

Lima, 9 de junio de 2023

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TORRES SALINAS Rosio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 16:17:01-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIZARZABURU LIZARZABURU Juan Carlos Martin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 15:21:22-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2023 20:33:54-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2023 09:58:48-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JERI ORE Jose Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 08:22:58-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES RUIZ Victor Seferino FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 15:01:56-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 14:34:31-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTEZA FACHO Silvia Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 09:28:02-0500

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano".

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 15:53:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/06/2023 12:20:13-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/06/2023 12:20:36-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIMACHI QUISPE Nieves Esmeralda FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 16:54:26-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVA PRIETO Maria Del Carmen FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2023 16:43:24-0500

Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano".

Lima, 12 de junio de 2023

Oficio 0533-2022-2023-TERG-CR
Sra. Rosangella **BARBARÁN REYES.**
Presidente Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
Presente. –

De mi especial consideración.

Por intermedio de la presente lo saludo y mediante la presente hago constar mi voto a favor del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano

Lamentablemente, problemas técnicos en la laptop, impiden que pueda firmar el dictamen de manera digital, que se aprobó en la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 9 de junio de 2023, en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, e Inteligencia Financiera.

Sin otro particular, quedo de usted.

Cordialmente.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
TANIA ESTEFANY RAMÍREZ GARCÍA

TANIA ESTEFANY RAMÍREZ GARCÍA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

TERG/rdcch

mp.dictamenes@congreso.gob.pe

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: martes, 13 de junio de 2023 13:05
Para: klarco@congreso.gob.pe
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: 634d4f8cfefb8fcd0a02522afb33a2b9.pdf; 064bf74fb63272dc43d925b522065f08.pdf

[Solicitante]: klarco@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: Se adjunta el Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 118/2021-CR, 344/2021-CR, 551/2021-CR, 866/2021-CR, 912/2021-CR, 1306/2021-CR, 1356/2021-CR, 1513/2021-CR, 1595/2021-CR, 1922/2021-CR, 2047/2021-CR, 2110/2021-CR, 2659/2021-CR, 2718/2021-CR, 2728/2021-CR, 2880/2021-CR, 3133/2021-CR, 3227/2022-CR, 4087/2022-CR, 4200/2022-CR, 4366/2022-CR, 4528/2022-CR, 4743/2022-CR, 4864/2022-CR, 4921/2022-CR y 5150/2022-CR, que propone la "Ley de reforma del sistema previsional peruano". Se indica que la votación aparece en la primera página del dictamen y que se pidio la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados. La Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina voto a favor pero no fue posible conseguir su firma digital. Se adjunta el OFICIO N° 533-2022-2023-TERG-CR de la Congresista Tania Estefany Ramírez García, mediante el cual hace constar su voto a favor.
[Fecha]: 2023-06-13 13:05:03
[IP]: 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.